

San Salvador, 29 de noviembre de 2013.

Sres. Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública**Presentes.-**

Nosotros, Carolina Constanza Baires, con Documento Único de Identidad Coordinadora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Mejicanos; Heli Jeremías Hernández Hernández, con Documento Único de Identidad, mayor de edad, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, empleado del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec"; Marcos de Jesús Portillo Regalo, con Documento Único de Identidad, del domicilio de Suchitoto; Buenaventura Alas Rivera, con Documento Único de Identidad, del domicilio de Suchitoto; Leonor Victoria Pineda vda. de Mejía con Documento Único de Identidad del Domicilio de Suchitoto; Andrés Antonio Romero Santamaría con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto.

A ustedes respetuosamente exponemos:

I. Fundamentación Fáctica de los hechos

El día 28 de octubre del presente año, nosotros, los firmantes del presente escrito, miembros y miembras de la sociedad civil, así como familiares de víctimas del conflicto armado, nos avocamos a la Unidad de información y Respuesta del Ministerio de Defensa, a solicitar información sobre lo siguiente:

Detalle de los operativos militares de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de El Salvador, desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983, cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nominas de las tropas ejecutoras, nominas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollan en ese periodo.

Dicho esto, después de haber interpuesto la solicitud de acceso a la información, esta fue respondida con un periodo extra, por el argumento de que es una información que data de más de 5 años, y estuvimos de acuerdo, porque lo que a nosotras y nosotros nos interesa es que las instituciones públicas respeten el derecho de acceso a la información pública, pero sucede que el Ministerio de la Defensa Nacional, declara mediante resolución emitida el día 23 de noviembre del presente año y notificada el 25 del mismo mes y año que la información solicitada es **inexistente**.

II. Pretensión**Artículo 2 LAIP**

Toda persona tiene derecho a solicitar recibir información generada, administrada o

en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.

El Ministerio de Defensa Nacional, esta obviando lo que por mandato de ley debe respetar como Ente obligado, que es dar la información que administra, respetando la titularidad del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, que tienen este derecho fundamental reconocido por la la ley primario y regulado por la ley secundaria, entiéndase la LAIP, y siendo ustedes los que tienen por mandato de ley, exigir el cumplimiento de esta, pedimos a ustedes exijan la información que solicitamos a dicho ente, obligado, que administra información pública, que no le pertenece.

Artículo 6 de la Constitución de la República.

Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de las personas.

Cuando la carta magna, prescribe un derecho, el estado está obligado a respetarlo, protegerlo y garantizarlo, claro está, por medio de sus instituciones públicas, ya sean administrativas, jurídicas, o legislativas, lo que delimita igualmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa como tal, a respetar este derecho, como ente obligado. La Sala de lo Constitucional en dos sentencias anteriores, por mandato le ha solicitado información sobre dos desapariciones en operativos militares en dos habeas corpus, siendo el caso de María de los Ángeles Mejía No. 133-udv-09 y el caso de Sofía García No 585-udv-08 y hasta el momento estos casos siguen esperando la información del Ministerio de Defensa.

Artículo 82 LAIP.

Interposición del recurso de apelación

La Ley de Acceso a la Información establece el derecho a interponer el recurso de Apelación por parte del solicitante, cuando el Oficial de Acceso a la Información del ente obligado afirme la inexistencia de la información solicitada.

Derecho a la Verdad:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha fundamentado y establecido el Derecho a la Verdad, como un Derecho fundamental, y que puede ser ejercido y satisfecho a nivel colectivo y a nivel individual. A nivel colectivo, es decir a nivel de la sociedad, este Derecho históricamente se ha resarcido mediante informes de las Comisiones de la Verdad, y a nivel individual mediante resoluciones judiciales en las cuales se establece la verdad jurídica de los hechos que rodearon a graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado. En El Salvador, a nivel individual, ha sido prácticamente nula la respuesta a solicitudes de investigación interpuestas por familiares de víctimas, así como en múltiples ocasiones se ha limitado, negado o declarado improcedentes las peticiones de acceso a archivos de instituciones del Estado que pudieren guardar información para aclarar graves hechos que ocurrieron entre la década de 1980 a 1992 en el país.

III. Petitorio

Por tanto, y en base a lo anteriormente expuesto SOLICITAMOS respetuosamente.

a) Se admita la presente escrito de apelación de la resolución emitida por la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de la Defensa Nacional, declarando inexistente la información solicitada en base a la solicitud de información numerada por dicha oficina bajo el código: No. B3.1-015-059/28OCT13.

- 2
- b) Se inicien las respectivas investigaciones
 - c) Se inicie el procedimiento respectivo
 - d) Se notifique a las partes intervinientes.
 - e) Se nos extienda certificación de la sentencia de mérito en el momento procesal oportuno.
 - f) Y por último si este Honorable Instituto considera que se sospecha la mala fe de agravios a nuestros derechos y el ocultamiento de información, gire auto a la la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación correspondiente y de una buena vez, la información sea entregada haciendo efectivo nuestro derecho de acceso a la información.

IV-Prueba Documental:

Presentamos: a) copia simple de la solicitud de información presentada por los abajo firmantes con fecha 28 de octubre, así como copia simple de la notificación de la resolución presentada por la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Defensa Nacional con fecha 25 de noviembre del presente año.

IV- Designación para oír actos de notificación:

Declaramos que lo anterior es verdad. y señalamos para oír notificación el siguiente correo

Y para ser presentada a la sede del Instituto de Acceso a la Información Pública, a los 29 días del mes de noviembre de 2013.

VERSION PÚBLICA. ART. 30 L.I.P.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

Presentado por Heli Jeremias Hernández Hernández
Quién se identifica con DUI a las 10:45 horas
del 29 de noviembre de 20 13. Junto con 2 folios útiles



VERSION PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

San Salvador, 28 de octubre de 2013.

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional

Oficial de Información

Presente

Reciba un cordial saludo y éxito en el desempeño de sus labores.

Nosotros, Carolina Constanza Baires, con Documento Único de Identidad Coordinadora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Mejicanos; Heli Jeremías Hernández Hernández, con Documento Único de Identidad mayor de edad, salvadoreño, del domicilio de departamento de La Libertad, empleado del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec"; María Silvia Guillen, con Documento Único de Identidad Directora Ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), abogada del municipio de San Salvador; Juan Carlos Sánchez Mejía con Documento Único de Identidad Coordinador del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), divorciado, con domicilio en Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, con Documento Único de Identidad empleada de la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), soltera, con domicilio en San Marcos; Marcos de Jesus Portillo Regalo, con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Irma Reyna Arévalo Calderón, con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Buenaventura Alas Rivera, con Documento Único de Identidad del domicilio de ; Omar Alexander Portillo Santos, con Documento Único de Identidad Leonor Victoria Pineda Vda. De Mejía con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Andrés Antonio Romero Santamaría con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto. En virtud de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP) cuyo cuerpo normativo expresa que toda persona tiene el derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, veraz y sin sustentar motivación alguna, venimos a requerir lo siguiente:

- A) Detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de los oficiales y jefes de los destacamentos militar involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como

insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese períodos.

Con el fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado y según lo es establecido en el artículo 19 (LAIP), donde se establece que no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, esperamos recibir dicha información en los plazos estipulados por la ley.

Solicitamos nos notifiquen y envíen la información pertinente a las siguientes direcciones de correos electrónicos: Y nuestros teléfonos de contactos son:

Sin otro particular y en espera de pronta respuesta nos suscribimos de usted.

Atentamente.

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Unidad de Acceso a la Información Pública

RESOLUCION DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN No.B3.1-015-059/28OCT013

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, San Salvador, a las 1000 horas del día 23 de noviembre del 2013, posterior a recibimiento y admisión de la solicitud de información No. B3.1-015-059/28OCT013, presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN) de esta Secretaría de Estado, por parte del Señor HELI JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien se identifica con su DUI número extendido en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, el día 11 de abril de 2012; y considerando que la solicitud libre cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los Arts. 50, 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de la información en el área respectiva siendo imposible localizarla en nuestros registros, por no contar con la misma. Considerando que la Ley de Acceso a la Información Pública dispone en el art. 73 que nos encontramos ante un caso de información INEXISTENTE, lo que impide brindar lo requerido por el peticionario, por lo que esta Oficina de Información CONFIRMA:

¡INFÓRMESE AL SOLICITANTE

NÓ SE PROVEE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INEXISTENCIA.

Con relación a:

Detalle de los operativos Militares de la Fuerza Armada de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes, militares de las operaciones, nómina de las tropas ejecutoras, nóminas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército

Unidad de Acceso a la Información Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla
2250-0134 - oirmdn@faes.gob.sv



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Unidad de Acceso a la Información Pública

como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que este en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese periodo.

Por lo que en esta fecha 25NOV013, se hace del conocimiento al solicitante, tal y como fuera requerido en la solicitud libre; dándose cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, del tiempo legalmente establecido. Se requiere al solicitante acuse recibo de la presente Resolución.



all
JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM.
OFICIAL DE INFORMACIÓN MDN

VERSIÓN PÚBLICA. ASESORIA LEGAL
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

Unidad de Acceso a la Información Pública

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla
2250-0134 - omdn@faes.gob.sv

NUE: 67-A-2013 (JC)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil trece.

Por recibido el escrito presentado de manera conjunta por los ciudadanos CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELI JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, MARCOS DE JESUS PORTILLO REGALO, BUENAVENTURA ALAS RIVERA, LEONOR VICTORIA PINEDA Vda. de MEJIA y ANDRES ANTONIO ROMERO SANTAMARIA, por medio del cual se interpone recurso de apelación contra la resolución de las diez horas del veintitrés de noviembre del año en curso, emitida por la Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional, ente obligado a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) representado por su titular, el servidor público David Munguía Payés.

La apelación se refiere a la inconformidad de los ciudadanos recurrentes, con la mencionada resolución, en la que se declara inexistente la información solicitada, que consiste en: Detalle de los operativos militares que la Fuerza Armada de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán en febrero de 1983; Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluidos los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nóminas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos.

Examinada la apelación se observa que cumple con los requisitos mínimos para su admisión, por lo que de conformidad con los arts. 82, 86, 87 y 102 de la LAIP, y los arts. 201 y 423 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), **RESOLVEMOS:**

Admítese la apelación presentada.

Designese al comisionado Jaime Mauricio Campos Pérez, quien dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión de este recurso, deberá dar trámite al mismo, formar el expediente, recabar pruebas y elaborar un proyecto de resolución que someterá al pleno del Instituto, el cual presentará al finalizar la audiencia oral.

Señálense las NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL, con el representante legal del ente obligado y la parte apelante, debiendo legitimar su personería en el caso de asistir a través de apoderados, a quienes se cita por medio de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a los apelantes por medio del correo electrónico señalado: xxxxxxxxxxxxx y al ente obligado, por medio de su Oficial de Información al correo electrónico de este último: oirmdn@faes.gob.sv, a fin de que su TITULAR rinda informe dentro de un plazo de siete días hábiles a partir de la notificación y ofrezca los medios de prueba idóneos y pertinentes que se conocerán en la audiencia oral, dejándose constancia en el expediente de la remisión realizada.

Hágase saber al titular del ente obligado que las resoluciones de este Instituto se le notificarán por medio técnico, por lo que deberá señalar un correo electrónico o fax para tal efecto y acusar de recibido dentro de las veinticuatro horas siguientes después del envío; caso contrario, toda resolución se le notificará por cartelera o tablero.

Requírase a las partes que de todo escrito que presenten deberán acompañar dos copias del mismo y sus anexos, y remitir una copia escaneada al correo electrónico: notificaciones.iaip@gmail.com.

Notifíquese.





NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Auto de Admisión

NOTIFICACIONES IAIP

4 de diciembre de 2013 11:27

<notificaciones.iaip@gmail.com> Para:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Señores (as):

- Carolina Constanza Baires
 - Heli Jeremías Hernández Hernández
 - Marcos de Jesús Portillo Regalo
 - Buenaventura Alas Rivera
 - Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía
 - Andrés Antonio Romero Santamaría
- Presentes.

A través de este medio, se les adjunta auto de admisión y señalamiento de audiencia, referente al caso IAIP 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.
Teléfono: 2517-2080

2 archivos adjuntos

- IAIP 67-A-2013 Señalamiento de Audiencia (Ciudadanos).pdf
1054K
- IAIP 67-A-2013 Escrito de Apelación.pdf
2037K

Heli Jeremías Hernández xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Responder a: Heli Jeremías Hernández xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

4 de diciembre de 2013 11:41

Buenos días.

Agradeciendo su comunicación, acusamos de recibido sus escritos. Saludos.

El Miércoles 4 de diciembre de 2013 11:27, NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]



NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Auto de Admisión

OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

4 de diciembre de 2013 15:07

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Acusamos de recibido.

feliz tarde.

Saludos Cordiales

Carolina Abrego

Secretaria

Oficina de Información y Respuesta (OIR)

del Ministerio de la Defensa Nacional

Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla

Tel.(503) 2250-0134, Email: oirmdn@faes.gob.sv

De: NOTIFICACIONES IAIP [mailto:notificaciones.iaip@gmail.com]

Enviado el: mié 04/12/2013 11:27

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA

Asunto: NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Auto de Admisión

[El texto citado está oculto]

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Secretaría General

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No. : **SG/OIR-06**
DEPENDENCIA : Secretaría General/OIR-MDN
CLASIFICACIÓN : Confidencial.
FECHA : 05 de diciembre de 2013.
ASUNTO : Remisión de Expediente
CODIGO : B3.1/015

SEÑOR

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ

COMISIONADO IAIP

PRESENTE.-

Con relación al Recurso de Apelación No. NUE: 67-A-2013 (JC), de fecha 02DIC013, y de conformidad al Art. 82 de la LAIP, atentamente remito a usted, dos fotocopia de expediente completo del ciudadano HELI JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, con asignación de Constancia de Recepción No. B3.1-015-059/28OCT013.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM
SECRETARIO GENERAL Y
OFICIAL DE INFORMACIÓN OIR-MDN



Presentado por Milón Vallarta Mundo Cerezo

Quien se identifica con _____
del 5 de Diciembre de 20 13. Junto con apoderante
a las 15:55 horas

Administrativo B.3.1-015-05912809012

Presentado por _____

Quien se identifica con _____ a las _____ horas
del _____ de _____ de 20 _____. Junto con _____



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Secretaría General

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No.	:	SG-018
DEPENDENCIA	:	OIR-MDN.
CLASIFICACIÓN	:	Confidencial.
FECHA	:	12 de diciembre de 2013.
ASUNTO	:	Remisión.
CODIGO	:	B3.102

SEÑOR

JAIME MAURICIO CAMPOS PEREZ
COMISIONADO DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)
PRESENTE.-

Atentamente remito a usted adjunto al presente, original y dos copias del **INFORME DE LEY, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL (MDN), CON RELACION A LA NOTIFICACIÓN DEL IAIP No. NUE: 67-A-2013, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2013;** así también, adjunto el Poder Especial que legitima la personería, para que el suscrito represente al señor Titular del Ministerio de la Defensa Nacional.

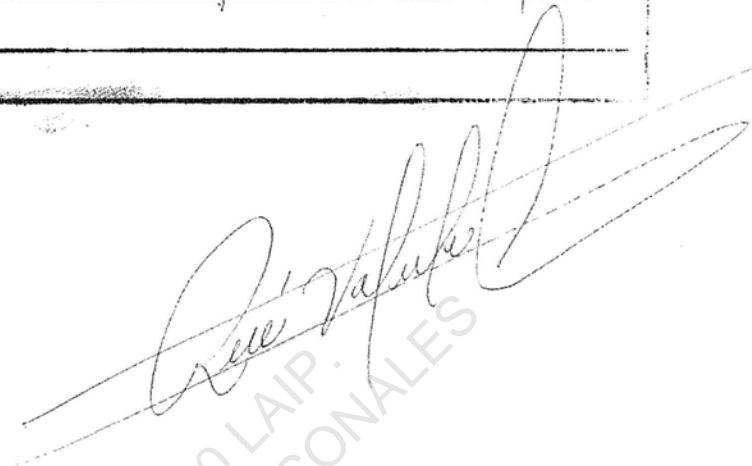
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención al presente.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM
SECRETARIO GENERAL Y
OFICIAL DE INFORMACIÓN OIR-MDN

Presentado por Milton Walberto Mondo Cornejo
Quién se identifica con DUI a las 15:20 horas
del 12 de 12 de 20 13. Junto con Quince folios que
contienen Poder Especial e Informe Suscriptor
David Munguía Payán


VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

INDICE

1.- PODER ESPECIAL

2.- INFORME DE LEY

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

No. 180

Libro 9º

AÑO 2013

Testimonio de Escritura Pública



DE
PODER ESPECIAL

OTORGADA POR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

A FAVOR DE
CNEL. ART. DEM JOEL ANTONIO RIVAS MORENO

ANTE LOS OFICIOS DE
YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO
ABOGADO Y NOTARIO



SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

PAPEL PARA PROTOCOLO



CIENTO SESENTA Y CINCO
M. DE H.

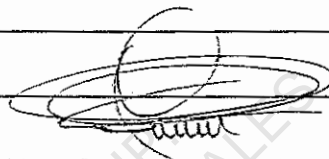
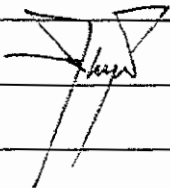


DOS COLONES


1 NUMERO CIENTO OCHENTA. LIBRO NOVENO. PODER ESPECIAL. En la ciudad de San Salvador, a las _____ horas
2 del día tres de Diciembre del año dos mil trece. Ante mi, YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO, Notario, de este
3 domicilio, comparece por una parte el señor DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS, de xxxxxxxxxxxx años de edad,
4 Militar, del domicilio de xxxxxxxxxx, Departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad
5 número _____ y Numero de Identificación Tributaria _____
6 _____ nombre y representación del Estado y Gobierno
7 de El Salvador, en el Ramo de la Defensa Nacional, en calidad de Ministro de la Defensa Nacional, con Número de
8 Identificación Tributaria _____, personería que es
9 legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo dado en Casa Presidencial Número
10 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE de fecha quince de Julio de dos mil trece; en cual consta que el señor Presidente
11 de la República en su Calidad de Comandante General de la Fuerza Armada en uso de las facultades legales y de
12 conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la
13 República, lo nombró y juramento como Ministro de la Defensa Nacional; acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial
14 número CIENTO VEINTINUEVE, Tomo CUATROCIENTOS de fecha quince de Julio de dos mil trece; Y ME DICE: I)
15 Que confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere necesario, a favor del señor
16 CORONEL ARTILLERIA, DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR JOEL ANTONIO RIVAS MORENO, de _____ de
17 edad, Militar, del domicilio de _____ Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad
18 número _____ y Número de Identificación Tributaria _____
19 _____; para que en nombre de la Secretaria
20 de Estado de la cual es titular, inicie, siga y fenezca diligencias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública
21 (IAIP) en los cuales tenga o pueda tener interés el Ministerio de la Defensa Nacional, ante las autoridades
22 administrativas y de cualquier otra índole aunque aquí no se nominen, pues desea que su Mandatario no tenga ninguna
23 dificultad en el ejercicio del Mandato. Asimismo lo faculta para firmar los documentos que fueren necesarios, reciba
24 aquellos que tenga que entregársele, celebrar conciliaciones de cualquier naturaleza y especialmente en materia las

1 que tengan que ver con el Instituto de Acceso a la Información Pública; confiere a su Mandatario las facultades
2 generales del Mandato, todas que expliqué al otorgante, cerciorándome de que la conoce, comprende y por ello las
3 confiere a su Apoderado. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente
4 instrumento el cual leído que le fue por mí, íntegramente, en un sólo acto, sin interrupción, ratifican su contenido y
5 firmamos. DOY FE.-


6
7
8
9



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAI
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



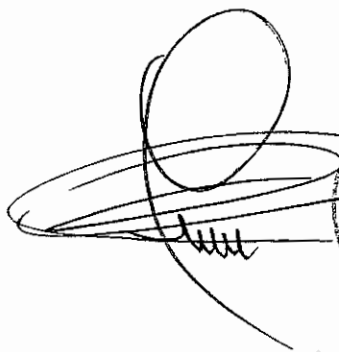

PA...



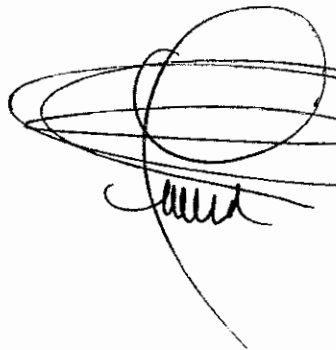

NOTARIO
YACINTO FERNANDEZ
REPUBLICA DE EL SALVADOR

13

...SO ANTE MI del FOLIO CIENTO SESENTA Y CINCO FRENTE Y VUELTO del Libro Noveno de mi Protocolo que vence el día veinte del mes de Junio de dos mil catorce, y para ser entregado al señor **CORONEL DE ARTILLERÍA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**, extiendo, firmo y sello el presente **TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL**, en la ciudad de San Salvador, a los tres días del mes de Diciembre de dos mil trece.

El suscrito Notario CERTIFICA Que el documento anterior que consta de TRES folios útiles, es copia fiel de original que he tenido a la vista y en el cual se confrontó de conformidad al artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. Firmo y sello la presente en cada folio de dicho documento San Salvador DIEZ de DICIEMBRE de DOS MIL TRECE.



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

HOJA No. 1 DE 3 HOJAS
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
OFICINA INFORMACIÓN Y RESPUESTA.
DIC.013
JR.

INFORME DE LEY, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL (MDN), CON RELACIÓN A LA NOTIFICACIÓN IAIP No. NUE: 67-A-2013, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2013.

INTRODUCCIÓN

David Munguía Payés, en mi calidad de Ministro de la Defensa Nacional y en cumplimiento a notificación de fecha dos de diciembre del presente año, mediante el cual, ese Instituto de Acceso a la Información, fundamentado en los Arts. 86 y 87 de la LAIP, resolvió ordenar a esta Secretaría de Estado que rinda el informe de ley, debiendo ofrecer en el mismo las pruebas que considere necesarias para justificar mi actuación y alegar mi defensa en el plazo de siete días hábiles (Art. 88 LAIP); a ustedes rindo informe de ley en la forma siguiente:

1. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN MI ACTUACION Y DEFENSA.

a. El Ministerio de la Defensa Nacional, reconoce que el esfuerzo en la implementación de la transparencia y el acceso a la información pública en el país, constituyen elementos relevantes para la modernización del Estado, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la ejecución de una eficiente y eficaz gestión pública, convirtiéndose en las principales herramientas de desarrollo y anticorrupción; en este sentido, el Despacho que presido ha girado las instrucciones necesarias dentro de la institución para que se acompañe este esfuerzo con la finalidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública.

b. Estas instrucciones y lineamientos generados, han propiciado que el Ministerio de la Defensa Nacional, se encuentre ubicado en el cuarto lugar, dentro de las veintidós Instituciones evaluadas con el 100 % de cumplimiento, basado en la guía de estándares en el RANKING de transparencia; el cual, se encuentra publicado en la página web gobiernoabierto.gob.sv.

2. DETALLES DE LA RESOLUCIÓN No. B3.1-015-059/28OCT013.

a. Con fecha 28 de octubre de 2013, mediante solicitud presentada ante la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN) por el ciudadano HELI JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, requiere de este Ministerio lo siguiente: DETALLE DE LOS OPERATIVOS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR DESARROLLADOS EN TENANGO Y GUADALUPE, SUCHITOTO, CUSCATLÁN, FEBRERO DE 1983 Y EN CANTÓN SAN FRANCISCO ANGULO, TECOLUCA SAN VICENTE, EL 25 DE JULIO DE 1981. INCLUIR LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, LUGARES Y MAPAS DE LOS OPERATIVOS, PARTES E

INFORMES, MILITARES DE LAS OPERACIONES, NÓMINA DE LAS TROPAS EJECUTORAS, NÓMINAS DE LOS OFICIALES Y JEFES DE LOS DESTACAMENTOS MILITARES INVOLUCRADOS, EL NÚMERO DE BAJAS MILITARES, TANTO DEL EJÉRCITO COMO DE LAS FUERZAS INSURGENTES Y CIVILES DE DICHOS OPERATIVOS, Y TODA INFORMACIÓN QUE ESTE EN PODER DE ESE MINISTERIO QUE PERMITA CONOCER E INTERPRETAR EL ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS MILITARES QUE SE DESARROLLARON EN ESE PERIODO, (**ANEXO No. 1, SOLICITUD SR. HELI JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ**).

b. Esa misma fecha veintiocho de octubre, la OIR, de este Ministerio, remitió vía correo electrónico, Constancia de Recepción de la Solicitud No. B3.1-015-059/28OCT013, (**ANEXO No.2, CONSTANCIA DE RECEPCION No. B3.1-015-059/28OCT013**), habiendo iniciado los trámites con las instancias administrativas pertinentes de esta Secretaría de Estado para darle respuesta a la petición en mención.

c. Con fecha treinta y uno de octubre, esta Secretaría, envía mensaje No. SG4887, (**ANEXO No.3, MENSAJE No. SG4887**), dirigido al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), mediante el cual, se le ordenaba remitir a más tardar 140008NOV013, la información pertinente a lo solicitado por el Sr. Hernández Hernández.

d. Con fecha 12NOV013, el Sr. Jefe del EMCFA, remite al Sr. Viceministro de la Defensa Nacional, el Oficio No. 1434, (**ANEXO No.4, OFICIO EMCFA No. 1434**), mediante el cual, informa a esta Cartera de Estado, que después de realizar una exhaustiva búsqueda en los registros que lleva ese Organismo, no se encontraron documentos o registros relacionados a la solicitud suscrita por el Sr. Hernández Hernández.

e. Posterior a la protocolización de la recepción correspondiente, y a la solicitud interna con el ente administrativo (EMCFA); se emitió, con fecha veintitrés de noviembre del presente año, la Resolución de Respuesta a la Solicitud de Información No. B.3.1-015-059/28OCT013, (**ANEXO No.5, RESOLUCIÓN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN No. B.3.1-015-059/28OCT013**); mediante la cual, se da respuesta de la solicitud de información del Sr. Heli Jeremías Hernández Hernández, declarándose como Inexistente de acuerdo al Art. 73 de la LAIP.

3. CONCLUSIONES.

a. El Ministerio de la Defensa Nacional, es respetuoso de la LAIP y su actuar ha sido en toda circunstancia conforme a lo establecido en las normas constitucionales y leyes vigentes de la República.

b. Esta Secretaría de Estado, realizó los requerimientos necesarios para obtener la información solicitada, requiriendo al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), entidad que efectuó la búsqueda exhaustiva en sus archivos de los documentos mencionados en la solicitud, no habiendo sido encontrados, debido a lo cual, fueron declarados INEXISTENTES, de acuerdo al artículo 73 de la LAIP, por parte de esta Secretaría.

c. En este caso particular, de la apelación presentada por el Sr. Heli Jeremías Hernández Hernández, este Ministerio de la Defensa Nacional, considera que NO SE LE HA NEGADO LA INFORMACIÓN, la OIR, llevó a cabo todos los esfuerzos necesarios para obtener la información y darle cumplimiento a la solicitud, siendo el caso, que en la búsqueda realizada por la unidad administrativa no encontró registros alguno en sus archivos de supuestas operaciones.

d. Esta Secretaría de Estado, solicita a ese Instituto, de la manera más respetuosa y de conformidad a los argumentos y pruebas presentadas en el presente Informe de Ley; se pronuncie favorablemente desestimando el recurso y confirmando lo contestado por el Oficial de Información y Respuesta, de conformidad al Art. 96 literal b.

San Salvador, 12 de diciembre de 2013.




DAVID MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.



ANEXOS

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 CAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

ANEXO No.1, SOLICITUD SR. HELI JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ.

3

San Salvador, 28 de octubre de 2013.

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional
 Oficina de Información
 Presente

Reciba un cordial saludo y éxito en el desempeño de sus labores.

Nosotros, Carolina Constanza Baires, con Documento Único de Identidad Coordinadora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Laguder", mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Mejicanos; Heli Jeremias Hernández Hernández, con Documento Único de Identidad mayor de edad, salvadoreño, del domicilio departamento de La Libertad, empleado del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Laguder"; María Silvia Guillén, con Documento Único de Identidad Directora Ejecutiva asociada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), municipio de San Salvador; Juan Carlos Sánchez Mejía con Documento Único de Identidad, Coordinador del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), divorciado, con domicilio en San Miguel Tepezontes; Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, con Documento Único de Identidad empleada de la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), soltera, con domicilio en San Marcos; Marcos de Jesus Portillo Regalo, con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Irma Reyna Arévalo Calderón, con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Buenaventura Alas Rivera, con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Omar Alexander Portillo Santos, con Documento Único de Identidad Leonor Victoria Pineda Vda. De Mejía con Documento Único de Identidad del domicilio de Suchitoto; Andrés Antonio Romero Santamaría con Documento Único de Identidad xxxxxxxx, del domicilio de Suchitoto. En virtud de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP) cuyo cuerpo normativo expresa que toda persona tiene el derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, veraz y sin sustentar motivación alguna, venimos a requerir lo siguiente:

- A) Detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de los oficiales y jefes de los destacamentos militar involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como

2

insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese periodo.

Con el fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado y según lo establecido en el artículo 19 (LAIP), donde se establece que no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, esperamos recibir dicha información en los plazos estipulados por la ley.

Solicitamos nos notifiquen y envíen la información pertinente a las siguientes direcciones de correos electrónicos: _____ Y nuestros teléfonos de contactos son: _____

Sin otro particular y en espera de pronta respuesta nos suscribimos de usted.

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



AUTENTICO:

RIVAS
OIR

ANEXO No.2, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN No. B3.1-015-059/28OCT013**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL***Unidad de Acceso a la Información Pública***CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD****No.B3.1-015-059/28OCT013**

EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, HACE CONSTAR: que el ciudadano **HELI JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, quien se identificó con su DUI número extendido en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, el día 11 de abril de 2012, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP/OIR-MDN), solicitud libre de información, recibida a las 11:00 horas del día 28OCT013 de octubre del 2013, relacionada con el Requerimiento siguiente:

Detallar los operativos Militares de la Fuerza Armada de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitlán, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca San Vicente, el 26 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes, militares de las operaciones, nómina de las tropas ejecutoras, nóminas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que este en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese período.

Asignándose a su solicitud el No. B3.1-015-059/28OCT013, que servirá para realizar las consultas futuras correspondientes. El solicitante ha establecido que para cualquier notificación sobre su requerimiento, defino el medio de comunicación vía email: esmanelli@yahoo.es, planificándose por esta oficina a respuesta a su solicitud de acuerdo a lo establecido por la LAIP según el Art. 71 (20 días hábiles), el día 25 de noviembre del 2013, de no requerirse prórroga alguna. Por lo que, se la agradecerá al solicitante acuse de recibo de la presente constancia de recepción.



JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM.
OFICIAL DE INFORMACIÓN MDN

Unidad de Acceso a la Información Pública
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Kilometro 5 1/2 Carretera a Santa Tecla
2250-0134 - oirmdn@mdn.gob.sv



ANEXO No.3, MENSAJE No. SG4887

8

**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR C.A.**

MENSAJE

PRECEDENCIA
MN SG4887 UT
URG X PRI

SAN SALVADOR, 31 DE OCTUBRE DE 2013

PARA : SR. JEFE DEL EMCFA
DE : SR. VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
CODIGO : B3.1-212D
ASUNTO : SOLICITANDO.

SECRETARIA GENERAL. En cumplimiento a la **LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LAIP)** y a solicitud de información presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN), por el ciudadano **HELI JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**. Atentamente solicito a usted, gire sus instrucciones a donde corresponda a fin de remitir a más tardar a las 140008NOV013, la información siguiente:

Detalle de los operativos Militares de la Fuerza Armada de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes, militares de las operaciones, nómina de las tropas ejecutoras, nóminas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como de las Fuerzas Insurgentes y Civiles de dichos operativos, y toda información que este en poder de esta Secretaria de Estado que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese periodo.



JAIMÉ LEONARDO PARADA GONZALEZ
GENERAL DE AVIACION
VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

JAFM/Abrego-

TXIIIIIIII FLORES



ANEXO No.4, OFICIO EMCFA No. 1434.

CONFIDENCIAL



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
ESTADO MAYOR CONJUNTO
JEFATURA**

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.	
OFICIO No.	1434
DEPENDENCIA	C-VIII/DLAL
CLASIFICACIÓN	CONFIDENCIAL
FECHA	9 2 NOV 2011
ASUNTO	INFORME
CÓDIGO	C11-071

Carolina
1330 12 nov
- por respuesta

SEÑOR VICEMINISTRO:

Respetuosamente informo a esa Superioridad, en cumplimiento a su Mensaje No. SG 4887 de fecha 31OCT013, relacionado a solicitud presentada en la Oficina de Información y Respuesta de esa Secretaría de Estado, por el señor HELI JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Sobre el particular, hago del conocimiento de esa Superioridad, que se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros que lleva este Organismo, de cuyo resultado se ha podido establecer que no se encuentran documentos o registros relacionados a supuestas operaciones militares realizadas por la Fuerza Armada en Tenancingo y Guadalupe, Suchitoto, Departamento de Cuscatlán en el mes de febrero del año 1983 y en Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, Departamento de San Vicente, el 25 de julio de 1981.

Lo que informo a esa Superioridad, para los efectos que estime conveniente.



DIOS UNIÓN LIBERTAD

Rafael Melara Rivera
RAFAEL MELARA RIVERA
GENERAL DE DIVISIÓN
JEFE DEL EMCFA

**AL SEÑOR VICEMINISTRO
DE LA DEFENSA NACIONAL
E. S. D. O.**

RMRCEV34

"Lealtad, Responsabilidad, Decisión"

CONFIDENCIAL



**ANEXO No.5, RESOLUCIÓN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
INFORMACION NO. B.3.1-015-059/28OCT013**



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Unidad de Acceso a la Información Pública

**RESOLUCION DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
No.B3.1-015-059/28OCT013**

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, San Salvador, a las 1000 horas del día 23 de noviembre del 2013, posterior a recibimiento y admisión de la solicitud de información No. B3.1-015-059/28OCT013, presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN) de esta Secretaría de Estado, por parte del Señor HELI JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien se identifica con su DUI número extendido en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, el día 11 de abril de 2012; y considerando que la solicitud libre cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los Arts. 50, 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de la información en el área respectiva siendo imposible localizarla en nuestros registros, por no contar con la misma. Considerando que la Ley de Acceso a la Información Pública dispone en el art. 73 que nos encontramos ante un caso de información INEXISTENTE, lo que impide brindar lo requerido por el peticionario, por lo que esta Oficina de Información CONFIRMA:

INFÓRMESE AL SOLICITANTE

NO SE PROVEE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INEXISTENCIA.

Con relación a:

Detalle de los operativos Militares de la Fuerza Armada de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca San Vicente, el 25 de julio de 1981 Incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes, militares de las operaciones, nómina de las tropas ejecutoras, nóminas de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de hajas militares, tanto del ejército

Unidad de Acceso a la Información Pública
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla
2250-0134 - oirmdn@pres.gob.sv



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Unidad de Acceso a la Información Pública

como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que este en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese periodo.

Por lo que en esta fecha 25NOV013, se hace del conocimiento al solicitante, tal y como fuera requerido en la solicitud libre; dándose cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, del tiempo legalmente establecido. Se requiere al solicitante acuse recibo de la presente Resolución.



al kkkkk
JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM.
OFICIAL DE INFORMACIÓN MDN



AUTENTICO:

RIVAS
OIR

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

NUE: 67-A-2013 UJ/JC

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día trece de diciembre del año dos mil trece.

A sus antecedentes los escritos de fechas cinco y doce de diciembre de dos mil trece, respectivamente. En el primero, el Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional remite a este Instituto el expediente administrativo original que se llevó en la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, junto con dos copias fotostáticas del mismo. En el segundo, se remite informe del General de División **DAVID MUNGUÍA PAYÉS**, actuando en su calidad de Ministro de la Defensa Nacional, junto con el testimonio de poder especial otorgado a favor del Coronel José Antonio Rivas Moreno.

Visto el contenido de dichos escritos este Instituto, de conformidad con los Arts. 82 y 88 de la LAIP, **RESUELVE:**

Agréguese al expediente administrativo.

Admitase el informe de Ley, rendido por el titular del Ministerio de Defensa Nacional, junto con sus anexos, debiendo remitirse a las partes apelantes para su conocimiento.

Téngase por apoderado del titular del Ministerio de Defensa Nacional al Coronel de Artillería Diplomado del Estado Mayor JOEL ANTONIO RIVAS MORENO.

Notifíquese.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Rivas Moreno', with a long horizontal line extending to the right.

CC

enmendado 26 vale R

26



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Auto de Admisión del Informe de Ley

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

17 de diciembre de 2013, 15:15

Señores (as):

Carolina Constanza Baires
Heli Jeremías Hernández Hernández
Marcos de Jesús Portillo Regalo
Buenaventura Alas Rivera
Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía
Andrés Antonio Romero Santamaría
Presentes.

A través de este medio, se les adjunta auto de admisión del Informe de Ley y documentación anexa referente al caso IAIP 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.
Teléfono: 2517-2080

3 archivos adjuntos

IAIP 67-A-2013 Admisión Informe de Ley (Ciudadanos).pdf
375K

OFICIO DE REMISION AL IAIP.pdf
298K

INFORME AL IAIP.pdf
4485K

Helí Jeremías Hernández

18 de diciembre de 2013, 13:30

Responder a: Helí Jeremías Hernández Para:
NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Buenas tardes.

Por este medio, nos damos de recibido de la documentación extendida por el Instituto a nuestras persona en el trámite del recurso de apelación.

Muchas gracias.

enmendado 27 vale



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Auto de Admisión del Informe de Ley

1 mensaje

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

17 de diciembre de 2013, 15:15

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno
Oficial de Información
Ministerio de la Defensa Nacional
Presente.

A través de este medio, se le adjunta auto de admisión del Informe de Ley, referente al caso IAIP 67-A-2013.
Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAFomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

**IAIP 67-A-2013 Admisión Informe de Ley (Oficial de Información).pdf**

401K

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA CORREO ELECTRÓNICO

El Infrascrito Notificador del Instituto de Acceso a la Información Pública, a las 10 horas con 32 minutos del día 18 de diciembre de dos mil trece. Procedo a Notificar en legal forma a Joel Antonio Rivas Moreno

en
calidad de Oficial de Información - Ministerio de Defensa. Diligencia que
realizo por medio del sistema electrónico proporcionado para tales efectos, correo electrónico
oirmcn@faes.gob.sv.

Enviando copia certificada de la resolución pronunciada a las 10 horas con 15 minutos del día 13 de diciembre del año dos mil trece, en el expediente con referencia 67-A-2013, la cual recibió Carolina Abrego, quien manifestó ser Secretaria, confirmado _____ por llamada telefónica al número _____. Todo lo anterior de conformidad

telefónica al número _____ Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en los arts. 102 LAIP, en relación al 178 CPCM, teniéndose el acto por notificado transcurridas las veinticuatro horas posteriores a la fecha de la presente acta. No habiendo nada más que hacer constar extendiendo y firmo la presente.


MILTON EDGARDO HERNÁNDEZ
NOTIFICADOR IAIP.-



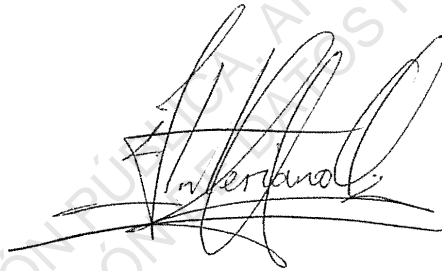


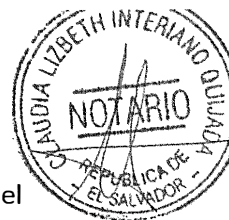
Yo, **ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA**, de _____ de edad, salvadoreño, domiciliado en _____ de Cuscatlán, de oficio agricultor, con Documento Unico de Identidad _____, en las oficinas del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", en San Salvador, DECLARO BAJO JURAMENTO: I. Que el día 28 de febrero de 1983 a eso de las once de la mañana, me encontraba en las riberas del río Quezalapa exactamente en el lugar conocido como "El Triangulo", del Cantón Tenango, municipio de Suchitoto, junto con mi esposa Lidia Menjívar y mis siete hijos de nombres Jorge Alberto Romero Menjívar, José Erick Romero Menjívar, Flor Daysi Romero Menjívar, Walter Antonio Romero Menjívar, Rosario Franklin Romero Menjívar, Jacobo Jime Romero Menjívar, Cristóbal Douglas Romero Menjívar, junto con aproximadamente setenta y seis familias más, pues estábamos huyendo de un operativo militar conocido como "Guazapa Diez", el cual nos obligó a salir de nuestro lugar de habitación el día veinticinco de febrero, ubicado en el Cantón El Zapote ubicado a nueve kms. Al oeste del casco urbano de la ciudad de Suchitoto; que como decía, a las once de la mañana salimos de el lugar donde nos encontrábamos hacia el norte buscando el caserío de Tenango, que al caminar unos doscientos metros, empezamos a recibir descargas de disparos de armas largas, no sabiendo en un primer momento quien nos atacaba, luego de ello retrocedimos unos ciento cincuenta metros para lograr esquivar el ataque, y de ahí observamos que estaba un cordón de la tropa al otro lado del río Quezalapa, que recuerdo que eran miembros de un contingente de la Fuerza Armada pues usaban guerreras estilo militar, color kaki, en ese momento nos encomendamos a Dios, posteriormente nos retiramos cuarenta varas al oeste del camino que seguíamos, luego observamos que los elemento militares cruzaron el río y se acercaron y nos empezaron a hacer descargas de sus armas durante unos cinco minutos, en ese momento hirieron a la mayoría del grupo, muriendo mi hija Flor Daysi, a continuación de eso nos retiramos detrás de una "lomita", y en ese momento nos apuntó una persona vestida con uniforme militar –quien portaba un gorro verde y uniforme kaki y una arma larga de fuego-, y nos ordenó que nadie nos moviéramos, luego nos ataron a todos y nos llevaron caminando hacia el oriente en las primeras casas del Cantón Tenango, en ese momento observé una gran cantidad de tropa militar en el Cantón, y reparé que en la parte elevada del Cantón Tenango estaban ubicadas una gran cantidad de ametralladoras, las cuales estaban siendo accionadas, y presencia de aviones los cuales también observé que estaban lanzando bombas, no recuerdo que tipo de aviones eran, que a eso de las seis de la tarde se redujo el ruido de las armas y bombardeos, que posteriormente al hecho, en horas de la noche llegaban elementos militares al parecer oficiales a golpearme, luego en la madrugada oí que mandaron a pedir picos y palas para abrir una fosa, a las ochode la mañana me trasladaron en un helicóptero junto a tres de mis hijos, al lugar conocido como "El Roblar" en el Cerro de Guazapa, nos bajaron y nos llevaron a una casa donde fui torturado todo el día, poniéndome una capucha en la cabeza, esto sucedió hasta las cinco de la tarde, me hicieron preguntas sobre mi pseudónimo, y que dónde estaban las armas, que dichas personas que me hicieron las torturas eran elementos de la Policía de Hacienda, y me dijeron que colaborara que si no me subirían al helicóptero y me iban a aventar al vacío, a esa hora de las cinco de la tarde me trasladaron al cuartel de la Policía de Hacienda, vía helicóptero y que ahí estuve detenido diecisiete días y luego fui trasladado al Penal de Mariona, II. Que quiénes participaron en el operativo eran miembros del Batallón Atlacatl, pues me enteré luego de hacer una investigación

con personeros de la Cruz Roja Internacional para ubicar a mis hijos de quien me había sido separado; las fotografías de mis hijos las encontré en un álbum que nos fue mostrado en las instalaciones de dicho Batallón, que recuerdo que estaba ubicado en las inmediaciones del Caballería en el municipio de San Juan Opico. III. Declaro que todo lo dicho es la verdad, y que me consta de vista y de oídas todo lo escrito. En San Salvador, a los seis días del mes de enero de dos mil catorce.

ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA

DOY FE. Que la firma que calza el antecedente documento, es AUTENTICA, por haber sido suscrita y plasmada en mi presencia, por el señor ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA, de _____, salvadoreño, del domicilio de Suchitoto, Cuscatlán, de oficio agricultor, con Documento Unico de Identidad _____ En San Salvador, a los seis días del mes de enero de dos mil catorce.





Yo, **ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA**, de _____ años de edad, salvadoreño, del domicilio de _____ Cuscatlán, de oficio agricultor, con Documento Unico de Identidad _____, en las oficinas del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, en San Salvador, DECLARO BAJO JURAMENTO: I. Que el día 28 de febrero de 1983 a eso de las once de la mañana, me encontraba en las riberas del río Quezalapa exactamente en el lugar conocido como “El Triangulo”, del Cantón Tenango, municipio de Suchitoto, junto con mi esposa Lidia Menjívar y mis siete hijos de nombres Jorge Alberto Romero Menjívar, José Erick Romero Menjívar, Flor Daysi Romero Menjívar, Walter Antonio Romero Menjívar, Rosario Franklin Romero Menjívar, Jacobo Jime Romero Menjívar, Cristóbal Douglas Romero Menjívar, junto con aproximadamente setenta y seis familias más, pues estábamos huyendo de un operativo militar conocido como “Guazapa Diez”, el cual nos obligó a salir de nuestro lugar de habitación el día veinticinco de febrero, ubicado en el Cantón El Zapote ubicado a nueve kms. Al oeste del casco urbano de la ciudad de Suchitoto; que como decía, a las once de la mañana salimos de el lugar donde nos encontrábamos hacia el norte buscando el caserío de Tenango, que al caminar unos doscientos metros, empezamos a recibir descargas de disparos de armas largas, no sabiendo en un primer momento quien nos atacaba, luego de ello retrocedimos unos ciento cincuenta metros para lograr esquivar el ataque, y de ahí observamos que estaba un cordón de la tropa al otro lado del río Quezalapa, que recuerdo que eran miembros de un contingente de la Fuerza Armada pues usaban guerreras estilo militar, color kaki, en ese momento nos encomendamos a Dios, posteriormente nos retiramos cuarenta varas al oeste del camino que seguíamos, luego observamos que los elemento militares cruzaron el río y se acercaron y nos empezaron a hacer descargas de sus armas durante unos cinco minutos, en ese momento hirieron a la mayoría del grupo, muriendo mi hija Flor Daysi, a continuación de eso nos retiramos detrás de una “lomita”, y en ese momento nos apuntó una persona vestida con uniforme militar –quien portaba un gorro verde y uniforme kaki y una arma larga de fuego-, y nos ordenó que nadie nos moviéramos, luego nos ataron a todos y nos llevaron caminando hacia el oriente en las primeras casas del Cantón Tenango, en ese momento observé una gran cantidad de tropa militar en el Cantón, y reparé que en la parte elevada del Cantón Tenango estaban ubicadas una gran cantidad de ametralladoras, las cuales estaban siendo accionadas, y presencia de aviones los cuales también observé que estaban lanzando bombas, no recuerdo que tipo de aviones eran, que a eso de las seis de la tarde se redujo el ruido de las armas y bombardeos, que posteriormente al hecho, en horas de la noche llegaban elementos militares al parecer oficiales a golpearme, luego en la madrugada oí que mandaron a pedir picos y palas para abrir una fosa, a las ochode la mañana me trasladaron en un helicóptero junto a tres de mis hijos, al lugar conocido como “El Roblar” en el Cerro de Guazapa, nos bajaron y nos llevaron a una casa donde fui torturado todo el día, poniéndome una capucha en la cabeza, esto sucedió hasta las cinco de la tarde, me hicieron preguntas sobre mi pseudónimo, y que dónde estaban las armas, que dichas personas que me hicieron las torturas eran elementos de la Policía de Hacienda, y me dijeron que colaborara que si no me subirían al helicóptero y me iban a aventar al vacío, a esa hora de las cinco de la tarde me trasladaron al cuartel de la Policía de Hacienda, vía helicóptero y que ahí estuve detenido diecisiete días y luego fui trasladado al Penal de Mariona, II. Que quiénes participaron en el operativo eran miembros del Batallón Atlacatl, pues me enteré luego de hacer una investigación

con personeros de la Cruz Roja Internacional para ubicar a mis hijos de quien me había sido separado; las fotografías de mis hijos las encontré en un álbum que nos fue mostrado en las instalaciones de dicho Batallón, que recuerdo que estaba ubicado en las inmediaciones del Caballería en el municipio de San Juan Opico. III. Declaro que todo lo dicho es la verdad, y que me consta de vista y de oídas todo lo escrito. En San Salvador, a los seis días del mes de enero de dos mil catorce.

ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA

DOY FE. Que la firma que calza el antecedente documento, es AUTENTICA, por haber sido suscrita y plasmada en mi presencia, por el señor ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA, de s de edad, salvadoreño, del domicilio de Cuscatlán, de oficio agricultor, con Documento Unico de Identidad . En San Salvador, a los seis días del mes de enero de dos mil catorce.



enmendado 31 vale R 34

0.40
EJEMPLAR

El Diario de Hoy

Auditada por ABC
Diaria 110,173
Dominical 87,901
Caj. 1981 Septiembre 30, 1982

Págs. Año XLVI N° 15924 San Salvador, El Salvador, Martes 22 de Febrero de 1983. N. VIERA ALTAMIRANO-Fundador

MAESTROS HUYEN DE SUCHITOTO

(Detalles en Página 3)

Contraofensiva de F.A. en Guazapa y Suchitoto

Aviones de combate bombardearon ayer el volcán de Guazapa, mientras 4,000 soldados del Ejército trataban de romper el cerco guerrillero que tiene sitiada a la ciudad de Suchitoto.

Los extremistas —informa un cable de la AP— respondieron con un ataque contra las instalaciones de comunicaciones por satélite, acciones de hostigamiento y atentados dinamiteros en Chalate-

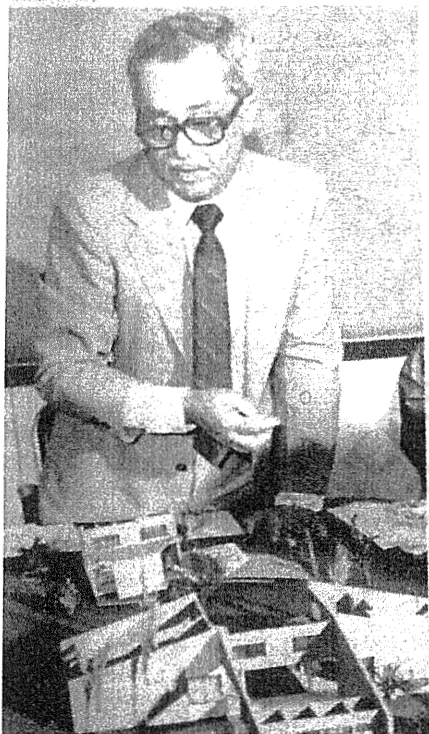
nango.

Entre 15 y 20 subversivos armados con bazucas atacaron el domingo la antena de comunicaciones por satélite ubicada en las afueras de San Julián, interrumpiendo parcialmen-

te los servicios telefónicos y de telex. Informó un vocero de ANTEL.

El vocero dijo que dos proyectiles hicieron blanco en la antena parabólica

—Favor pase a la página 22.



CRUZ ROJA CRECE. — Seis nuevas seccionales de Cruz Roja Salvadoreña serán fundadas este año en diversos lugares del país, con financiamiento de la Liga de Sociedades y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Una seccional cuenta con lo indispensable para atender todo tipo de emergencia, es decir, son pequeños hospitales. El proyecto presentado por Cruz Roja Salvadoreña es de 36 seccionales en total, de las cuales se construirán 6. Don Ricardo J. López, Presidente, da explicaciones sobre los locales haciendo uso de una maqueta.



17 MILLONES PARA CREDITO. — Los vendedores de billetes de lotería en pequeño, serán beneficiados este año al otorgárseles crédito la institución hasta por 17 millones de colones. En los últimos años, la lotería les ha prestado hasta doce millones de colones, pero este año aumenta en cinco millones. El señor Rafael Villavicencio (derecha) Presidente, acompañado de ejecutivos les da la noticia a vendedores que se mostraron satisfechos.

Handwritten note:
H/2014 Vago constatar que esta
fotocopia corresponde al origi-
nal del perico diario



Contraofensiva

Viene de la 1ª página.

y dos en la base de la misma. Agregó que no tenía idea de cuándo será reparado el daño.

Durante el lunes, las comunicaciones directas continuaban interrumpidas con Estados Unidos y Europa, y eran canalizadas por la vieja red de microondas a través de Centro y Sur América.

Unos 330,000 habitantes de Chalatenango, agrega el cable de la AP, continuaban sin electricidad, luego que los terroristas dinamitaron dos líneas de distribución eléctrica la noche anterior. Muchas comunidades carecían incluso de agua potable.

Al rodear Suchitoto y controlar la carretera de 40 Kms. que la une con la capital, los subversivos están en condiciones de amenazar seriamente el suministro de energía eléctrica a todo el país. Las dos represas hidroeléctricas del Lago Suchitlán, suministran más de la mitad de la energía eléctrica disponible. Los extremistas controlan asimismo un importante acceso carretero a Suchitoto y la otra ruta ha sido minada.

En los ataques contra el

INSTITUTO NACIONAL DEL CAFE**INTERNACIONALES (46 KGS.)****PRECIOS DEL CAFE****CONTRATO "C"**

	DIFERENCIAL CERREAL	PRECIOS INDICATIVOS EX-MUELLE NEW YORK 17/FEVERO/83
CERRADO EL MERCADO		COLOMBIANOS \$ 147.00
INTERNACIONAL POR SERVICIA		OTROS SUAVES \$ 123.08
FESTIVO		BRASILEÑOS \$ —
		ROBUSTOS \$ 122.00
		PROM. G.S. Y ROBUSTAS \$ 124.51

NOTA: LOS PRECIOS INTERNACIONALES QUE SE PUBLICAN DIARIAMENTE CORRESPONDEN AL CONTRATO "C" POR QUINTAL ORO PUESTO EN BODEGAS CERTIFICADAS DE NEW YORK, LOS CUALES INCLUYEN GASTOS DE ALREDEDOR DE US\$12.00 POR FLETE Y SEGUROS, PERDIDA DE PESO, REPEJO Y MUESTREOS, CERTIFICACION, COMISION Y OTROS GASTOS. LOS QUE HAY QUE DEDUCIR PARA ESTABLECER EL PRECIO EQUIVALENTE FOB PUERTO SALVADOREÑO.

LOCALES

	PRECIOS DE CAFE SUAVE PRECISO PUESTO EN BODEGAS CERTIFICADAS	PRECIOS DE CAFE SUAVE PRECISO PUESTO EN BODEGAS CERTIFICADAS
CENTRAL STANDARD	\$ 146.00	\$ 146.00
CENTRAL ALTURA	\$ 146.00	\$ 146.00
CENTRAL EST. ALTURA	\$ 132.00	\$ 132.00

AVISO: Cereza caeca de matorral, café verde (trazado), café y de ventaja y papas de la cosecha de 1982.

COMISIONES: a) Forma de pago: 100% Efectivo.
b) Los productores de café y los productores de azúcar deben entregar sus productos en el momento de la compra.

NOTA: El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

1.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

2.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

3.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

4.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

5.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

6.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

7.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

8.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

9.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

10.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

11.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

12.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

13.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

14.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

15.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

16.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

17.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

18.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

19.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

20.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

21.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

22.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

23.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

24.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

25.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

26.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

27.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

28.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

29.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

30.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

31.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

32.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

33.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

34.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

35.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

36.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

37.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

38.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

39.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

40.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

41.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

42.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

43.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

44.- El precio publicado para el servicio de todos los productos de café y azúcar debe ser el mismo para todos los productores.

Piden Sacar

Viene de la página 2.

contrato a 50 kilómetros al norte de San Salvador, cerca del lugar de una gran ofensiva militar.

Mientras tanto, un vocero militar dijo que una misión de rescate del ejército encontró ayer los cadáveres de 21 soldados muertos

fin de semana, incluyendo el pueblo El Mozote, a 15 Kms. al sur de Perquin. Estos informes fueron negados por el Cnel. Miguel Méndez, comandante de la Guardia Nacional en San Francisco, Gotera, concluye el cable de AP.

la semana pasada cuando su patrulla de 37 hombres fue emboscada por los insurgentes cerca de la ciudad de Zacatecoluca.

Otros cuatro soldados fueron heridos, pero lograron escapar. Otros 12 fueron capturados por los terroristas.

Un vocero militar dijo que el ejército encontró ayer los cadáveres y que los izquierdistas pusieron en libertad a los 12 capturados.

Intentan Linchar

Viene de la página 5.

colectivo.

Un vecino del lugar, que notó la presencia de los terroristas, dio aviso al puesto de guardia de Aguilares, desde donde enviaron una patrulla que hizo huir a los extremistas.

En El Pámal ocurrió un hecho similar. Los terroristas huyeron cuando una patrulla militar se presen-

tó al sitio donde se dio el asalto.

Los terroristas logran asaltar nuestros vehículos, se roban a los pasajeros, llevan la mercancía, muchas cosas de las unidades, etc. colaboración de con las autoridades, logrado frustrar intentos de esa naturaleza en la Pu. de Prensa de la Pu. ma.

PROCAÑA PIDE RESPUESTA A LA CAFETALERA

La Asociación de Productores de Café de Antic —PROCAÑA— pide al INCAFE atiende las demandas que públicamente ha solicitado la Asociación Cafetalera de El Salvador. En un sistema democrático debe darse respuesta a las peticiones ciudadanas y en tal sentido, se exige que a los cafetaleros se les hagan saber las estadísticas de ventas de café, los balances respectivos y todo movimiento que incide en el gremio Cafetalero.

PROCAÑA se permite recordar, que conforme al artículo 162 de nuestra Constitución Política, toda persona puede pedir a las autoridades sobre lo que le concierne y estas a resolver lo pedido.

PROCAÑA pregunta: ¿cuál sería la posición de INCAFE si no contesta a la Cafetalera?

JUNTA DIRECTIVA DE PROCAÑA**TELEGRAMA**

382/1 AL SAN MARTIN FEB 20/83 41 TFG 2.10 1145 1220

TELEF 21

JUNTA DE GOBIERNO

ASOCIACION CAFETALERA DE EL SALVADOR

CUARTO PISO EDIFICIO INCAFE

SAN SALVADOR.

Directivos y Cafetaleros esta Departamental manifiestan respaldo incondicional felicitando Junta de Gobierno Cafetalera por Emplazamiento INCAFE, por falta consideración a los productores del rubro que más trabajadores sostiene y más ingresos ha aportado y aun aporta al Estado.

JUNTA DEPARTAMENTAL CAFETALERA DE SAN SALVADOR

San Salvador, 17 de febrero de 1983

Señores

Junta de Gobierno de la

Asociación Cafetalera de El Salvador

Ciudad.

APOYAMOS SOLIDARIAMENTE EMPLAZAMIENTO PUBLICO. AL SEÑOR PRESIDENTE DEL INCAFE. PRESENTADO POR LA ASOCIACION CAFETALERA DE EL SALVADOR.

FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE DE EL SALVADOR DE R.L. FENACITES DE R.L.

TELEGRAMA

440-2354EA/SAN MIGUEL, FEB 18/83 21/100 1030 1111

JUNTA DE GOBIERNO

ASOCIACION CAFETALERA DE EL SALVADOR

EDIFICIO INCAFE CUARTO PISO

SAN SALVADOR.

Con ustedes solidariamente por emplazamiento publico al Presidente de INCAFE y le exigimos una pronta y clara respuesta.

JUNTA DEPARTAMENTAL CAFETALERA DE SAN MIGUEL**CAMPO CAFETALERO**

Los impuestos tienen que pagarse dice hoy el Ministro de la Agricultura, pero no hay más prórroga.

Nosotros los cafetaleros también queremos manifestar que el hambre a nuestras familias y las de los campesinos.

¿Crean que nosotros sí debemos darle más prórroga al Gobierno y al INCAFE, si ni siquiera nos han pagado el último 30% de la cosecha de 1981?

¿Con qué vamos a pagar impuestos si estamos como "vergonzantes" sin poder cumplir nuestros compromisos, obligados con lo estrictamente necesario para subsistir?

Este es el premio que nos dan por haber trabajado el café nuestra vida y por ende haber mantenido la columna vertebral de nuestra amada patria El Salvador?

Se puede llamar a esa actitud "Justicia" con miles de vidas que no tienen otro medio de vida y que dan trabajo casi a medio de trabajadores del campo cada año.

Tienen la palabra señores del Gobierno.

Solidariamente apoyamos el Emplazamiento Público al señor Angel Solorzano publicado por la Asociación Cafetalera de El Salvador y exigimos con todo respeto que se merezca el señor Presidente de la República, Dr. Alvaro Magaña, que intervenga a que se den respuestas concretas.

San Salvador, 21 de febrero de 1983.

COMITE FEMENINO GERARDO BARRAL
PRO-DEFENSA DEL CAFE.



Tomado del original el 9/01/2014
py gfg



127,366

117,642

Año LXVIII - N° 24,511

GRAN DECOMISO EFECTUA LA F.A.

—Página 2—

Por huellas capturan a plagiarios

—Página 2—



PRENSION. El señor David Heredia, en representación de Belice, era un árbol en el Bosque de la "Comprensión Rotaria". Lo ministraron los delegados de Centro América y Panamá, que participan Quincuagésima Conferencia Rotaria. Al fondo, dirigentes rotarios acudidos.

ENORME DECOMISO. Grandes cantidades de armas, bombas, municiones, alimentos, medicinas, herramientas para construir o reparar armas y otros pertrechos fueron decomisados por el ejército en Palo Grande, jurisdicción de Suchitoto. Los coronados Adolfo Blandón (derecha), Domingo Manterrosa (centro) y Zepeda, inspeccionaron ayer la zona.

Fotocopia tomada del periódico por el día 9/01/2014



Gran decomiso en "limpia" de F.A.

Uno de los mas grandes campamentos instalados en Palo Grande, jurisdicción de Suchitoto, fue desmantelado por efectivos de la Fuerza Armada, capturando enorme cantidad de armas, municiones, medicinas, instrumentos quirúrgicos y muchos otros pertrechos de guerra.

Cerca de ese campamento, considerado por la subversión como un campo de instrucción de terroristas, fueron decomisados un gallinero, 3 unidades sanitarias, una fabrica de bombas, un taller mecánico para reparación de armas, una bodega de viveres, un taller fo-

toográfico, 2 ametralladoras calibre 50, 2 morteros calibre 60, alambre para conexiones eléctricas, 3 motores, 50 bombas de contacto, 30 bombas Claymore, 24 fusiles y fuertes cantidades de medicinas, según declaró en coronel Adolfo Blandón.

Antes de retirarse, los terroristas dejaron abandonados 45 cadáveres, dijo la fuente militar.

La Fuerza Armada ha desalojado por completo a los grupos extremistas que son perseguidos por el Ejército, declaró el citado jefe militar.

El Ejército ha desmantelado también otros campamentos.

Pasa a la página 27

Anormal servicio agua S. Martín y Perulapia 2 días

Desperfectos mecánicos sufridos por el equipo de bombeo que venia prestando servicios a los sectores de San Martín y Perulapia, impedirán el servicio normal de agua hoy y mañana, a los habitantes de esos lugares.

Así lo manifestó un vocero de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Los desperfectos ocurrieron ayer e inmediatamente se giraron las instrucciones del caso, para que una cuadrilla de esa institución comenzara las reparaciones del equipo dañado.

Por de pronto, agregó, se dará servicio con camiones-cisternas para las necesidades más urgentes y se espera que el domingo ya esté habilitado el equipo que se deterioró.

Pasa a la página 13

CAMPAMENTO DESMANTELADO. Aspecto parcial de todo lo que efectivos militares decomisaron en el Cantón Palo Grande, jurisdicción de Suchitoto. Según voceros de la Fuerza Armada, fueron desmantelados los campamentos de El Roblar, Mirandín, La Presa, El Cumbo y Palo Grande. En esta foto pueden verse armas, bombas Claymore, de contacto, aparatos de sonido y comunicación, medicinas, etc.

Beneplácito por visita del Papa en Miramonte

Su beneplácito por la llegada del Papa Juan Pablo II a nuestro país exponen miembros directivos de la Comunidad Miramonte.

El pueblo salvadoreño, dicen, no puede permanecer indiferente a este magno suceso, ya que dentro de

él existen criterios mayoritarios favorables, que demuestran beneplácito por la llegada del Santo Padre, estimándose además que Juan Pablo II constituye una personalidad a nivel mundial, de la cual no

Pasa a la página 22

Detalles sobre la visita del Papa

Aún no se ha determinado cuántos hombres prestarán la seguridad del Papa Juan Pablo II, en su recorrido del ropuerto de Ilopango a Metrocentro, declaró ayer el Cnel. Julio César Yáñez, de la Comisión de Seguridad Iglesia-Gobierno.

Aseguró sí que en todo el trayecto a recorrer en el "papamóvil" Juan Pablo II habrá cordones de seguridad, así como en Metrocentro lugar donde oficiará Su Santidad ante más de 500 mil salvadoreños.

Se especificó que técnicos en diseño de automóviles, trabajan en la adaptación del vehículo que transportará al Papa desde el Aeropuerto de Ilopango hasta Metrocentro, el domingo 6 de marzo.

Entre las remodelaciones que hacen al vehículo, se dijo, está el sistema de protección con vidrios blindados a prueba de balas. Tendrá también aire acondicionado para dar confort al interior del carro. Como Juan Pablo II hará su recorrido lo

Pasa a la página 13



ALTO MANDO EN SUCHITOTO. Los miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada, visitaron ayer por la tarde la ciudad de Suchitoto, efectuando el recorrido por la carretera, donde pudieron ver los daños causados por los grupos rebeldes. El presi-

dente, Dr. Álvaro Magaña, cambió impresiones con el ministro de Defensa, general José Guillermo García. Les acompañan los coroneles Rafael Flores Lima, Adolfo Blandón y otros jefes militares.

Foto de LA PRENSA, por Aldana.



PLAGIARIOS. Fidel de Jesús Monge Landaverde, Roberto Antonio Pérez Monge, Rigoberto Hernández Hernández, Roberto Lara Arévalo y Armando Alfredo Chicas Montes, capturados por la Policía Nacional, acusados del secuestro de doña Antonia Landaverde Ruiz de García Prieto, declaran que pedían un millón de colones de rescate por liberarla.

donado en las cercanías de Cuscatancingo, a principios de febrero.

Por huellas digitales apresaron a plagiarios

El Grupo Especial Anti-Secuestros (GEA), de la Policía Nacional, por medio de unas huellas digitales capturó a los plagiarios de doña Antonia Luisa Jerez de García Prieto, informa un portavoz de ese cuerpo.

Ayer, al ser presentado en esa institución cinco de los seis secuestrados, un oficial explicó que el punto de partida para la detención de los imputados, fueron unas huellas digitales encontradas en unos anteojos oscuros que dejó Armando Alfredo Chicas Montes, en el vehículo que utilizaron para el plagio. Dicho automotor fue abandonado en las cercanías de Cuscatancingo, a principios de febrero.

Esas huellas, asegura la fuente, fueron comparadas con las que contiene la tarjeta de afiliación como militarista del referido individuo, que se encuentran los archivos de la Policía Nacional, hasta entonces sin antecedentes de cuenciales.

Se comenzó a investigar a Chicas Montes, para al tener las pruebas suficientes se proceda a su captura y a continuación de Jesús Landaverde y de Roberto Antonio Jerez Ruiz de García Prieto, declaran que pedían un millón de colones de rescate por liberarla.

Pasa a la página 13



RECONOCIDO. Mauricio Orellana Pino, falleció en la Calle Principal de Antiguo Cuscatlán. Su cadáver fue reconocido por las autoridades judiciales.



MUERE. (Quezaltepeque). Jaime Gilberto Maldonado, alumno de la Escuela "Miguel Ángel García", falleció al ser mordido por un perro con rabia. Residía en colonia Murillo.

Juez reconocio ayer 3 muertos

Tres reconocimientos practicó en las últimas 24 horas el juez 2o. de Paz, se informó en el Centro Judicial "Isidro Menéndez". Los cadáveres correspondían al cobrador de buses Maximiliano Velásquez Ventura, de 17 años, quien sobrevivió al caer de un bus y de las soldadas Oscar García Linares y Juan Francisco Sandoval Rivera.

El joven Velásquez Ventura —se informó—, reconocido por el juez 2o. de Paz.

Pasa a la página 27

Rechazan cargo a Pdte. INCAI

La Cooperativa Algodonera Salvadoreña, se manifiesta ofendida por recientes declaraciones del presidente del Instituto Salvadoreño del Café, IN-CAFE, Lic. Miguel Ángel Solórzano.

Las mencionadas declaraciones las consideramos falsas y lesivas a nuestra institución", pues el Lic. Solórzano afirma que "la nacionalización del comercio exterior, hasta el momento ha sido el dique más poderoso construido para detener la fuga de divisas, las cuales se escapaban del país por medio de las transacciones de algodón, azúcar y cacao", señala la cooperativa, por medio de su secretario de gerencia, Ing. Efraín La Cooperativa, agrega que tiene el deber de defender las posiciones del INCAFE, por lo que al momento del presente mismo medio de ofendida, por las declaraciones de la fundación de la cooperativa en 1970, controladas por el INCAFE.

La Cooperativa Algodonera Salvadoreña, se manifiesta ofendida por recientes declaraciones del presidente del Instituto Salvadoreño del Café, IN-CAFE, Lic. Miguel Ángel Solórzano.

Coordinan hospitales al servicio del Papa

La disponibilidad de los hospitales que integran la Red de Servicios Asistenciales en la periferia capitalina, coordina el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con la Comisión de Servicios Médicos para atender la salud del Papa Juan Pablo II.

Así lo manifestó ayer el titular de dicha secretaría de Estado, Dr. Napoleón Eugenio Cárdenas y el subsecretario, Dr. Juan Antonio Figueroa Aviles.

Los mencionados titulares sostuvieron una reunión con la Comisión de

Atención al Papa Juan Pablo II, por el presidente de la Red de Servicios Asistenciales, Dr. Juan Carlos Jaramila, y el subsecretario de Producción, Dr. Triguero Cerón, don Ruscones, teniente Guillermo y Dr. Vázquez Benjamín. La reunión se celebró en la

Toma de del original el 09/01/2014

EL DIARIO DE HOY

Sábado 28 de Febrero de 1983

En Ocho Horas de Combate Ejército Recupera Tejutla

El ejército de la Guardia Nacional Recupera Tejutla, en las cercanías de la ciudad de San José, después de una batalla de ocho horas.

El ejército de la Guardia Nacional Recupera Tejutla, en las cercanías de la ciudad de San José, después de una batalla de ocho horas.

El ejército de la Guardia Nacional Recupera Tejutla, en las cercanías de la ciudad de San José, después de una batalla de ocho horas.

El ejército de la Guardia Nacional Recupera Tejutla, en las cercanías de la ciudad de San José, después de una batalla de ocho horas.

Matan a Policía y a su Mujer en su Propia Casa

En la Policía de Hacienda y su mujer fueron asesinados en su casa, ubicada en el Barrio Monte María, Soyapango, según informes judiciales.

En la Policía de Hacienda y su mujer fueron asesinados en su casa, ubicada en el Barrio Monte María, Soyapango, según informes judiciales.

En la Policía de Hacienda y su mujer fueron asesinados en su casa, ubicada en el Barrio Monte María, Soyapango, según informes judiciales.

En la Policía de Hacienda y su mujer fueron asesinados en su casa, ubicada en el Barrio Monte María, Soyapango, según informes judiciales.

900 mil Colones para Compra de Medicinas

Novocientos mil colones aproximadamente, es el monto de la compra de medicinas que efectuará la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), según informó el Coronel Julio César Gómez, Presidente de la institución.

Novocientos mil colones aproximadamente, es el monto de la compra de medicinas que efectuará la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), según informó el Coronel Julio César Gómez, Presidente de la institución.

El primer lote de medicinas que serán analizadas en breve para realizar la compra de los medicamentos que van destinados al hospital de ANTEL, el cual da atención a 300 empleados de todo el país.

El primer lote de medicinas que serán analizadas en breve para realizar la compra de los medicamentos que van destinados al hospital de ANTEL, el cual da atención a 300 empleados de todo el país.



ASO DEL HOMBRE — El próximo domingo se llevará a cabo la prueba acuática "El Paso del Hombre" en el Puerto de La Libertad, El Majahual. El objetivo es dar oportunidad a jóvenes de diferentes lugares del país a cumplir el requisito para una travesía de 23 kilómetros en el mar para poder ostentar el título de guardavidia provincial. Informan Carlos Narciso Rubio y doctor José Rivas Salazar.

Libertad-Majahual Domingo se Hará Prueba "El Paso del Hombre"

Este año consecutivo se lleva a cabo la prueba acuática "El Paso del Hombre", que todos los años organiza la Real Salvadora para preparar a su personal de guardavidas que van a servir en la Sección Santa Ana. Carlos Narciso Rubio, comandante del evento, afirma que la travesía en el mar es la única que se realiza en América y que es de suma importancia en todo el mundo. Este año, los jóvenes de todo el país entrarán al mar por grupos en la mañana del domingo y saldrán en la tarde. Durante varias horas los asistentes a guardavidas estatales lucharán

contra las olas del mar, sin llevar chalecos salvavidas ni ningún equipo especial, únicamente haciendo uso de su fuerza física y técnica. A varios metros de donde vayan nadando, se lanzarán bombas de humo para prestar auxilio a cualquier joven que se sienta fatigado, sufra algún daño por un animal marino, calambres, etc.

Bus de la Ruta 7 Mata a 3 Mujeres

Yolanda del Carmen Alvarado Torres, de 23 años, y Antonia Alvarado Merino de Cuellar, de 24, trabajadoras de una fábrica de bombillas eléctricas (IMPELCA), ubicada en la calle del Boulevard del Ejército a Soyapango, y Dora Alicia García de Valle, de 30 años, empleada de una imprenta situada en el mismo Boulevard, fueron arrolladas por un bus de la Ruta 7 placas 72-281, ayer tarde. El motorista fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Las tres trabajadoras murieron en el instante. Sus cadáveres fueron reconocidos por el Jefe de Paz de Soyapango, y entregados a sus familiares.

Según los informes, las tres caminaban a un lado de la vía, y se dirigían a sus casas después de haber terminado sus labores, cuando ocurrió la tragedia.

Terroristas Asesinan 2 Agricultores Migueleños

SAN MIGUEL — Los asesinos Abilio Jurado y Gilberto Ramos, al parecer atacados por un grupo de terroristas que trataba de tomar Chapeltique, pero no pudo por haberse repellido. Las autoridades, al no poder hacer frente a los ataques, pidieron a los agricultores regresar a Ciudad Barrios, a donde habían ido en viaje de negocios, y cuando llegaron a su domicilio, fueron atacados inesperadamente a balazos por los terroristas fuertemente armados. Ambos cuerpos fueron encontrados en el "Los Carballos", de Chapeltique.

El señor José Eloy Jurado y su esposa Paula Galea de Jurado, por robarles sus pertenencias. (Ramírez)

SAN MIGUEL — Bajo una lluvia de balas logró escapar el Alcalde de Lolotique, señor Manuel de Jesús Zelaya, al ser atacado inesperadamente por un grupo de terroristas. Zelaya resultó con numerosas lesiones, por lo que fue internado en el Hospital de esta ciudad.

El Alcalde transita por el camino del cantón San Francisco a Lolotique, cuando se encontró con un grupo de extremistas y al ser identificado por éstos, le hicieron numerosos disparos.

Al verse agredido, Zelaya optó por huir en precipitada carrera y amparándose en unos matorrales logró escapar de una muerte segura.



ULTIMADO — (San Miguel) Luis Alfonso González, de 56 años, propietario de la tienda "El Manantial", murió abatido a balazos el miércoles a las once y media de la mañana en la 7ª Calle Poniente. Se acusa al barbero Francisco Miranda Zelaya.

REGRESAN A SUS HOGARES — A bordo de vehículos de todo tipo como camiones, pick ups y buses, los habitantes de Suchitla regresan a sus hogares, después que la Fuerza Armada obligó a los salvadoreños a quitar el asedio a dicha ciudad. Ahora todo está normalizado.

Decomisan Medicinas y Viveres Cnel. Monterrosa Habla de Eficiencia de la F.A.

"Una vez más ha quedado demostrada la eficiencia y capacidad que tiene la Fuerza Armada para llevar adelante esta lucha en contra del terrorismo, para conseguir así la tan ansiada pacificación", manifestó a los periodistas el Coronel Domingo Monterrosa, Comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl. Lo anterior lo dijo en una entrevista concedida en el lugar conocido como cantón Palo Grande, ubicada aproximadamente a tres kilómetros al noroeste de Suchitla.

Como se sabe, en los alrededores de Suchitla, el ejército salvadoreño, en una acción conjunta de varias unidades, comandadas por el Coronel Adolfo O. Blandón, Comandante de la Primera Brigada de Infantería, antes Cuartel San Carlos, ha logrado de saldar con todo éxito a un numeroso grupo de terroristas que por varios días estuvieron hostigando a Suchitla.

Como se sabe, en los alrededores de Suchitla, el ejército salvadoreño, en una acción conjunta de varias unidades, comandadas por el Coronel Adolfo O. Blandón, Comandante de la Primera Brigada de Infantería, antes Cuartel San Carlos, ha logrado de saldar con todo éxito a un numeroso grupo de terroristas que por varios días estuvieron hostigando a Suchitla.

Tomado del original, el 29/02/1983

Con Shultz y funcionarios reúnese Chávez Mena

Reuniones con el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, asesores congresuales, funcionarios del Departamento de Estado, Subcomité de Derechos Humanos y de Operaciones Extranjeras, ha sostenido en estos días en Washington el canciller, Dr. Fidel Chávez Mena.

En declaraciones al periódico "The Washington Post" manifestó que todas las entrevistas del ministro son con el objeto de contribuir a mejorar la imagen de nuestro país ante funcionarios y gobierno norteamericanos, con el fin de aumentar en todo lo posible la ayuda económica, política y militar que se necesita para hacer frente a la subversión militar extranjera, así como incentivar a la economía del país.

Cultura y Comunicaciones dijo ayer que el Dr. Fidel

Chávez Mena ha sostenido en los dos días que tiene de estar en Washington, entrevistas y sesiones de trabajo con los asesores congresuales, Dennis Hall y John McInerney, reunión con varios asesores del Departamento de Estado, así como con asesores del Congreso.

Se ha reunido también, se informó, con Bill Doherty de la AIPFD. También se reunió con el secretario de Estado George Shultz y el secretario adjunto Thomas Enders y otros asesores, con quienes se analizó todo lo relativo a la problemática salvadoreña en los aspectos políticos, económicos y social.

Ayer martes el ministro se reunió con el Comité de Relaciones Exteriores, Cámara de Representantes; en

Para a la página 12

Explican aseveraciones a la Coop. Algodonera

El café sigue siendo el más grande generador de divisas, expresa el presidente del Instituto Nacional del Café, INCAFE, Ing. Miguel Ángel Salazar.

Lo anterior, lo manifiesta el funcionario de INCAFE, al responder acusaciones responsabilizadas por el Ing. Ernesto Kury, director secretario de la Cooperativa Algodonera Salvadoreña. El resto de la nota aparece en el siguiente:

El 25 de febrero de 1981, Señores, LA PRENSA GRAFICA, presente. Estimados señores: En la página 7 de ese estimado periódico, edición de esta misma fecha, he leído una nota responsabilizada por el Ing. Ernesto Kury, di-

Ambulancia a la Cruz Roja de Ilobasco

Una ambulancia de la Cruz Roja de Ilobasco, fue bendecida por el reverendo Marino Blaspenhag, en acto religioso al que asistieron autoridades de la ciudad y miembros directivos de esa entidad de servicio.

Especialmente invitados al acto, estuvieron el juez de Primera Instancia, Dr. Enrique Arceño y las señoras Antonia Franco de Herpández, María Neytha Molgare de Herrera y Neiley de Martínez.

El pueblo Ilobasqueño, en un unánime acto agradeció a la Cruz Roja la puesta en servicio de la nueva unidad, que será de gran utilidad para toda la población.

rector secretario de la Cooperativa Algodonera Salvadoreña, en la cual manifiesta que dicha institución se siente ofendida por declaraciones atribuidas a este servidor, en reunión convocada en fecha reciente.

En honor a la verdad y como expresión de respeto a la Cooperativa Algodonera y demás empresas aliadas en la versión periodística de mis declaraciones, me permito afir-

Para a la página 12



DICI, IRA. Evidencias claras de que terroristas extranjeros colaboran con la guerrilla salvadoreña, entre ellos 100 subversivos del IRA de Irlanda, tiene el ejército, dice el Cnel. Adolfo O. Múndin.

Electo comité protector Fondo de Personal BFA

En asamblea general extraordinaria, fue electo el Comité Administrador del Fondo de Protección de Funcionarios y Empleados del Banco de Fomento Agropecuario.

Los funcionarios de este Comité, según explicó portavoz del BFA, son de extrema importancia en lo que respecta a cuestiones administrativas, y es por eso que durante el mencionado acto que se celebró en la asamblea del Banco Hipotecario, se contó con la presencia de delegados de las agencias de la ciudad institución que funcionan en todo el país, habiendo acordado en esta sesión temas de suma importancia para todo el personal.

Los puntos que se trata-

Para a la página 12



AGILIDAD. El jefe del Departamento General de Tránsito, teniente coronel René Emilio Ponce, insiste en la desconfianza, informa que actualmente dicha entidad, atiende con agilidad y celeridad, a todo el público que requiere de los servicios de Tránsito. "Excepcionalmente supervisan, y se facilitan el cobro de los permisos", afirma.

Sábado deben llegar las peregrinaciones

Tratar de llegar el sábado 5 por la tarde a San Salvador se pidió ayer a las peregrinaciones del interior del país que vienen a la misa del Papa Juan Pablo II.

Es importante, dijo vocero, que cada encargado de peregrinación ayude a su correspondiente parroquia para que le extienda constancia de pertenecer a su jurisdicción parroquial, a de su debida comunidad cristiana para facilitar su itinerario con seguridad de acuerdo al momento actual que vivimos. Cada unidad de transporte debe traer en lugar visible un distintivo con los colores amarillo y blanco, y se identificación de diócesis y parroquias.

El ingreso a San Salva-

do estará restringido a partir de las 6 de la mañana del día domingo desde el inicio del Boulevard del Ejército, Av. Perálta hasta la 7a. Calle Poniente y Oriente, por lo que es importante que las peregrinaciones tomen en cuenta la anterior y lleguen el sábado a San Salvador.

Puntos de control de tránsito

- 4 de la mañana hasta 7 de la noche
- (1) Calle Gabriela Mistral y Avenida José Gustavo Guerrero (2a. Av.)
- No habrá circulación de vehículos hacia el Poniente sobre la Calle Gabriel Mistral.
- (3) Boulevard Los Héroes

Para a la página 12

Enaltece Palma de Oro al pueblo

Enaltece a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, haber otorgado a Palma de Oro al Trabajador Poble Salvadoreño.

En su opinión, dice Salvador Joaquín Padilla, recien el pensar y sentir de mucha gente, porque esta vez la Cámara nos ha prestado ayuda para tener cla-

ra conciencia del inmenso valor de nuestro pueblo. Estamos acostumbrados a la idea de que el salvadoreño es un pueblo laborioso, pero la Cámara hizo destacar ese hecho en una dimensión tan alta y noble que ha estremecido la opinión pública, haciéndonos sentir orgullosos de pertenecer a él.

Para a la página 12

Terroristas del IRA con los subversivos

Evidencias concretas tiene el Ejército salvadoreño sobre la presencia de gran cantidad de elementos terroristas extranjeros, entre ellos por lo menos 100 terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA), dice el Cnel. Adolfo O. Múndin.

El coronel Múndin, comandante de la Primera Brigada de Infantería diri-

gió la reciente operación de contrainsurgencia denominada "Guazapa II", acción en la cual perecieron muchos terroristas y que se realizó en el cerro del mismo nombre, al nor-este de la población.

Para a la página 12



MAN OBRAS, El Dr. Ricardo Alvarado, centro, guayabera blanca, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y otros miembros de la magistratura del país, se reunieron en la inauguración del nuevo edificio del Poder Judicial.

Asociación de Abogados de El Salvador. A su derecha el presidente de la Asociación, Dr. José Armando Pineda Argüello. El acto fue muy concurrido por abogados de todo el país.

Cortina de humo Casas de Cultura falsas, dice

La Subsecretaría de Cultura, Juventud y Deportes trata de disuadir la opinión pública hablando de Casas de la Cultura, ficticias, para tender una cortina de humo sobre el problema de despensas manivas, revanchismo y oportunismo que ahora manan esa dependencia del Estado", afirma el Prof. Marcos G. Zaldívar.

Explica el citado maestro que las Casas de la Cultura funcionan así: se nombra por parte del Ministerio de Educación a un director y a un bibliotecario, y la comunidad contribuye con el alquiler del local y con otras actividades que benefician al sector en el cual se instala la Casa de la Cultura.

Este programa, dice

Zaldívar, funciona bien hasta que la violencia les impide que continúen funcionando en ciertos lugares. Por ejemplo, en Iquique, la persona nombrada como director de la Casa de la Cultura desaparece, como asom del Ministerio de Educación y nadie ha criticado esta situación.

Luego Zaldívar expresa que "lo mismo pasa la Subsecretaría de Cultura, nombrar directores para desempeñar otras plazas necesarias, pero que se instalan en el personal. Esto puede ser una verdadera administración, pero nunca un intento de defender al Estado, es está tratando de hacer aparecer la Subsecretaría de Cultura, que en realidad es una aduana".

Para a la



Tomado del original, el 09/01/2014

...kann man die 14. ergänzen?

Palo Grande

Un vez conquistado el objetivo principal de Palo Grande, en donde las terroristas le abandonaron apuradamente, dada la presión de nuestras tropas, encontramos gran cantidad de medicamentos y mucho armamento, incluyendo armamento pesado, un taller completo de fabricación de explosivos, tres clínicas bien montadas, y aquí quiero hacer referencia que la clínica principal estaba siendo dirigida por un médico de origen norteamericano.

Terroristas hoy en

[illegible]

CONTRACT NO. 100-15

[illegible][illegible]

revised, state ledger

encontraban algunas campesinidades terratenistas que se encontraban en el área de Las Verónicas, en el departamento de La Libertad.

Experiments in effect

El Cnel. Blandin dice a quienes que en esta operación "Guatapé II", fue lograda una enorme cantidad de medicinas, alimentos, aves de corral, ganado, además de muchos vehículos de armamento. Una de las herramientas europeas de estos lugares, los habitantes volvieron a sus viviendas para recibir sus bienes y rehacer su vida, en el coronel Blandin.

Peristichia streptopus

El coronel Escobón se refirió por otra parte a que entre de estos grupos de cruciadas que fueron aplazados de la zona encerrada, se encuentran los cuatro pendientes que se han dado por desaparecidos, tres de los al paracer. Dijo asimismo, sin voluntad, ya que no se podía ver más, que...

siempre permanencia digna que observaron que apasionadamente también a la familia, ya que allí se vio a uno de ellos andar tomando las acciones que servían a su alrededor. También los niños más pequeños, que andaban una mujer, de una personalidad que se filmaba, pero que estaban que fuertemente la cubrían allí.

Ternstroemia extrajensis

Para finalizar, el coronel Eusebio se refirió a la presencia de una gran cantidad de armas y municiones extraídas que serán la base territorial salvadoreña que se dedicará a la destrucción del gran Sinaloa que existen fuertes presiones como que por lo menos la Fuerzas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) participaran en las operaciones finalizadas contra el elemento en el área de Guadalupe y sus alrededores.

Alle moral combattiva

Refirió igualmente el coronel Hladin que la Fuerza Armada tiene la capacidad

Also advised...

—Wann ist die Prüfung?

las compañías americanas de energía, de comunicaciones, de materias primas, de tecnología y

dad profesional para actuar contra el crimen donde quiera y a cualquier hora que sea, recordando que algunas operaciones les han tenido que realizar de noche.

Por otra parte destacó el alto moral combatiendo de sus tropas, lo cual es la característica de todas las unidades de la Fuerza Armada y que definitivamente le infunde en gran medida para mantener siempre también la moral de pueblo salvadoreño que se le tiene confianza y fe en la Fuerza Armada, concluyó el coronel Nandín.

have overestimated

Las ganancias superaron a las pérdidas por un margen de casi tres a uno, y el índice Compuesto subió 1,43 puntos por ciento a 94,03.

El volumen de las exportaciones a 170,75 millones de dólares, comparado con 21,75 millones de la misma época de 1997.

Can Shultz.

— Verso de la página 3

la misma mañana con el congresista Michael Hines y a las 11:30 con los miembros del Sistema de Operaciones Extraterrestres, Cámara de Representantes; con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y por la tarde con el Subcomité de Derechos Humanos, Cámara de Representantes y con uno del Senado.

4. *Staphylococcus aureus*[illegible][illegible]

La primera, despierta los instintos salvajes. Venas, subterránea Civil de Marino. De a fue una penalti



APRENDIZAJE MENTAL

APRENDIZAJE MENTAL
con los especialistas !!
PARAPSIKOLOGIA
CIENCIAS OCULTAS
E HIPNOTISMO
EN SU CASA POR CORREO

DESARROLLE UNA PERSONALIDAD ARROLDADORA
APRENDA A DOMINAR LA TIMIDEZ
VIVA SIN INHIBICIONES !!!
UN PODER INCREDIBLE - CONOZCALO !!
PERO HAGALO CIENTIFICAMENTE...

OTROS CURSOS DE ÉXITO QUE PUEDE ESTUDIAR CON LOS ESPECIALISTAS EN SU CASA POR CORREO

● INGLÉS INICIAE SALVATRES	● CONTABILIDAD
● DIBUJO (para los principiantes)	● SECRETARIADO
● ELECTRICIDAD (para principiantes)	● MARINA MERCANTE
● JARDINERIA PROFESIONAL	● CERAMICA
● MECANICA DENTAL	● PEDIQUIRIA
● CORTE Y PEQUICION	● CANNERIA
● BELLEZA Y PELUQUERIA	● GINEASIA YOGA
● BASTERIA MASCOLINA	● BORDAR
● MECANICA AUTOMOTRIZ	● ENFERMERIA
● MECANICA DE MOTOS	● FOTOGRAFIA
● DEFENSA PERSONAL	● DETECTIVISMO
● GUARDERIA INFANTIL	● RADIO - TV COLOR
● COFARRA	● CIENCIAS OCULTAS
● ALIMENTACION Y DIETAS	● VETERINARIA
● DESEMPLEO	● MAESTRIA KINESIA
● CALISTADIA DE ALUMINIO	● PARAPSIKOLOGIA

ENVIAR SU ORDEN DE COMPRA A: **PARAPSIKOLOGIA** - **APRENDIZAJE MENTAL** - **CIENCIAS OCULTAS** - **EN SU CASA POR CORREO**

REMITENTE: LOGOTIPUS - **Apartado 1020 - Santa Sabina**
PO. 68

GRATIS

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD DE EL SALVA

A los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que asistieron al Cristóbal Colón el sábado 26 de mayo de 1983, a inscripción extraordinaria, les convoca al Liceo José de Sarriena, Calle Arce 922, para que se informe qué grupos de clase han quedado inscritos. El horario de atención será el siguiente:

MATEMATICA I

- Jueves 3/Mar./83 3 a 5 p.

Princ. GRALES. ECONOMIA

- Viernes 4/Mar./83 3 a 5 p

299 Tomado del original, el 09/01/2014



EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en la Ciudad de San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil catorce. Siendo este el lugar, día y hora señalados para la celebración de **AUDIENCIA ORAL**, en la tramitación del recurso de apelación en el procedimiento de acceso a la información pública arriba identificado, iniciado por los ciudadanos **CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELÍ JEREMIAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS**, con base en el artículo ochenta y dos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), contra la resolución emitida por el Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional. Estando presentes los suscritos comisionados del Instituto, **CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA, JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ, MAURICIO ANTONIO VÁSQUEZ, MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA** y **JOSÉ ADOLFO AYALA AGUILAR**, formando pleno, comparecen por la parte apelante **VICTORIA CAROLINA CONSTANZA BAIREZ**, portadora del Documento Único de Identidad número ; **HELÍ JEREMIAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, portador del Documento Único de Identidad número , **ANDRES ANTONIO ROMERO SANTAMARIA**, portador del Documento Único de Identidad número y, **BUENAVENTURA ALAS RIVERA**, portador del Documento Único de Identidad número ; y en representación del ente obligado el Coronel **JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**, portador del Documento Único de Identidad número , quien actúa en su calidad de APODERADO ESPECIAL del Ministerio de la Defensa Nacional, según consta en testimonio de poder especial extendido a las ocho horas del día tres de diciembre de dos mil

trece, ante los oficios del notario Yacir Ernesto Fernández Serrano. Verificada que ha sido la comparecencia de las partes, se procede a realizar la audiencia oral, con el ofrecimiento de prueba y exposición de los alegatos por las partes, como queda documentado en el medio magnético dispuesto para tal efecto. Luego de haberse dado la palabra a cada una de las partes, el Pleno declaró un receso para deliberar. Reanudada la misma, se le concedió la palabra al representante de los apelantes y luego el Pleno comunicó la decisión de: a) aplicar el artículo noventa y dos de la Ley de Acceso a la Información Pública, para ampliar el plazo y consecuentemente, suspender la audiencia, para reanudarla dentro de diez días hábiles, quedando señalado como fecha para continuar con la misma las ocho horas con treinta minutos del día viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce y; b) aplicar supletoriamente el artículo trescientos noventa del Código Procesal Civil y Mercantil para realizar reconocimiento judicial in situ por parte del Comisionado instructor licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez, dada la relevancia y trascendencia del caso, para lo cual se solicita al ente obligado las facilidades necesarias para realizar la misma. Acto seguido, el representante del ente obligado pide la palabra para que el asesor jurídico que le acompaña puede pronunciarse sobre la declaración jurada presentada como prueba, concedida la misma, este manifestó que del contenido del esta, se deducen nuevos hechos al involucrar nuevas unidades militares tales como el batallón Atlacatl, la Fuerza Aérea, etcétera, las que no fueron mencionadas en la solicitud de información. Acto seguido el Pleno manifestó que la valoración de la misma se realizaría oportunamente. Quedando notificadas las partes en este acto para comparecer a la audiencia en el día y la hora anteriormente mencionados. No habiendo nada más que hacer constar damos por terminada la presente acta que para constancia firmamos.

Pasan firmas...

recep.

Laura

Laura

1/1

~~Alfonso~~

Laura

Andrés R. Barrios

~~BAB~~ ~~Laura~~

VERSIÓN PÚBLICA
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Despacho del Ministro

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No.	0068
DEPENDENCIA	DAJ/DDHH.
CLASIFICACIÓN	CONFIDENCIAL.
FECHA	14ENE014.
ASUNTO	INFORME.
CÓDIGO	B3c1b - 071.

HONORABLE SEÑOR
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS, de generales conocidas, actuando en mi calidad de Ministro de la Defensa Nacional, en cumplimiento a la Resolución NUE: 67-A-2013 (JC); mediante el cual, ese Instituto acepta recurso de apelación (Art. 82 de la LAIP), interpuesto por los ciudadanos **CAROLINA CONSTANZA BAIREs, HELI JEREMIAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS**, estableciéndose para las nueve horas y treinta minutos del día diez de enero del año dos mil catorce, la celebración de la audiencia oral que fue suspendida de conformidad al Art. 92 de la LAIP, para reanudarla dentro de diez días hábiles, quedando señalado como fecha para continuar con la misma a las ocho horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero del presente año, según consta en la resolución motivada establecida en el Acta REF. IAIP 67-A-2013 de fecha diez de enero de los corrientes y elaborada en la Sala de Audiencia de dicho Instituto, a Usted respetuosamente **EXPONGO**:

1.- Que en la resolución relacionada en el párrafo anterior se vulnera lo dispuesto en los Arts. 92, 94 y 102 de la LAIP, específicamente a la falta de fundamentación de la resolución y en la aplicación de los principios de legalidad e igualdad de las partes, que ese Instituto debe garantizar; infringiéndose el debido proceso, por las razones de hecho y de derecho que detallo a continuación:

a.- Que en el Art. 92 de la LAIP, dispone que para ampliar el plazo para la celebración de la audiencia, debe existir "**causa justificada**"; lo cual, no está contenido en el Acta REF. IAIP-67-A-2013, según exige específicamente el literal a) sobre el hecho concreto que motivó a ese Instituto para dictar la decisión, vulnerando el Art. 94 de la LAIP, que literalmente dice: "**Las resoluciones expedidas por el Instituto deberán ser fundamentadas en los hechos probados y las razones legales procedentes, bajo pena de nulidad**"; de tal forma, que se transgrede el debido proceso y el principio de legalidad, fijados en el Art. 102 de la LAIP.

b.- Que en el Acta REF. IAIP-67-A-2013, en el literal b) se dispone aplicar supletoriamente el Art. 390 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPrCyM) para realizar un

reconocimiento judicial “in situ” por parte del Comisionado Instructor Licenciado Jaime Mauricio Campos, dada la relevancia y transcendencia del caso; el reconocimiento ordenado es improcedente por referirse la norma a un procedimiento judicial, cuyos requerimientos no se han dado; además, **la razón que fundamenta la relevancia y transcendencia del referido medio de prueba no está expuesta, ni razonada, afectando directamente el debido proceso**. El informe de ley de fecha doce de diciembre del año dos mil doce, presentado por esta Secretaría de Estado, establece en forma idónea por ser documento autentico que la información se ha buscado y es **“INEXISTENTE”**.

2.- Que la inexistencia de registros de los acontecimientos ocurridos antes del año de 1984, data del año de 1992, cuando la Comisión de la Verdad, requirió informes a esta Secretaría de Estado¹; lo cual, fue manifestado en el Oficio N° 10692 de fecha 27 de noviembre del año de 1992, de la manera siguiente: **“...no se cuentan con registros debido a que en aquel año fue completamente reestructurado el Estado Mayor...”**; apareciendo también en el informe elaborado por la Comisión de la Verdad, que en carta de fecha 10 de octubre del año 1992, la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de la Defensa Nacional COPREFA, informo a la Comisión: **“...no tenemos información desde enero de 1980, por lo que la fecha únicamente contamos con Boletines desde enero de 1988...”**, motivo que da sentido estricto a la respuesta de inexistencia.

Por lo antes expuesto a Usted, con todo respeto **PIDO**:

1.- Se me admita el presente escrito en el carácter que comparezco, se adjunte al proceso administrativo del caso NUE: 67-A-2013 y se declare nula la citada resolución, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LAIP.

2.- Que se resuelva conforme al Art. 96 Lit. c.- de la LAIP, por la inexistencia de la información solicitada por los ciudadanos peticionarios.

3.- Que en todo caso, la autorización para tener acceso a los archivos de la Fuerza Armada, de conformidad a los Arts. 157 y 168 Ordinal 11° CN., es una facultad o atribución del señor Presidente de la República, dado que en la misma hay información que por su naturaleza es **“Secreta”** (Art. 168 Ordinal 7° CN.) y **“Reservada”** (Art. 19 Lit. a.- LAIP) y le compete decidir al respecto al Órgano Ejecutivo (Art. 213 CN).

Deseo dejar constancia de mi respeto a la legalidad (Art. 86 CN inciso último) y que esta respuesta se ajusta a los hechos expuestos y al derecho aplicable.

DIOS, UNIÓN, LIBERTAD



DAVID MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

¹ Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza: La Guerra de 12 años en El Salvador”; pie de página No. 125, Página No. 41. <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Casos-y-Patrones-de-la-violencia-A-B.pdf>.



Presentado por David Ricardo Pérez Moreno

Quién se identifica con DUI a las 9:20 horas

del 15 de enero de 20 14. Junto con _____

[Handwritten signature]



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

NUE: 67-A-2013 (JC)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas del día veinte de enero de dos mil catorce.

Por recibido el oficio 0068 de fecha 14 de diciembre de 2013, remitido por el servidor público, General de División DAVID MUNGUÍA PAYÉS, en su calidad de Ministro de la Defensa Nacional y Titular del mismo *Ministerio* —en adelante “MDN”— en el que se solicita, en lo medular: a) se declare nula —por falta de fundamentación— la decisión de este Instituto, tomada en audiencia, a las nueve horas y treinta minutos del diez de los corrientes, en la que se suspendió y reprogramó la misma, con el objeto de realizar reconocimiento judicial *in situ*, en las instalaciones donde se alojan los archivos del MDN, por considerar el Titular del ente obligado, necesaria la autorización del Presidente de la República, ya que los archivos contienen información secreta y reservada y; b) que en resolución definitiva, se confirme la resolución del Oficial de Información del MDN.

De lo anteriormente expuesto, este Instituto, procede a realizar las siguientes consideraciones:

1. Según manifiesta el Titular del ente obligado, *la resolución en comento, ha sido emitida infringiendo el debido proceso, en la medida en que considera, que no ha sido suficientemente fundamentada*, sin embargo, las razones expuestas por el solicitante no pueden adecuarse a ninguna de las causales de nulidad establecidas en el Art. 232 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) en atención a la remisión al derecho común contenida en el Art. 102 de la LAIP.

No obstante lo anterior, es necesario aclarar, que la resolución en cuestión, fue adoptada, motivada y decidida por el Pleno del Instituto, en el transcurso de la audiencia oral, en la que se le hizo saber a las partes que se suspendería la misma —con base en lo dispuesto en los Arts. 90, 92 y 102 de la LIP, aplicando supletoriamente el Art. 390 del

CPCM— para ordenar la realización de *reconocimiento judicial in situ*, en las instalaciones donde se albergan los archivos del MDN. Dicha diligencia —para mejor proveer— tendría por finalidad obtener insumos para fundamentar la resolución definitiva correspondiente y verificar las diligencias de búsqueda de la información realizadas por el ente obligado.

Por las razones expuestas, la resolución en comento, fue motivada debidamente y con toda claridad, en atención a las líneas jurisprudenciales establecidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, v. gr., el amparo del 1067-2008 del 9/02/2009 y 106-2009 del 22-06-2009, en las que se dijo: “...es suficiente que las autoridades expongan razonamientos mínimos y necesarios en los cuales han basado su decisión para entender que esta se encuentra debidamente motivada...” y en el mismo sentido, el amparo 366-98 del 27/09/2001: “debiendo ser la motivación lo suficientemente clara y concisa para que sea comprendida no sólo por los técnicos jurídicos sino por los ciudadanos.”

2. En atención al precedente de la Sala de lo Contencioso Administrativo 94-G-2000 del 13/12/2002: “Las nulidades son un argumento especial legalmente reconocido en que el agraviado podrá fundamentar su pretensión al momento de interponer el recurso correspondiente”. En el caso en estudio, los representantes del ente obligado, no interpusieron —en audiencia— el recurso de revocatoria correspondiente en el que debió haberse alegado —dentro de las causales legales— la nulidad, siendo extemporánea su invocación posterior, en atención a los principio de concentración y congruencia.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar, que hubo una convalidación expresa de la decisión, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 CPCM en razón que, el Oficial de Información del MDN, —actuando en calidad de apoderado especial de la mencionada Secretaría de Estado, con facultades amplias y suficientes—manifestando ***no tener inconveniente con la realización del reconocimiento ordenado, siempre y cuando este se realizara únicamente en los archivos donde se encuentra resguardada la***

información relativa a las unidades militares relacionadas al caso que se ventila ante este Instituto, por lo que no puede ser alegada su nulidad de manera posterior.

3.- Por otra parte, respecto al argumento que el reconocimiento judicial antes ordenado, debe ser *autorizado* por el Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de la Fuerza Armada, cabe aclarar, que la realización de diligencias ordenadas por este Instituto, no necesitan permiso previo ni convalidación alguna por parte de los titulares de los entes obligados, ni de sus superiores, puesto que el Instituto de Acceso a la Información Pública:

a) Está conformado por cinco miembros de la sociedad civil, elegidos como “Comisionados” del Presidente de la República, conforme el procedimiento estipulado en el Art. 53 de la LAIP, con el objeto de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública y la plena vigencia del Estado de Derecho, siendo obligación de todos los funcionarios y autoridades, rendir cuentas de la gestión pública, puesto que, en atención a la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, *toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.*

b) Es deber de todos los entes públicos cumplir con las obligaciones que establece la ley, bajo el principio de máxima publicidad, facilitando información relacionada con las graves violaciones de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional (Art. 19 inciso final de la LAIP), y no solamente calificarla como *“información secreta y reservada”*, sin existir fundamentación adecuada para ello.

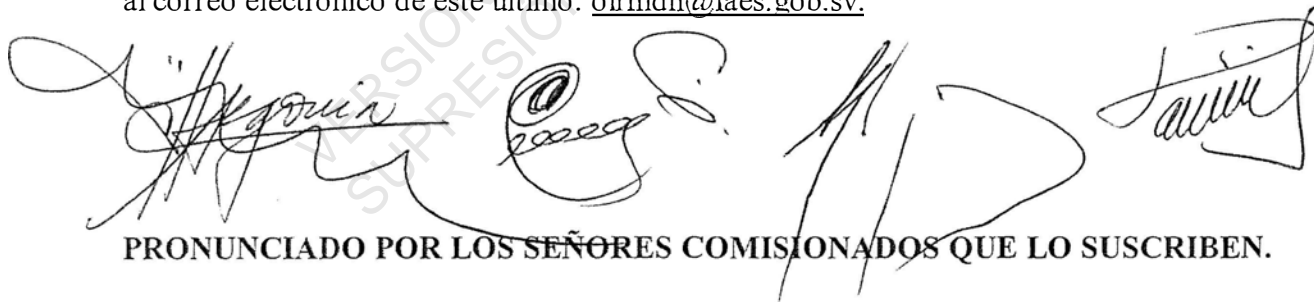
Por todo lo anteriormente expuesto, deberá desestimarse la nulidad alegada y continuar el trámite señalado en la audiencia de fecha diez de los corrientes.

De conformidad con los Arts. 6 y 18 Cn; 90, 92 y 102 de la LAIP, y los arts. 7, 232, 233, 236, y 390 del Código Procesal Civil y Mercantil, **SE RESUELVE:**

a) *Declárese **no** ha lugar la nulidad planteada.*

b) *Señálase las **OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE**, para la realización del reconocimiento como diligencias de mejor proveer, en las instalaciones del archivo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; las **DIEZ HORAS DEL MISMO DÍA**, para realizar el reconocimiento del Archivo General del MDN y; las **CATORCE HORAS DE LA MISMA FECHA**, para realizar el reconocimiento de las instalaciones del archivo de la 5ª Brigada de Infantería, con sede en el departamento de San Vicente. *Para estas diligencias se requiere la presencia del Oficial de Información del ente obligado.**

c) *Notifíquese esta resolución al apelante por medio de los correos electrónicos señalados en el escrito de apelación: _____ y y al ente obligado, por medio de su Oficial de Información al correo electrónico de este último: oirmdn@faes.gob.sv.*



PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LO SUSCRIBEN.



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Señalamiento de Reconocimiento

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

21 de enero de 2014, 16:23

Señores (as):

Carolina Constanza Baires
Heli Jeremías Hernández Hernández
Marcos de Jesús Portillo Regalo
Buenaventura Alas Rivera
Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía
Andrés Antonio Romero Santamaría
Presentes.

A través de este medio, se les adjunta auto señalamiento de reconocimiento y documentación anexa referente al caso IAIP 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

2 archivos adjuntos

IAIP 67-A-2013 Señalamiento de Reconocimiento (Ciudadanos).pdf
1527K

IAIP 67-A-2013 Escrito - Ente Obligado.pdf
11435K

Madeleine Lagadec

22 de enero de 2014, 10:23

Seniores IAIP.
Presente._

Reciban cordiales saludos del CPDH, por éste medio acusar de recibido escrito del Ministerio de Defensa y Resolución del IAIP, advirtiendo que las direcciones electrónicas con nombre de ProBúsqueda, que constan en el acta de resolución del IAIP, son erróneas para efectos de notificación, por lo que solicitamos realizarlo a ésta dirección electrónica y al telefax 22824756,

enmendado. 45 vale R 45



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Señalamiento de Reconocimiento

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

21 de enero de 2014, 16:23

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirdn@faes.gob.sv>

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno
Oficial de Información y
Apoderado Especial
Ministerio de la Defensa Nacional
Presente.

A través de este medio, se les adjunta auto señalamiento de reconocimiento referente al caso IAIP 67-A-2013.
Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

**IAIP 67-A-2013 Señalamiento de Reconocimiento (Oficial de Información).pdf**

1550K

OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirdn@faes.gob.sv>

22 de enero de 2014, 8:52

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Acusamos de recibido.

Saludos Cordiales.

Carolina Abrego
Secretaria

Oficina de Información y Respuesta (OIR)
del Ministerio de la Defensa Nacional
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla
Tel.(503) 2250-0134, Email: oirdn@faes.gob.sv

De: NOTIFICACIONES IAIP [mailto:notificaciones.iaip@gmail.com]

REF. IAIP 67-A-2013

En la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de enero de dos mil catorce. Siendo el lugar, día y hora para realizar reconocimiento en el Archivo del Estado Mayor Conjunto, de la Fuerza Armada, dentro del Procedimiento de Acceso a la Información Pública, clasificado bajo la referencia **IAIP sesenta y siete - A - dos mil trece**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos ochenta y siete, y ciento dos de la LAIP, con relación al siete y al trescientos noventa del CPCM; encontrándose constituido en dicho lugar el suscrito Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública **JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ**, junto con el señor Oficial de Información Y Apoderado Especial del Ministerio de la Defensa Nacional, Coronel **JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**, se hace constar que no ha sido posible la realización del reconocimiento, en esta ni en ninguna de las otras unidades militares donde se ordenó, ya que por orden superior del Ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, se nos ha denegado el acceso a las instalaciones de los archivos de la secretaría de Estado y unidades militares, debido a que, según ordena esta diligencia debe ser autorizada por el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, ya que es el Titular o Ente obligado facultado para ordenar el cumplimiento de esta diligencia, ya que ejerce el cargo máximo de la Fuerza Armada, conforme a lo dispuesto en el artículo dos del RELAIP y el artículo ciento cincuenta y siete de la Constitución. Así se finaliza la presente diligencia en el lugar mencionado, no habiendo nada

más que hacer constar se da por finalizada la presente acta
que para constancia firmamos.



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

No. 236

Libro 9º

AÑO 2014

Testimonio de Escritura Pública



DE
PODER ESPECIAL

CAUSANTE
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

A FAVOR
RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA
Y
SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ

ANTE LOS OFICIOS DE
YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO
ABOGADO Y NOTARIO





DOSCIENTOS CATORCE

M. DE H.

Nº 15052576

ES

1 NUMERO DOSCIENTOS TREINTA

ESPECIAL. En la ciudad de San Salvador, a

2 las ocho horas del día veintitrés de Enero del año dos mil catorce. Ante mí, YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ

3 SERRANO, Notario, de este domicilio, comparece por una parte el señor DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS, de

4 de edad, Militar, del domicilio de

Departamento de San Salvador, portador de mi

5 Documento Único de Identidad número

; y Numero de Identificación

6 Tributaria

; actuando en nombre y

7 representación del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa Nacional, en calidad de Ministro de la

8 Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria

9 , personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo

10 dado en Casa Presidencial Número DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE de fecha quince de Julio de dos mil trece; en

11 cual consta que el señor Presidente de la República en su Calidad de Comandante General de la Fuerza Armada en

12 uso de las facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento

13 sesenta y dos de la Constitución de la República, lo nombró y juramento como Ministro de la Defensa Nacional;

14 acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial número CIENTO VEINTINUEVE, Tomo CUATROCIENTOS de fecha

15 quince de Julio de dos mil trece; Y ME DICE: 1) Que confiere PODER ESPECIAL, a favor de los Licenciados RENÉ

16 ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, mayor de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad y departamento de San

17 Salvador, SILVIA CAROLINA GUZMÁN ÁLVAREZ, mayor de edad, Abogada, del domicilio de ,

18 departamento de La Libertad; para que en nombre de la Secretaria de Estado de la cual es titular, inicien, sigan y

19 fenezcan diligencias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los cuales tenga o pueda tener

20 interés el Ministerio de la Defensa Nacional, ante las autoridades administrativas y de cualquier otra índole aunque aquí

21 no se nominen, pues desea que sus Mandatarios no tengan ninguna dificultad en el ejercicio del Mandato. Asimismo los

22 faculta para firmar los documentos que fueren necesarios, reciban aquellos que tengan que entregárseles, celebren

23 conciliaciones de cualquier naturaleza y especialmente en materia las que tengan que ver con el Instituto de Acceso a

24 la Información Pública; confiere a sus Mandatarios las facultades generales del Mandato, todas que expliqué al

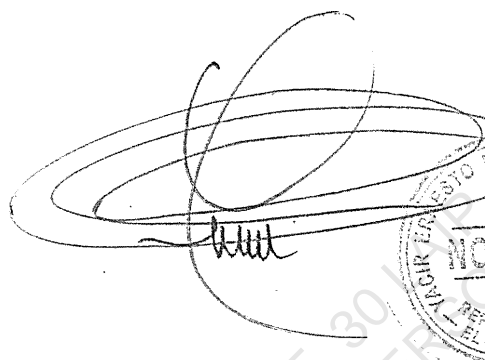
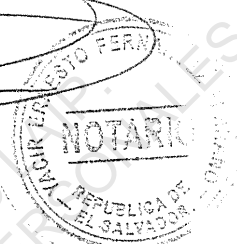


1 otorgante, cerciorándome de que la conoce, comprende y por ello las confiere a sus Apoderados. Así se expresó el
2 compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento el cual leído que le fue por mí.
3 íntegramente, en un sólo acto, sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-



4
5
6
7
8
9

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

...SO ANTE MI del FOLIO DOSCIENTOS DOCE FRENTE Y VUELTO del Libro Noveno de mi Protocolo que vence el día veinte del mes de Junio de dos mil catorce, y para ser entregado a los Licenciados RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA y SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ, extendiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL, en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de Enero de dos mil catorce.

El Suscrito Notario CERTIFICA. Que el documento anterior que consta de TRES folios utiles, es copia fiel de original que he tenido a la vista y con el cual se confrontó de conformidad al artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. Firmo y sello la presente, a cada folio de dicho documento en San Salvador VEINTITRES de ENERO de DOS MIL CATORCE.

50

LIBRO DOS-2010

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE: PODER GENERAL JUDICIAL

OTORGADA POR:

MARIA ESTEBANA MENJIVAR ALAS DE ALAS, JUAN RAMON GUARDADO GUARDADO,
JOSE BALBINO SERRANO, ANDRES ANTONIO ROMERO SANTAMARIA, OLIVIA DEL
CARMEN GALDAMEZ ALVAREZ y GERARDO MURILLO CALDERÓN

A FAVOR DE:

WILFREDO MEDRANO AGUILAR

ANTE LOS OFICIOS DE:

CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA
ABOGADA Y NOTARIA

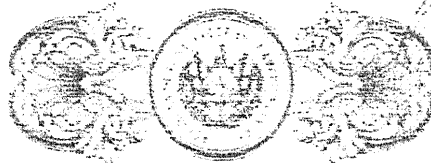
TELEFONOS:

Teléfono:

Celular:

CORREO ELECTRÓNICO:

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA.



DOS COLONES

M. DE H.

VEINTIUNO

Nº 11893651



16
17 NUMERO DIECISIETE, LIBRO DOS, PODER GENERAL JUDICIAL - En la ciudad de San
18 Salvador, a las diez horas del día veintidos del mes de Noviembre del año dos mil diez. Ante mí
19 CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA, Notaria de este domicilio comparecen las señoras
20 señoras: MARIA ESTEBANA MENJIVAR ALAS DE ALAS, mayor de edad, ama de casa, del
21 domicilio de _____, Departamento de Cuscatlán, a quien ahora conozco e identifico con su
22 documento único de identidad número _____ JUAN
23 RAMON GUARDADO GUARDADO, quien es mayor de edad, agricultor, del domicilio de
24 _____, departamento de Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento

único de

JOSE BALBINO

SERRANO, quien es mayor de edad, jornalero, del domicilio de , Departamento de

y GERARDO ARIILLO CALDERÓN, comerciante en pequeño, del domicilio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con documento Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número cero único de identidad número

ANDRES ANTONIO ROMERO SANTAMARIA, quien

es mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de departamento de

Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número

y OLIVIA DEL CARMEN/ALVAREZ, mayor de edad,

ama de casa, del domicilio de , departamento de Cabañas, a quien hoy conozco e

identifico con su documento único de identidad número

; Y ME DICEN: Que confieren PODER GENERAL JUDICIAL, amplio y suficiente en

cuanto a derecho fuera necesario a favor de WILFREDO MEDRANO AGUILAR, abogado, de

esta Ciudad, PODER GENERAL JUDICIAL, amplio y suficiente, en cuanto a derecho fuere

necesario, para que en su nombre y representación, pueda iniciar, seguir, fenecer, desistir, toda

clase de juicios o diligencias, de carácter penal, laboral, civil, familia, administrativo, de

jurisdicción voluntaria o de cualquier otra naturaleza, en que las y los otorgantes tuvieren interés,

pudiendo intervenir como demandado o demandante y ante toda oficina, toda autoridad, todas

las instancias, promover y continuar toda clase de incidentes o recursos sean ordinarios o

extraordinarios, celebrar toda clase de juicios conciliatorios y conciliaciones promovidos o que se

promueva ante cualquier tribunal, funcionario público judicial o administrativo de la República de

El Salvador, si guiendotodos los recursos que confiere la ley, y para el mejor desempeño de su

cometido le confiere las facultades generales del mandato y las especiales enumeradas en el

Artículo ciento trece del código de procedimientos civiles, inclusive la de transigir, sustituir este

poder de forma total y en todas sus partes, o de forma parcial, teniendo el sustituto o la sustituta

iguales facultades; revocar sustituciones parciales, otorgar poderes especiales, sustituirlos o





M. DE H.

VEINTIDOS

Nº11893652

DOS COLONES

1 revocarlos siempre que se trate de asuntos en los cuales pueda representar a las y los

2 otorgantes con el presente poder, el cual es amplio y suficiente. Así se expresaron las y los

3 comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento; cerciorándome

4 de que comprenden el alcance y contenido de las facultades otorgadas; y leída que les hube

5 todo lo escrito, íntegramente y en un solo acto no interrumpido, manifiestan su conformidad,

6 ratifican su contenido y firmamos, a excepción del Señor JOSE BALBINO SERRANO, quien

7 manifiesta no saber hacerlo, y para los efectos legales deja impresa la huella digital del pulgar

8 de su mano derecha, firmando a su ruego el Señor HELI JEREMIAS HERNÁNDEZ

9 HERNÁNDEZ, mayor de edad, licenciado en ciencias jurídicas, residente en Residencial Europa,

10 Municipio de Santa Tecla, Departamento de San Salvador, con documento único de identidad

11 número

12 DOY FE. Enmendados: ocho--cero--VALÉN, -Entrelíneas: /GALDAMEZ/---/ GERARDO MURILLO CALDERÓN,

13 comerciante en pequeño, del domicilio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con documento único de identidad

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



...la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día ocho de diciembre del año dos mil Diez. ANTE MI Y POR MI, WILFREDO MEDRANO AGUILAR, Abogado y Notario, mayor de edad, de este domicilio, OTORGO: Que el anterior Poder General Judicial y Administrativo, amplio y suficiente conferido a mi favor por parte de las señoras y señores: MARIA ESTEBANA MENJIVAR ALAS DE ALAS, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Departamento de Cuscatlán, a quien ahora conozco e identifico con su documento único de identidad número

JUAN RAMON GUARDADO GUARDADO, quien es mayor de edad, agricultor, del domicilio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número

JOSE BALBINO SERRANO, quien es mayor de edad, jornalero, del domicilio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número ; ANTONIO ROMERO

SANTAMARIA ANDRÉS es mayor agricultor en pequeño, del domicilio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número

OLIVIA DEL CARMEN GALDAMEZ ALVAREZ, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de departamento de Cabañas, a quien hoy conozco e identifico con su documento único de identidad número

y MURILLO GERARDO CALDERÓN, mayor de edad, comerciante en pequeño, del domicilio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con documento único de identidad número c

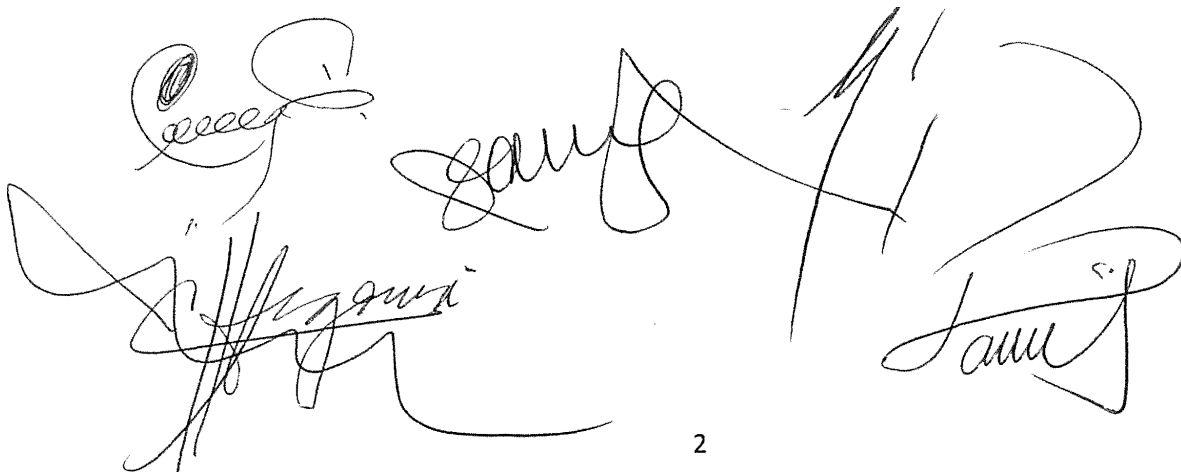
en esta ciudad, a las diez horas del día veintidós del mes de noviembre del año dos mil diez, ante los oficios de la notaria CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA, lo sustituyo en todas y cada una de sus partes a favor de la Licenciada CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA, quien es mayor de edad, Abogada, de este domicilio, para que lo ejerza conforme a derecho. Leído que lo hube este instrumento que consta de dos hojas útiles, en un solo acto ininterrumpido, lo ratifico, firmo y sello. DOY FE.

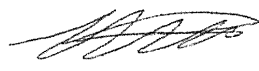


REF: IAIP 67-A-2013

EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en la Ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil catorce. Siendo este el lugar, día y hora señalados para la celebración de AUDIENCIA ORAL, en la tramitación del recurso de apelación en el procedimiento de acceso a la información pública arriba identificado, iniciado por los ciudadanos **CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS**, con base en el artículo ochenta y dos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), contra la resolución emitida por el Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional. Estando presentes los suscritos comisionados del Instituto, **CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA, JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ, MAURICIO ANTONIO VÁSQUEZ, MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA y JOSÉ ADOLFO AYALA AGUILAR**, formando pleno, comparecen por la parte apelante **VICTORIA CAROLINA CONSTANZA BAIRES**, portadora de su Documento Único de Identidad número , **LEONOR VICTORIA PINEDA VIUDA DE MEJÍA**, portadora de su Documento Único de Identidad número , **HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, portador del Documento Único de Identidad número , **ANDRES ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA**, portador del Documento Único de Identidad número , **BUENAVENTURA ALAS RIVERA**, portador del Documento Único de Identidad número , y la licenciada **CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA**, portadora de su tarjeta de identificación de abogada número , quien actúa en calidad de APODERADA GENERAL JUDICIAL de Andrés Antonio Romero Santamaría; en

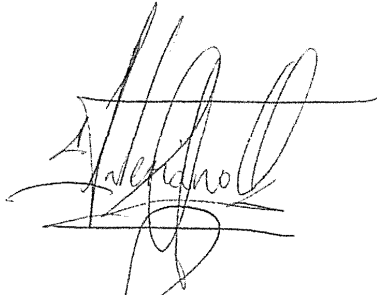
representación del ente obligado el Coronel **JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**, portador del Documento Único de Identidad número , quien actúa en su calidad de APODERADO ESPECIAL del Ministerio de la Defensa Nacional, según consta en testimonio de poder especial extendido a las ocho horas del día tres de diciembre de dos mil trece, ante los oficios del Notario Yacir Ernesto Fernández Serrano; actuando conjuntamente con el licenciado **RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA**, portador de su tarjeta de identificación de abogado número , quien actúa en su calidad de APODERADO ESPECIAL del Ministerio de la Defensa Nacional, según consta en testimonio de poder especial otorgado a las ocho horas del día veintitrés de enero de dos mil catorce, ante los oficios del notario Yacir Ernesto Fernández Serrano. Verificada que ha sido la comparecencia de las partes, se procede a realizar la audiencia oral, con el ofrecimiento de prueba y exposición de los alegatos por las partes, como queda documentado en el medio magnético dispuesto para tal efecto. Posteriormente el Pleno informó a las partes, que en virtud de lo establecido en el artículo 96 de la de Acceso a ~~La~~ Información Pública y, para mejor proveer a este instituto, se librará oficio al Archivo General de la Nación, para solicitarle certificación de las actas de eliminación de documentos del Ente Obligado, información que servirá para la posterior fundamentación de la sentencia definitiva. No habiendo nada más que hacer constar damos por terminada la presente acta que para constancia firmamos.

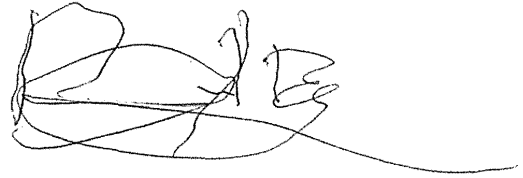


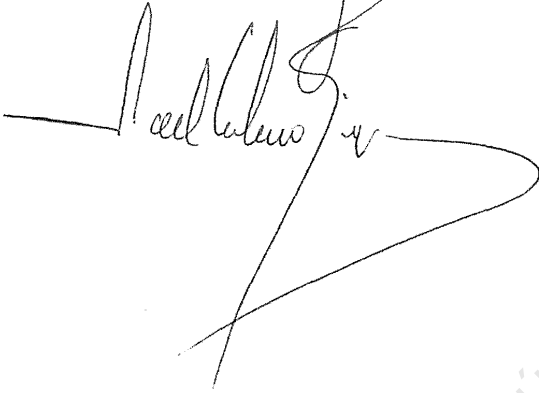

Andrés B. Santamaría

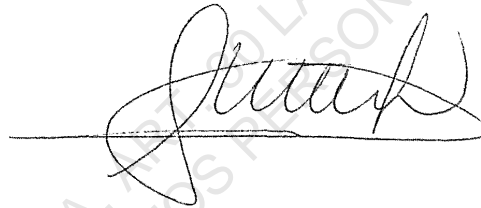
LVPD











VERSIÓN PÚBLICA. LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

San Salvador, 27 de enero de dos mil catorce.

Dic. Gerardo Monterrosa,

Archivo General de la Nación.

Muy atentamente y por este medio le informo, que por resolución dictada en audiencia de las ocho horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero del corriente año, se ha resuelto solicitar ante sus buenos oficios, certificación de las actas de los expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional que contengan información entre los años 1981 y 1983, debido a que se está tramitando un proceso de apelación referencial N.º 167-A-2013. Dicha información, para que me dicha entidad para brindar una resolución conforme a derecho.

No omito manifestar, que dicha información se requiere con carácter urgente, por lo que atentamente se solicita que remitan dicho informe dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Atentamente, me suscribo muy atentamente

DIOS UNION LIBERTAD

CARLOS ADOLEFO ORTEGA UMA

Comisionado Presidente

Instituto de Acceso a la Información Pública.



Recibido 28-1-14
a 3:00 PM





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CULTURA Y ARTE
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Archivo General de la Nación, 28 de enero de 2014.

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de nuestra Institución, expresándoles nuestros mejores deseos de éxito en su importante labor.

Me dirijo a Ustedes para informarles que por instrucciones del Dpto. Jurídico de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, me es imposible otorgarles la información requerida. Lo anterior debido a que deben agotarse las instancias correspondientes. En este caso, la recomendación es que soliciten dicha información en la Oficina de Información y Respuesta de Casa Presidencia.

Atentamente,



Mtro. Gerardo Monterrosa

Director del Archivo General de la Nación

NUE: 67 -A - 2013.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con quince minutos del veintinueve de enero de dos mil catorce.

Por recibida la nota de correspondencia suscrita por el Director del Archivo General de la Nación, mediante la cual manifiesta que no puede entregar la certificación de las actas de expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional que contengan información entre los años 1981 y 1983.

Dicha entrega fue ordenada por este Instituto, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 87 y 93 de la LAIP, como prueba para mejor proveer en el presente recurso de apelación del procedimiento de acceso a la información pública.

Toda vez que la prueba requerida se hace con fundamento en las atribuciones legales de este Instituto, por este medio, **SE RESUELVE:**

Ordénese a la servidora pública **ANA MAGDALENA GRANADINO, Secretaria de Cultura de Presidencia**, dependencia a la que está adscrita la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte, y a su vez la Dirección del Archivo General de la Nación, para que en plazo de **cuarenta y ocho horas** siguientes a la notificación de esta resolución, gire las órdenes correspondientes y remita a este Instituto certificación de las actas de expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional que contengan información entre los años 1981 y 1983, si las hubiera; y asimismo manifieste si existen actas de expurgos de documentos generados por el Ministerio de la Defensa Nacional antes del año 1988, presentando certificaciones de las mismas, si la hubiere. Para tal efecto, líbrese el oficio correspondiente a la brevedad.

NOTIFÍQUESE.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

San Salvador, 29 de enero de 2014

ANA MAGDALENA GRANADINO

Secretaria de Cultura de la Presidencia

Atentamente y por este medio le informo, que por resolución dictada a las ocho horas con quince minutos de este día, se ha resuelto ordenarle que remita a este Instituto certificación de las actas de expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional, que contengan información generada entre los años 1981 y 1983; además que manifieste si existen actas de expurgos de documentos generados por dicha Secretaría de Estado antes del año 1988, presentando certificaciones de las mismas, si las hubiere. Dicha información será de mucha utilidad para brindar una resolución conforme a derecho en el proceso de apelación que se está tramitando ante este Instituto bajo la referencia NUE 67-A-2013.

No omito manifestar, que dicha información se requiere con carácter urgente, por lo que atentamente se solicita que la remitan dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Sin otro particular, me suscribo muy atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD


CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA

Comisionado Presidente

Instituto de Acceso a la Información Pública



NUE: 67 -A - 2013.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con quince minutos del veintinueve de enero de dos mil catorce.

Por recibida la nota de correspondencia suscrita por el Director del Archivo General de la Nación, mediante la cual manifiesta que no puede entregar la certificación de las actas de expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional que contengan información entre los años 1981 y 1983.

Dicha entrega fue ordenada por este Instituto, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 87 y 93 de la LAIP, como prueba para mejor proveer en el presente recurso de apelación del procedimiento de acceso a la información pública.

Toda vez que la prueba requerida se hace con fundamento en las atribuciones legales de este Instituto, por este medio, SE RESUELVE:

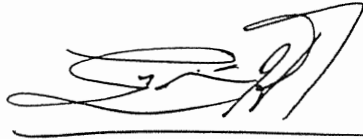
Ordénese a la servidora pública **ANA MAGDALENA GRANADINO**, Secretaria de Cultura de Presidencia, dependencia a la que está adscrita la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte, y a su vez la Dirección del Archivo General de la Nación, para que en plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta resolución, gire las órdenes correspondientes y remita a este Instituto certificación de las actas de expurgos de documentos relativos al Ministerio de la Defensa Nacional que contengan información entre los años 1981 y 1983, si las hubiera; y asimismo manifieste si existen actas de expurgos de documentos generados por el Ministerio de la Defensa Nacional antes del año 1988, presentando certificaciones de las mismas, si la hubiere. Para tal efecto, líbrese el oficio correspondiente a la brevedad.

NOTIFÍQUESE.

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
RECEPCIÓN
CORRESPONDENCIA RECIBIDA No. Yadira Gudiel
Fecha: 29 ENE. 2014
Hora: 15:32
Nombre: 15:32

Es...

Conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, a las catorce horas del día veintinueve de enero de dos mil catorce.



MILTON EDGARDO HERNÁNDEZ
NOTIFICADOR IAIP.-



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Despacho del Ministro

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No.	0182
DEPENDENCIA	DAJ/DDHH.
CLASIFICACIÓN	CONFIDENCIAL.
FECHA	29ENE014.
ASUNTO	INFORME.
CÓDIGO	B3c1b – 071.

HONORABLE SEÑOR
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS, actuando en mi calidad de Ministro de la Defensa Nacional, y en atención al caso NUE: 67-A-2013 (JC); a Usted respetuosamente **EXPONGO**:

Que según consta en el acta N° REF. 67-A-2013 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce; siendo el día y hora señalada para realizar el reconocimiento de los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, se hizo constar en referida acta lo siguiente: "...se nos ha denegado el acceso a las instalaciones de los archivos de la Secretaría de Estado y unidades militares, debido a que, según ordena esta diligencia debe ser autorizada por el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, ya que es el Titular o Ente obligado facultado para ordenar el cumplimiento de esta diligencia, ya que ejerce el cargo máximo de la Fuerza Armada, conforme a lo dispuesto en el artículo dos del RELAIP y artículo ciento cincuenta y siete de la Constitución..."; no obstante, siendo este documento suscrito por el señor Comisionado, Licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez y después haber fundamentado en legal forma, dicho Comisionado dijo al periódico La Prensa Gráfica lo siguiente: "**Jurídicamente hablando creemos que no hay impedimento para el reconocimiento, dado que el titular del Ministerio de la Defensa es el ministro y no el presidente. Eso ya se les hizo ver a ellos. Lo que va hacer el Instituto es valorar la negativa que tiene el señor Ministro de la Defensa, de acuerdo con la sana crítica**"; en ese sentido, el señor Comisionado Campos Pérez, con su declaración eventualmente podría haber adelantado criterio, vulnerando el principio de imparcialidad, mostrando un interés en favor de los ciudadanos peticionarios; lo cual, compruebo con fotocopia de la noticia publicada el día veinticuatro de enero del presente año, en donde aparece lo expresado por el Comisionado en mención.

Por otro lado, se considera que lo relativo al "reconocimiento" estipulado en la audiencia oral de fecha 10 de enero de 2014, pudiere constituir un acto ilegal por parte del referido Instituto en virtud de los argumentos siguientes:

1. Consideramos que no aplica el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), debido que en la resolución se ha cometido un error de interpretación y aplicación del CPCM, porque la información cuyo reconocimiento se ha pretendido, no puede obtenerse válidamente por ese medio probatorio ya que éste se concibe como la apreciación directa y descriptiva por parte del juez de un bien mueble o inmueble, no de documentos. En tal sentido pareciere que la decisión de proceder al reconocimiento judicial no sólo es impropia sino ilegal por contrariar las disposiciones del CPCM.

2. La decisión de llevar a cabo el reconocimiento es contraria al CPCM, porque éste permite que el juez pueda practicar algún tipo de prueba, sólo si es para mejor proveer y ésta se circunscribe a lo previsto en el Art. 321 del mismo. Este artículo señala que la carga de la prueba es exclusiva de las partes. Sin embargo, respecto de la prueba, que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el Juez podrá ordenar diligencias con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio; en tales diligencias no se podrán introducir hechos nuevos, bajo ninguna circunstancia, ni tampoco practicar ningún medio probatorio no introducido oportunamente por las partes. En tal sentido, ordenarse un reconocimiento cuando no sólo el mismo es impropio sino que "de oficio" contraria el espíritu del CPCM en cuanto al principio de aportación, del que se colige que sólo las partes pueden proceder a la obtención de prueba.

3. Que la forma de proceder es también contraria a lo previsto en el CPCM, debido que referida decisión está en contra del Art. 86 de la Constitución, del que se deriva el principio de legalidad. Este principio -señala la jurisprudencia constitucional de este país- se constituye en una herramienta de certeza para el justiciable, en el sentido que la norma de la que se echará mano para juzgar (jurisdiccional o administrativamente) no sólo esté vigente y sea predeterminada, sino además que se aplique bajo los parámetros que la propia Constitución otorga, desde el punto de vista de la interpretación conforme. Es una garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones (Lex Certa).

Esta exigencia tiene implicaciones no sólo para el legislador, sino también para los órganos judiciales y administrativos a quienes les está vedado la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. En términos concretos entonces, el principio de legalidad implica el sometimiento de la Administración al cumplimiento de las atribuciones y competencias que por ley se le establecen; es decir, todos los entes públicos se encuentran vinculados por el principio de legalidad, en tanto que toda actuación de éstos ha de manifestarse necesariamente como el ejercicio de un poder atribuido por norma jurídica, la que le construye y limita.

4. Que la supletoriedad del CPCM si bien aplica a algunos procesos administrativos, ello es sin perjuicio de la naturaleza de la norma, procedimiento y régimen sancionador especial de la norma que rige a la institución, por lo cual su escogitación y aplicación dependerá de cada caso, siendo que el reconocimiento judicial no tendría por qué ser una norma aplicable de la manera que lo ha sido en el presente caso. Adicionalmente, dentro del Art. 58 de la LAIP se encuentran las atribuciones del Instituto, entre las cuales no figura la realización de "reconocimientos" en las instalaciones de las unidades administrativas para verificar la existencia o calidad de la información que poseen en los archivos; así como, en ninguna

parte de la referida Ley de Acceso a la Información Pública, se le da la facultad para realizar éste tipo de medidas, siendo por tanto contrario al Principio de Legalidad su realización.

Vale la pena mencionar nuevamente, que la información es inexistente en virtud de lo que ya consta en el expediente del proceso respectivo y en las audiencias llevadas a cabo, donde se ha hecho constar que se realizaron todas las acciones necesarias para obtener la información, determinándose mediante dichas acciones que la información no existe en ningún expediente.

Por lo antes expuesto a Usted, con todo respeto **PIDO:**

1.- Se me admita el presente escrito, en el carácter que comparezco, y se adjunte al proceso administrativo del caso NUE: 67-A-2013.

2.- Que en beneficio al respeto a la garantía de igualdad entre las partes, establecido Art. 102 LAIP y debido al conflicto de imparcialidad mostrado por el señor Comisionado Licdo. JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ, se separe y abstenga de seguir conociendo de referido caso, convocándose al señor Comisionado Suplente, de conformidad al Arts. 52 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) y Arts. 52 y 59 de la LAIP.

3.- Se tomen en cuenta los argumentos anteriormente planteados y se resuelve conforme a lo establecido en la Ley.

Deseo dejar constancia de mi respeto a la legalidad (Art. 86 CN inciso último) y que esta respuesta se ajusta a los hechos expuestos y al derecho aplicable.



DIOS, UNIÓN, LIBERTAD

DAVID MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

Presentado por Juan Carlos Méndez Hernández

Quien se identifica con DUI

a las once horas

ante de veinte de enero de 20 14

Junto con

NUE: 67-A-2013 (JC)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del cuatro de febrero de dos mil catorce.

A sus antecedentes el escrito de fecha 29 de enero de 2013 remitido a este Instituto por el Ministro de la Defensa Nacional, **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, mediante el cual solicita que se abstenga de seguir conociendo en el presente procedimiento y se lo separe del mismo al Comisionado JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ, por considerar que existe un *conflicto de imparcialidad*, en virtud de que podría haber adelantado criterio al haber brindado declaraciones a “La Prensa Gráfica”, publicadas el 24 de enero del corriente año, en las que manifestó lo siguiente: *“jurídicamente hablando creemos que no hay impedimento para el reconocimiento, dado que el titular del Ministerio de la Defensa es el Ministro y no el Presidente. Esto ya se les hizo ver a ellos. Lo que va a hacer el Instituto es valorar la negativa que tiene el señor Ministro de la Defensa de acuerdo con la sana crítica”*.

1. Al respecto, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que las actuaciones procedimentales se sujetarán a los principios de celeridad y oficiosidad, entre otros, y supletoriamente se ceñirán a lo dispuesto en el derecho común. En ese sentido, a pesar que no lo haya manifestado así el Ministro de la Defensa Nacional, en esencia, lo que solicita es que se *recuse* al Comisionado designado al caso.

Los arts. 87 y 91 de la LAIP prevén que admitido el recurso de apelación el Instituto lo someterá a uno de sus comisionados de manera rotativa, quien en el plazo de instrucción deberá, entre otras cosas, elaborar un proyecto de resolución que someterá al pleno al finalizar la audiencia oral y dicho comisionado no participará en las decisiones del pleno referente al caso.

La audiencia oral fue finalizada el 24 de enero de este año quedando excluido, a partir de ese momento, el comisionado designado en la toma de decisión del caso, por lo

que habiéndose presentado recusación contra él hasta el 29 de ese mismo mes y año, el incidente resulta manifiestamente improcedente.

2. Por otra parte, en el escrito presentado también se incluye una serie de alegatos que solicita sean considerados para resolver el recurso.


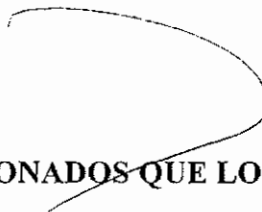
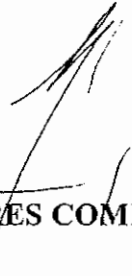
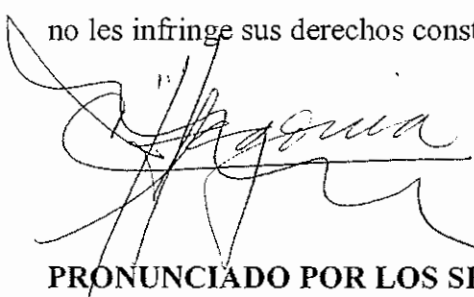
Sobre este particular es necesario señalar que en virtud de los arts. 91 y 96 de la LAIP, una vez finalizada la audiencia oral, el Instituto queda habilitado para emitir la resolución definitiva que corresponda, lo que significa que la referida audiencia es el momento procesal oportuno para realizar los alegatos y en consecuencia, la última etapa para aportar prueba, de modo que no se pueden considerar las alegaciones hechas posteriormente, ya que ello vulneraría el derecho de defensa de los apelantes y el principio de igualdad de “armas procesales”, por lo que se desestima la petición realizada.

Por tanto, de conformidad con los arts. 6 y 18 de la Constitución; 87, 91, 96 y 102 de la LAIP, **SE RESUELVE:**

a) *Declárese* no ha lugar, por ser manifiestamente improcedente, la solicitud de recusación promovida por el titular del ente obligado.

b) *Declárese* sin lugar la petición de considerar los alegatos esgrimidos por el referido Titular.

c) *Notifíquese* a las partes esta resolución, haciéndole saber a los ciudadanos apelantes que se omitió su traslado a la solicitud planteada, en razón que esta resolución no les infringe sus derechos constitucionales de audiencia y defensa.


PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LO SUSCRIBEN.



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Resolución de solicitud de recusación

7 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

5 de febrero de 2014, 9:24

Señores (as):

Carolina Constanza Baires

Helí Jeremías Hernández Hernández

Marcos de Jesús Portillo Regalo

Buenaventura Alas Rivera

Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía

Andrés Antonio Romero Santamaría

Presentes.

A través de este medio, se les adjunta auto por medio del cual se resuelve solicitud de recusación presentada por el Ministro de la Defensa, David Munguía Payés, referente al caso IAIP 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández

Notificador IAIP.-**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA****Fomentando la Cultura de Transparencia**

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

2 archivos adjuntos**IAIP 67-A-2013 Resolución de solicitud de recusación (Ciudadanos).pdf**

350K

**IAIP 67-A-2013 Solicitud de recusación.pdf**

538K

Madeleine Lagadec

5 de febrero de 2014, 10:00

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Señores/Señoras IAIP:

Por recibido el escrito y por notificados, notificadas de la resolución.

Quedamos pendientes de cualquier otra comunicación,

Saludos Cordiales,



NOTIFICACIÓN IAIP 67-A-2013 Resolución de solicitud de recusación

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

5 de febrero de 2014, 9:25

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno
Oficial de Información
Ministerio de la Defensa Nacional
Presente.

En virtud de lo establecido en el Art. 69 de la LAIP, se ruega hacer del conocimiento al Gral. David Munguía Payés, Ministro de la Defensa, auto por medio del cual se resuelve solicitud de recusación, referente al caso IAIP 67-A-2013. Favor leer con detenimiento. .

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080



IAIP 67-A-2013 Resolución de solicitud de recusación (Titular).pdf

348K

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA CORREO ELECTRÓNICO

El Infrascrito Notificador del Instituto de Acceso a la Información Pública, a las 15 horas con 58 minutos del día 07 de febrero de dos mil catorce. Procedo a Notificar en legal forma a

David Munguía Payé en
calidad de solicitante. Diligencia que
realizo por medio del sistema electrónico proporcionado para tales efectos, correo electrónico
oirmdn@faoe.gob.sv

Enviando copia certificada de la resolución pronunciada a las 09 horas con 10 minutos del día 04 de febrero del año dos mil catorce, en el expediente con referencia 67 - A - 2013, la cual recibió Carolina Abrego, quien manifestó ser Secretaria OIR - MDN, confirmado por llamada telefónica al número 2250 - 0134. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en los arts. 102 LAIP, en relación al 178 CPCM, teniéndose el acto por notificado transcurridas las veinticuatro horas posteriores a la fecha de la presente acta. No habiendo nada más que hacer constar extendiendo y firmo la presente.



MILTON EDGARDO HERNÁNDEZ
NOTIFICADOR IAIP.-





NUE 67-A-2013 (JC)

CONSTANZA BAIREs y otros contra MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Recurso de apelación



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.

El presente procedimiento de acceso a la información ha sido promovido ante este Instituto en virtud del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos **CAROLINA CONSTANZA BAIREs, HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARCOS DE JESÚS PORTILLO REGALO, BUENAVENTURA ALAS RIVERA, LEONOR VICTORIA PINEDA VIUDA DE MEJÍA y ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA**, en adelante identificados como “los ciudadanos”, “los solicitantes” o “los apelantes”, contra la resolución pronunciada el 23 de noviembre de 2013, por el Oficial de Información del **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**, en adelante “MDN” o “el Ministerio”, ente obligado a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y representado por su titular, el General de División, Ministro de la Defensa Nacional y servidor público **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**.

**CONSIDERANDO:**

I. El 28 de octubre de 2013 los ciudadanos solicitaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública del ente obligado la información relativa a: “Detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, [en] febrero de 1983 y en el Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca,

San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en esos períodos”.

En respuesta a dicha solicitud, el Oficial de Información del MDN emitió la resolución impugnada que confirmó la *inexistencia* de la información requerida.

II. Inconformes con ello, el 29 de noviembre del año pasado, los ciudadanos presentaron recurso de apelación ante este Instituto manifestando que la información solicitada existe en poder del MDN y por tanto, en el contexto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, consideran infringidos sus derechos de acceso a la información y a la verdad.

III. Con fecha 2 de diciembre de 2013, entre otras cosas, este Instituto admitió el recurso de apelación y designó al comisionado **JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ** para la instrucción del procedimiento y elaboración del proyecto de la resolución definitiva, y ordenó al titular del ente obligado que rindiera el informe de Ley.

Dicho titular respondió que se habían realizado solicitudes a las diversas áreas del Ministerio donde pudiera estar alojada la información solicitada, sin que fuera posible ubicarla; que se realizaron todos los esfuerzos posibles para la búsqueda de la información resultando ésta inexistente; y, finalmente, que por haberse hecho tales diligencias el derecho de acceso a la información de los apelantes no se ha vulnerado. Ofreció prueba documental que ya estaba agregada al expediente administrativo.

IV. La audiencia oral y pública se celebró el 10 de enero de 2014 y en ella los apelantes ofrecieron como prueba: (i) declaración jurada del ciudadano Andrés Antonio Romero Santamaría, en la que expresa haber presenciado un operativo militar realizado el

28 de febrero de 1983, en la jurisdicción del Cantón Tenango, municipio de Suchitoto, agregada a folios 29 y 30; y (ii) copias de noticias publicadas en los periódicos “El Diario de Hoy”, de fechas 22 y 26 de febrero de 1983, y en “La Prensa Gráfica”, de fechas 25 de febrero y 2 de marzo de 1983, certificadas por la Biblioteca Nacional “Francisco Gavidia”, agregadas a folios 31 a 37 de este expediente.

Por su parte, los representantes del ente obligado manifestaron que se había realizado una búsqueda en los archivos del Ministerio, del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) y de la Quinta Brigada de Infantería, por ser las unidades militares que contienen los archivos relacionados a las áreas geográficas señaladas por los apelantes y que no pudo ubicarse la información; que dentro de la organización del MDN durante el conflicto armado solo se giraban directrices generales y eran los encargados de las áreas territoriales correspondientes los que ejecutaban, a su criterio, las acciones más adecuadas, de lo cual no hay registro documental disponible pues esos documentos muchas veces quedaban en el campo. De igual forma expresaron que la presencia de efectivos militares en una zona específica no implica necesariamente la realización de un operativo, sino que pudo tratarse de patrullajes regulares y no de una acción táctica determinada. Finalmente, agregaron que el MDN solo cuenta con información ordenada a partir del año 1988, por lo que les resulta imposible entregar información producida antes de esa época.

Una vez recibida la prueba este Instituto resolvió suspender el desarrollo de la audiencia y ordenó para mejor proveer la realización de un reconocimiento o inspección en los archivos del MDN, del EMCFA y de la Quinta Brigada de Infantería en San Vicente, con el objeto de verificar la inexistencia de la información solicitada y, para tal efecto, nombró al comisionado designado al caso. Sin embargo, dicha diligencia no pudo ejecutarse debido a que “por orden superior del Ministro de la Defensa Nacional, David Victoriano Munguía Payés, se [denegó] el acceso a las instalaciones de los archivos de la Secretaría de Estado y unidades militares”, tal como consta en el acta de fecha 23 de enero de 2014, agregada a folios 46 del presente expediente.

La audiencia fue reanudada el 24 de enero del presente año, y en ella las partes expresaron sus alegatos y reiteraron sus posiciones. En esa ocasión, para mejor proveer, este Instituto requirió al Archivo General de la Nación (AGN) certificación de las actas de eliminación o expurgo de documentos del ente obligado.

Mediante nota del 27 de enero de este año, el Director del AGN informó que por instrucciones del Departamento Jurídico de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) no le era posible entregar la información solicitada; por lo que se requirió directamente a ésta, la cual, con fecha 31 de enero de 2014, remitió copias de los folios correspondientes a las actas de expurgo de los documentos relativos al MDN entre los años 1981 y 1983, y de los documentos generados por ese Ministerio antes del año 1988.

RESULTANDO:

V. Previo a resolver la cuestión de fondo, conviene hacer algunos comentarios sobre el derecho de acceso a la información pública (DAIP) y el derecho a conocer la verdad, pues ambos se encuentran en una relación de complementariedad y reciprocidad.

Siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este Instituto ha sostenido que el DAIP tiene una indiscutible condición de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión —art. 6 de la Constitución (Cn.)— que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho consagrado en el art. 85 Cn., que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración.

De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o

equilibrio con otros derechos en conflicto; y, d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.

También este Instituto ha dicho que el contenido constitucionalmente garantizado por el DAIP no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz, por lo que es un deber de aquéllos fundamentar la imposibilidad de su acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución.

En cuanto al marco supra legal, el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a investigar y recibir informaciones, en los siguientes términos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, el DAIP está reconocido en instrumentos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH– (art. 13.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2) que conciben, respectivamente, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” y que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Si bien tales disposiciones aparentan referirse solo a la libertad de expresión debe aclararse que esta última comprende la prerrogativa de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, y por cualquier medio, siendo en la voz “recibir y difundir informaciones” donde se encuentra reconocido el derecho a ser informado y

correlativamente, la obligación del Estado de brindar información. De esa manera, la libertad de información se entiende como un derecho derivado de la libertad de expresión.

Sin duda una fuente importante de reconocimiento del DAIP como derecho fundamental es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pronunció su primera sentencia el 19-IX-2006 (caso *Claude Reyes y otros vs. Chile*) en la que estableció una serie de criterios para todos los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En dicho precedente se destacó la importancia del DAIP para el ejercicio del control democrático de la gestión pública y la obligación que tienen los Estados de garantizarlo, a través de que sus actuaciones estén regidas por los principios de publicidad y transparencia, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Posteriormente, la CIDH en el caso *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil*, del 24-XI-2010, sostuvo que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia; y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. Reafirma la idea de que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima publicidad, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.

VI. En cuanto al derecho a conocer la verdad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido recientemente que el mismo encuentra sustento en los arts. 2 inc. 1º y 6 inc. 1º de la Cn., señalando -en casos como el presente- que la verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables,

imparciales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción (sentencia de amparo: 665-2010, del 5-II-2014).

Asimismo, debido a que la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres, el derecho a conocer la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre hechos que hayan vulnerado los derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon, y por lo tanto implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.

El tribunal constitucional destacó que el Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que le permitan llegar a la verdad de los hechos y, además, reconoció el derecho a conocer la verdad a partir de su doble dimensión: a) la individual, que legitima a las personas directa o indirectamente afectadas por la vulneración de sus derechos fundamentales a saber, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo y por qué se produjo, entre otras cosas; y, b) la colectiva, en la medida que considera que la sociedad también es titular y tiene el legítimo derecho a conocer la verdad de hechos que hayan vulnerado gravemente los derechos fundamentales de las personas, pues con ello se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales.

Sobre el particular, la CIDH en precedentes como *Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, 25-XI-2003 y *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil*, resolvió que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad y por lo tanto, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. El tribunal internacional

consideró que el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer la verdad se enmarca en el derecho de acceso a la justicia; la “obligación de investigar” como una forma de reparación, ante la necesidad de remediar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto; y que el derecho a conocer la verdad está relacionado con el acceso a la justicia y el derecho a buscar y recibir información.

Finalmente, el derecho a conocer la verdad también ha sido reconocido en diversos instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, específicamente en el *Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad* (E/CN.4/2005/102/Add.1), del 8-II-2005, de la ONU, que declara: “(...) cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado, con relación a la perpetración de crímenes aberrantes; el Estado debe preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y facilitar el conocimiento de tales violaciones, como medida encaminada a preservar del olvido la memoria colectiva; las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron; incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. En todo caso los Estados deben garantizar la presentación de archivos relativos a violaciones de derechos humanos y la posibilidad de consultarlos (...)”.

VII. Para resolver el caso concreto es necesario, en primer lugar, analizarlo en el contexto de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil, uno de cuyos principales actores fue la Fuerza Armada. No puede obviarse la importancia histórica de los hechos del caso y que tiempos como aquellos, de tan triste recuerdo, no deben ser olvidados o ignorados de la memoria colectiva. Asimismo,

debe destacarse el valor y la fuerza de las resoluciones expedidas por este Instituto, como órgano garante del DAIP en El Salvador, que puede conocer directa o indirectamente a través de un procedimiento administrativo de acceso a la información sobre la vulneración de derechos humanos, sin reemplazar la competencia judicial, aunque sí complementarla.

En ese sentido, el IAIP representa un organismo de control de toda la Administración Pública, incluyendo a los tres órganos fundamentales del Estado, especialmente en lo que atañe a la transparencia de su gestión y el acceso a la información que generan, administran o tienen en su poder, estimulado por medio del ejercicio democrático de la participación ciudadana en los asuntos de interés público. De ese modo, debe reconocerse no solo la fuerza vinculante de las resoluciones que emite el Instituto, sino el carácter mediático de ellas que ayudan a formar una opinión pública vigorosa que contribuye a establecer un Estado Democrático de Derecho.

Desde luego, las resoluciones del Instituto deben ser fundamentadas en los hechos probados y las razones legales procedentes; las pruebas aportadas en el proceso serán apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 90 de la LAIP). Este sistema de valoración de las pruebas consiste en analizarlas en su conjunto y no solo individualmente, conforme a las máximas de la experiencia, la lógica, el correcto entendimiento humano y el conocimiento científico, mediante el cual se asigna a cada medio probatorio un determinado valor o se indican las razones por las que no se les otorga valor alguno, pudiendo aun -en ausencia de ellos- otorgarse valor a los indicios dimanantes de la conducta procesal de las partes.

De acuerdo con el art. 82 de la LAIP cuando el Oficial de Información “afirme” la inexistencia de la información, el solicitante puede interponer el recurso de apelación ante el Instituto. El art. 73 de la Ley prevé que cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el Oficial de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizarla, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que “confirme” la inexistencia de la información.

Por otra parte, el art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones

públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, y el art. 19 párrafo final señala que: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”, de modo que conceptos tales como la “defensa nacional” o la “seguridad pública” no pueden abarcar el secreto sobre actividades estatales criminales.

Al respecto, la CIDH en el caso *Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, antes citado, sostuvo que: “(...) En caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes (...) Los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos (...) La decisión de negar el acceso a los archivos militares y de negar la entrega de información jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho [ya que] debe estar sometida a los controles de otros órganos del Estado o de un órgano que garantice el respeto al principio de división de poderes (...) tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada”.

VIII. En el caso examinado, la prueba aportada por los apelantes relacionada con la ocurrencia de los eventos se acoge favorablemente, más allá de ser considerados hechos notorios y de los cuales dieron noticia los principales periódicos impresos de aquella época; y aunque, en este recurso de apelación, los particulares nada tengan que probar en cuanto a la naturaleza pública de una información, en virtud del principio de “máxima publicidad”, el MDN tampoco demostró que sus agentes no estuviesen involucrados en lo sucedido y por lo tanto, en principio, debe presumirse que al menos en sus unidades militares fue generada la información requerida.

Los apoderados del MDN, amén de reconocer en la audiencia oral que representan a una institución que cuenta con archivos organizados, pero que no posee información

anterior al año 1988, no ofrecieron más prueba documental que la agregada en el expediente administrativo, de la cual solo consta el oficio de respuesta N° 1434, de fecha 12 de noviembre de 2013, suscrita por el Jefe del EMCFA, General de División, Rafael Melara Rivera, en la que informa al Viceministro de la Defensa Nacional, General de Aviación, Jaime Leonardo Parada González, que: "(...) se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros que lleva este Organismo, de cuyo resultado se ha podido constatar que no se encuentran documentos o registros relacionados a supuestas operaciones militares realizadas por la Fuerza Armada en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Departamento de Cuscatlán en el mes de febrero del año 1983 y en Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, Departamento de San Vicente, el 25 de julio de 1981 (...)".

A juicio de este Instituto, el MDN no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existe. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, las instituciones públicas actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos. Alegar la falta de prueba sobre la existencia de información, sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, posibilita la actuación discrecional y arbitraria de los entes obligados de facilitar o no determinada información, lo que genera inseguridad jurídica a los ciudadanos respecto al ejercicio de este derecho y a conocer la verdad de lo ocurrido.

Lo anterior es congruente con una de las manifestaciones del principio de máxima publicidad, consagrado en el art. 4 letra a. de la LAIP, que impone a los entes obligados la carga o el deber de aportar prueba sobre las excepciones establecidas por la ley para denegar el acceso a la información, lo mismo que cuando afirman la inexistencia de una información; en cuyo caso, los sujetos obligados tienen el deber de acreditar fehacientemente en el expediente que han realizado una búsqueda exhaustiva y diligente de la misma, lo que incluye, pero no se limita a, relacionar los inventarios de los archivos

correspondientes y detallar las actuaciones o procedimientos seguidos para localizar, recuperar y reconstruir la información, según sea el caso.

Y es que en el marco de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales atribuidas a los agentes de seguridad del Estado, este Instituto —como órgano garante e intérprete de la LAIP— considera que, en estos casos, la declaratoria de inexistencia de la información solicitada no debe recaer en el ente obligado, sino en un tercero, debido al eventual conflicto de intereses entre la necesidad de proteger información “sensitiva” en poder del MDN, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las víctimas y sus familiares de los actos ilícitos cometidos por sus agentes, así como juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por otro.

En consecuencia, el MDN debe permitir el acceso personal a los archivos o lugares físicos donde se podría encontrar la información solicitada, no solo a las víctimas y sus familiares, sino también a este Instituto cuando conozca de los recursos de apelación, medida que ha sido recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2011 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en cuanto es obligación del Estado poner a disposición de los solicitantes los documentos donde consten los inventarios y archivos correspondientes, y permitir el acceso al recinto donde se albergan, para verificar efectivamente si la información es inexistente y corroborar las diligencias de búsqueda de la información realizadas.

IX. En el procedimiento también consta la negativa del Ministro de la Defensa Nacional a permitir el acceso del comisionado designado a las instalaciones de los archivos de esa Secretaría de Estado y unidades militares, para corroborar en el lugar la presunta inexistencia de la información solicitada, lo que revela una conducta procesal obstaculizadora de los derechos de acceso a la justicia y a la información pública, y a conocer la verdad de lo ocurrido, tanto para los familiares de las víctimas como de la sociedad, en conjunto, y por lo tanto, de conformidad con las reglas de la sana crítica, constituye un indicio que se encuentra dotado de relevante fuerza de convicción de que precisamente algo se quiere ocultar.

Este Instituto siguiendo la jurisprudencia de la CIDH en el caso *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil*, considera que el DAIP no se satisface con la mera declaratoria de inexistencia de una información, sino se establece una serie de obligaciones estatales a favor de los solicitantes a fin de garantizar el pleno cumplimiento del derecho. En ese orden de ideas, estimamos que el MDN tiene la obligación de realizar de buena fe todas las diligencias necesarias para ubicar físicamente la información solicitada, encargándose de documentar la realización de una búsqueda seria y eficaz, no solo en los archivos de las unidades militares, sino también en cualquier parte que pueda encontrarse indicio alguno de la existencia de tal información.

Ello es conforme con lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde se dispone que el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas internacionales, constitucionales o legales. De ahí que, por ejemplo, si una información que debía custodiar fue destruida o ilegalmente sustraída, y la misma era necesaria para esclarecer violaciones de derechos humanos, el Estado debe adelantar, de buena fe, todos los esfuerzos a su alcance para recuperar o reconstruir dicha información.

En igual sentido, el *Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, ya citado, determina que los Estados tienen el deber de preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos, incluyendo los archivos de: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante con relación a las violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del Fiscal y el Poder Judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación.

X. En cuanto a las copias de certificaciones de actas de expurgo o eliminación de documentos relativos al MDN, y sus respectivos inventarios, remitidas por SECULTURA, considerando que su preparación implica la elaboración de los documentos allí mencionados se puede inferir, en primer lugar, que existe evidencia que el Ministerio realizó procedimientos de expurgo de documentos, los cuales se basan en tablas de plazos de conservación de documentos. Este procedimiento archivístico implica, sin duda alguna, que para realizar estos expurgos de la manera mencionada la institución castrense tuvo que efectuar: a) control de los documentos producidos y acumulados; b) selección de documentos al asignarles un plazo de vida útil en la institución; y c) canales administrativos y procedimientos definidos para su expurgo, eliminación y conservación.

En segundo lugar y contrario a lo manifestado en audiencia por los representantes del MDN, a partir del análisis de las actas e inventarios de expurgo en las brigadas, destacamentos y unidades de la Fuerza Armada, se puede comprobar la existencia de documentos que datan del periodo de conflicto armado, incluso antes de este, los cuales se encuentran organizados y controlados. Con base a estas evidencias y procedimientos antes mencionados, se puede concluir que el MDN tiene todas las herramientas necesarias para demostrar la existencia, o en su caso, la eliminación de los documentos, que contengan la información solicitada; la que puede tratarse de instrucciones, programas, planes de operación y documentación producida por batallones y cualquier registro de movimiento o actividad operativa de sus fuerzas militares, y podría ser ubicada en sus unidades regionales.

Si bien es cierto que el MDN no ha cuestionado la posible realización de las acciones militares sobre las que se ha solicitado la información, sí ha negado rotundamente la existencia de registro alguno sobre tales acontecimientos, siendo que todos los indicios sugieren que esos documentos existen, una vez que tratándose de un episodio tan relevante en la historia reciente de El Salvador, en la que la Fuerza Armada jugó un papel protagónico, no es creíble que no haya sido documentado debidamente o que, en el peor de los casos, el Ejército se haya desecho de todos los registros.

Debe considerarse especialmente que los apelantes solicitaron información relativa a acciones militares delimitadas en tiempo y lugar, pero a la vez requería una parte más general, donde se solicitaba: *“toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en esos períodos”* (resaltado proveído) por lo que resulta inverosímil creer que el MDN carece, incluso, de los registros más básicos sobre las operaciones militares ejecutadas en tales lugares en los años que fueron señalados, como podrían ser las cadenas de mando destacadas en la zona, los planes generales de acción vigentes para esas fechas, los registros de las bajas y los heridos, entre otros.

XI. En consecuencia, este Instituto asienta el criterio que ningún ente obligado a la LAIP puede negar el acceso a la información necesaria para la tutela judicial o administrativa de derechos fundamentales, así como las informaciones o documentos que versen sobre conductas que impliquen violación de derechos humanos practicadas por agentes públicos o mandatos de autoridades públicas tampoco pueden ser objeto de restricción de acceso.

El DAIP se erige como una valiosa herramienta, un instrumento útil y un “derecho-llave” que permite, hoy en día, especialmente a las víctimas y a los familiares de estas, y a la ciudadanía, en general, ser titulares indiscutibles del derecho a solicitar, acceder y recibir información completa, fidedigna y veraz de los archivos del MDN, así como de cualquier otra institución del Estado, para poder cuestionar e indagar sobre los hechos de la historia nacional que permitan arribar al conocimiento de la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

La satisfacción de este derecho implica también la posibilidad de acceder a los lugares físicos donde se encuentra la información, gracias a lo cual es posible conocer los criterios de clasificación de la respectiva oficina o corroborar la inexistencia de la misma. Mientras tanto, el derecho a conocer la verdad supone la facultad de solicitar y obtener información sobre las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos lesivos de derechos fundamentales y en torno a ello existen obligaciones específicas del

Estado, a través de los entes obligados, que no solo consisten en facilitar el acceso a los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de los hechos denunciados.

Dado que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, este Instituto considera que el MDN debe realizar, de buena fe, todas las acciones que sean necesarias para buscar, sistematizar y publicar la información relacionada con las operaciones militares durante la guerra civil, que estén orientadas a la determinación de la verdad y a reparar a las víctimas, así como a los familiares de estas, por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa época.

Finalmente, esta resolución definitiva debe entenderse complementaria a la pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de amparo: 665-2010, del 5-II-2014, en tanto que con fundamento en el DAIP y el derecho a conocer la verdad, ambos de raigambre constitucional, es posible reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos y reparar a las víctimas.

De ahí que, conforme a lo anterior, este Instituto ordena al MDN que ejecute diligencias encaminadas a **recuperar o reconstruir la información solicitada**, siendo que el mismo estaba obligado a su resguardo, las cuales incluyen, pero no se limitan a: (i) realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada por los apelantes, incluyendo esta vez todos los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas indicadas, durante los períodos de tiempo señalados, debiendo, además, dejar constancia fehaciente de los procedimientos empleados para tal efecto y justificar debidamente los resultados obtenidos; (ii) recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron —en todos los niveles— en las operaciones o los hechos alegados; (iii) entregar a los apelantes una copia certificada de los instrumentos de consulta, con los que organiza los archivos correspondientes, ya sean inventarios, catálogos, índices, guías de consulta u otros análogos; (iv) permitir el más

amplio acceso de los apelantes, así como a los investigadores y archivólogos que aquéllos designen, a los archivos y registros que llevan las unidades militares correspondientes, a fin de que puedan constatar los procedimientos realizados en la búsqueda de la información, y corroborar si efectivamente existe o no; y (v) comprobar debidamente la destrucción de documentos oficiales e investigar judicialmente esa destrucción a fin de que los responsables puedan ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.

En virtud del art. 58 letra b. de la LAIP, con el fin de garantizar el debido ejercicio del DAIP, este Instituto verificará de manera directa e inmediata el cumplimiento de todo lo ordenado en esta resolución, bajo pena de iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente ante su eventual incumplimiento.

POR TANTO, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inc. 3°, 58 letras a., b., c. y d., 94, 96 letra d. y 102 de la LAIP, y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República, este Instituto **RESUELVE**:

a) *Revóquese* la resolución del Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional, emitida a las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil trece, por no estar apegada a derecho;

b) *Ordénese* al General de División, Ministro de la Defensa Nacional y servidor público **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS** que, dentro del **plazo de dos meses calendario** contados a partir de la notificación de esta resolución, ejecute diligencias encaminadas a **recuperar o reconstruir la información solicitada**, las cuales incluyen, pero no se limitan a: (i) realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada por los apelantes, incluyendo esta vez todos los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas indicadas, durante los períodos de tiempo señalados, debiendo, además, dejar constancia fehaciente de los procedimientos empleados para tal efecto y justificar debidamente los resultados obtenidos; (ii) recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron —en todos los niveles— en las operaciones o los hechos alegados; (iii) entregar a los

apelantes una copia certificada de los instrumentos de consulta, con los que organiza los archivos correspondientes, ya sean inventarios, catálogos, índices, guías de consulta u otros análogos; (iv) permitir el más amplio acceso de los apelantes, así como a los investigadores y archivólogos que aquéllos designen, a los archivos y registros que llevan las unidades militares correspondientes, a fin de que puedan constatar los procedimientos realizados en la búsqueda de la información, y corroborar si efectivamente existen o no; y (v) comprobar debidamente la destrucción de documentos oficiales e investigar judicialmente esa destrucción a fin de que los responsables puedan ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.

c) *Publíquese* esta resolución, oportunamente;

Hágase saber.

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 10 horas con 05 minutos del día
03 del mes de marzo del año dos mil catorce, se procedió a
notificar en legal forma a René Arnaldo Castellón Mejía
en su calidad de Apoderado Especial del Ministro de la Defensa Nacional
la resolución de referencia 67-A-2013 de las 09 horas
con 30 minutos del día 25 del mes de
febrero del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en
Ministerio de la Defensa Nacional Km. 5½ Carretera a
Santa Tecla, San Salvador
la cual fue recibida por Juan Ulises Artero
_____, quien se identifica con su
Documento Único de Identidad número _____, cuyo
cargo es Jeje de la OIR - MDN.

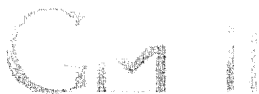
Firma de quien la recibe



Firma del Notificador



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



NOTIFICACIÓN NUE 67-A-2013 Resolución Definitiva

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

3 de marzo de 2014, 12:20

Señores (as):

Carolina Constanza Baires

Helí Jeremías Hernández Hernández

Marcos de Jesús Portillo Regalo

Buenaventura Alas Rivera

Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía

Presentes.

A través de este medio, se les adjunta resolución definitiva, referente al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández

Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-208

 **NUE 67-A-2013 Resolución definitiva (Ciudadanos).pdf**
6534K

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

3 de marzo de 2014, 12:20

Licda. Claudia Lizbeth Interiano Quijada

Presente.

A través de este medio, se le adjunta resolución definitiva, referente al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Lic. Milton E. Hernández

Notificador IAIP.-


VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88. Colonia San Antonio Abad. San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

 **NUE 67-A-2013 Resolución definitiva (Ciudadano).pdf**
7328K**Madeleine Lagadec**

3 de marzo de 2014, 16:29


Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Buenas tardes Señores/Señoras IAIP:

Por recibida la resolución definitiva, agradecemos su comunicación y preguntar si pueden hacernos llegar la resolución en físico, a las oficinas del CPDH en Mejicanos?.

Quedamos a la espera de sus valoraciones,

Saludos cordiales,

 El 3 de marzo de 2014, 12:20, NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]

--

Área Jurídica

Centro Para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec"

(503) 2282-4756

"El derecho a la verdad es el derecho que asiste a las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también de la sociedad en su conjunto..."

Sentencia Amparo 665-2010. 5 de febrero de 2014.-

Sala de lo Constitucional,

Corte Suprema de Justicia.

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

NUE 67-A-2013(JC)
RECURSO DE REVOCATORIA

SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, de generales conocidas en el presente recurso de apelación instruido contra el Ministerio de la Defensa Nacional (en lo sucesivo MDN), en razón de la petición de información y apelación incoada por los ciudadanos Carolina Constanza Baires, Helí Jeremías Hernández Hernández, Marcos de Jesús Portillo Regalo, Buena Ventura Alas Rivera, Leonor Victoria Pineda viuda de Mejía y Andrés Antonio Romero Santamaría (que en lo sucesivo se denominarán indistintamente como “los ciudadanos y/o apelantes”), a ustedes atentamente expongo que:

He sido notificado de la resolución de las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco de febrero de dos mil catorce, efectivamente notificada el día tres de marzo del año que prosigue, en donde a partir de la petición de información incoada por los apelantes consistente en *el detalle de los operativos de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán [en] febrero de 1983 y en el Cantón San Francisco Ángulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nóminas de oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejercito como insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que éste en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultado de las campañas militares que se desarrollaron en esos períodos.* En cuyo sentido, esos Comisionados ilegalmente resolvieron revocar la resolución del Oficial de Información del Ministerio de Defensa Nacional y ordenar al señor Ministro de la Defensa Nacional a ejecutar las diligencias encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada por los ciudadanos, para lo cual en la resolución de mérito enumeraron un conjunto de acciones fuera de las competencias atribuidas a esa autoridad estatal.

Con la finalidad de dar cumplimiento con el principio de definitividad, y con precisas instrucciones del señor Ministro de la Defensa Nacional, vengo a interponer recurso de revocatoria del acto administrativo emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (en adelante IAIP) provisto mediante resolución de las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco de febrero de dos mil catorce.

Para mantener un orden lógico en la exposición de los motivos de ilegalidad que este Ministerio considera atinentes al caso: (I) se harán algunas consideraciones en relación a las vulneraciones efectuadas por ese IAIP al principio de legalidad de la Administración Pública, para luego (II) señalar las incongruencias al principio de verdad material, contradicción y aportación de prueba dentro del procedimiento de apelación.

I. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

En este apartado corresponde referirse a los elementos jurídicos relacionados al principio de legalidad, para lo cual se adecuarán los aspectos inter-contextuales de las transgresiones efectuadas por ese IAIP y los conceptos concretos de vulneración, cuya génesis vienen vinculadas al citado principio de vinculación positiva a todos los funcionarios de la Administración Pública, siendo patente iniciar la argumentación en el siguiente orden a efecto que esa autoridad –bajo el principio de eventualidad- se pronuncie individualmente por cada uno de ellos.

- a) *Transgresión al principio de legalidad por vulneración al elemento volitivo formal del acto administrativo en las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública comprendidos en los artículos 52 y 96 LAIP, y 60 del Reglamento de la Ley.*

El acto administrativo cuenta con requisitos tanto de eficacia como de validez para que pueda explayar sus efectos jurídicos frente al resto de la Administración Pública, los administrados y los terceros que tengan incumbencia en el procedimiento. En ese sentido,

la validez se refiere a la declaración positiva de la Administración de un hecho jurídico y su relevancia en el ámbito legal, adquiere una categoría de validez y, por lo tanto, nace a la vida jurídica pues lleva –en su correcta configuración- *invivita* la presunción de legalidad mientras no sea anulado por una jurisdicción contenciosa administrativa.

Desde esa perspectiva, la existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. Es decir, el acto administrativo existe como tal en el momento que es producido por el órgano competente, con trascendencia temporal, dirigido a causar sus efectos de manera individual o colectiva, y con efectos frente a terceros.

Así, la existencia del acto administrativo, junto con otros elementos en su configuración, se supedita a la forma por la cual surte sus efectos en el ámbito jurídico. Eso quiere decir que, para su correcta formulación, debe adecuarse a los requisitos legales por los cuales se le exige a una entidad administrativa exteriorizar su elemento de voluntad en cuanto a la formación de la decisión. Precisamente, la exigencia de la voluntad como elemento de la eficacia del acto administrativo vuelve patente que tratándose de decretos, resoluciones, acuerdos, órdenes, circulares y ordenanzas los funcionarios públicos acreditados realicen una discusión real, permanente y deliberada sobre los asuntos que son sometidos a su conocimiento de manera que pueda exigirse una mejor motivación en la fundamentación de sus actuaciones.

Sobre esta exigencia más evidente en órganos administrativos colegiados, la Sala de lo Constitucional¹ ha sostenido que “(...) *la diferencia de opiniones en torno a la mejor solución posible de un asunto es prácticamente inmanente a la pluralidad de concepciones desde las que esa solución debe formularse. Y su efecto es positivo. El desacuerdo impone la consideración de alternativas y combate el dogmatismo que supone la certeza de las respuestas indiscutibles; expande el análisis y abre espacio para tesis que de otro modo serían silenciadas; y guía el control externo del criterio aplicado, hasta incluso posibilitar su modificación futura*”.

¹ Sentencia de Inconstitucionalidad de las doce horas del uno de marzo de dos mil trece, en el proceso con número de referencia 78-2011.

De ahí que, para que la continuidad de las deliberaciones no obstaculice el derecho a la protección jurisdiccional o no jurisdiccional de los ciudadanos, las reglas de votación fijan un estándar cuantitativo a partir del cual se considera que la decisión está tomada y es innecesario proseguir la deliberación. Pero esa situación no debe significar que la opinión de la minoría es el mero residuo aleatorio de una tesis fallida en el trance de la deliberación. Sobre este punto, en el mismo precedente previamente señalado por la Sala de lo Constitucional se denota que “(...) [e]l acuerdo de la mayoría de un colegio de jueces no debe excluir, ocultar o silenciar las voces disidentes. El voto particular –tanto discrepante como concurrente– materializa las virtudes liberales y democráticas del disenso. Mediante la libre exposición de su punto de vista, la minoría presiona sobre el rigor analítico del acuerdo mayoritario, transparenta el proceso de la decisión y entrega al mercado de ideas una perspectiva distinta, quizá profética, para la solución de problemas similares en un futuro”.

Con tal antecedente plenamente aplicable a la toma de decisiones de órganos colegiados de la Administración, se vuelve trascendente la obligación que en su toma de decisiones cada uno de sus miembros procure una posición activa en los casos de debate, y en tanto sean minoría de la decisión, expresen los argumentos por los cuales acompañan o disienten de la decisión tomada por sus pares en la formación del acto administrativo.

En esa línea de argumentos, es incuestionable que a partir del procedimiento de elección de Comisionados al IAIP (artículo 53 LAIP) se busque la deliberación por diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a la obligación de los entes obligados de proporcionar información al público de los negocios estatales. De ahí que *ineludiblemente*, de una interpretación sistemática del inciso primero del artículo 52 y la primera parte del artículo 96 LAIP, en relación al artículo 60 de su Reglamento, corresponda a todos los funcionarios que conforman el PLENO de Comisionados pronunciarse sobre los hechos sometidos a su conocimiento, ya sea pronunciándose de manera coincidente o disidente a la decisión de la mayoría.

Esta práctica de emitir votos particulares concurrentes o disidentes no es ajena a ese Instituto; verbigracia de lo anterior deben señalarse las resoluciones con número de referencia NUE 2-A-2014(MV) en donde el Comisionado instructor de este procedimiento, Jaime Campos, ha ejercido su voto particular concurrente y disidente en el caso planteado contra el pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa misma circunstancia sucedió en el expediente con número de referencia 2-D-2013, en el cual, el mencionado Comisionado Campos expresó su voto disidente respecto a la decisión del resto del Pleno. En esta perspectiva, llama poderosamente la atención porque en este caso que compete al MDN existe silencio por parte del resto de Comisionados, y diferencia de firmas en los dos procedimientos reseñados en contraste con el que se impugna en este acto.

Concretamente, la resolución impugnada sólo consta de tres firmas de las cinco posibles a efecto de conformar el pleno de Comisionados tanto por sus titulares o el respectivo llamamiento de sus suplentes. Por ello, puede inferirse que el acto administrativo carece de legitimación volitiva en tanto que dos Comisionados no fueron llamados a participar del proceso de deliberación o se pronunciaron en sentido negativo en la decisión de la mayoría; lo cual vuelve patente la exigencia de sus votos razonados o disidentes al fondo de la decisión y su correspondiente notificación a las partes del procedimiento.

En tal sentido, corresponde solicitar a esa autoridad administrativa que revoque la resolución de mérito al faltar, al momento de la interposición de este recurso, de las formalidades necesarias para la correcta configuración del elemento volitivo del acto administrativo impugnado; en razón que a esta fecha la resolución en comento sólo consta de tres de las cinco firmas posibles que configuran el pleno de Comisionados de ese Instituto sin hacer constancia de la voluntad de los restantes Comisionados de esa institución.

- b) *Violación al principio de legalidad por el exceso de la competencia del LAIP para ordenar al ente obligado a recuperar o reconstruir la información solicitada por los peticionarios, por contravención a lo dispuesto en el artículo 58 y 96 LAIP.*

La doctrina coincide en señalar que la competencia es un elemento intrínseco a la naturaleza de los órganos, entes e instituciones del poder público, en tanto que en términos muy elementales puede definirse como la medida de la capacidad de cada órgano y también como el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano y que uno y otros están autorizados y obligados a ejercitar². Concretamente, Roberto Dromi la define como “(...) *la esfera de atribuciones de los entes y los órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente*”³.

En ese mismo sentido, resulta ilustrativo lo dicho por la Sala de lo Constitucional en cuanto a la competencia de la Administración Pública en tanto que: “(...) *desde el punto de vista técnico- jurídico y con carácter orgánico, el concepto de atribución o competencia puede entenderse como la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal de suerte que al margen de la materia específica asignada no puede desenvolver su actividad; mientras que desde un carácter sistemático, la atribución o competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico. Así, una atribución puede identificarse como la acción o actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público; es decir, los poderes, atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor*”⁴.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que la competencia constituye un elemento esencial de todo acto administrativo, y debe ser entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano. Como elemento esencial de la configuración del acto administrativo, *la competencia condiciona necesariamente la validez del mismo*. Y es que, la competencia es en todo caso una determinación

² Cfr. Parada. Ramón. “Derecho Administrativo”, Tomo II, Decimocuarta edición, Marcial Pons, Madrid. 2000. Pág. 54.

³ Dromi. José Roberto. “Derecho Administrativo, séptima edición actualizada”. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1998. Pág. 76.

⁴ Sentencia definitiva de inconstitucionalidad de las ocho horas y veinte minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil uno, con número de referencia 33-37-2000AC.

normativa; que siempre debe encontrar su fundamento en una norma jurídica. Pues en resumidas cuentas, es el ordenamiento jurídico el que sustenta las actuaciones de la Administración mediante la atribución de potestades habilitantes para desplegar sus efectos ante los administrados; por lo que el acto administrativo requiere de una cobertura legal, o sea, la existencia de una potestad que otorgue competencia al órgano funcionario emisor⁵.

En ese orden de ideas, la competencia se vincula directamente al principio de legalidad en cuanto que sus efectos derivan de la vinculación positiva que expone el artículo 86 de la Constitución (CN) según el cual los entes públicos únicamente pueden hacer los que la norma jurídica les permite, en tanto que a las personas naturales, conforme al artículo 8 CN, todo lo que no les está prohibido por la norma les está permitido a partir de su vinculación negativa con la ley. De ahí que, para los entes del Estado la competencia, además de estar atribuida expresamente y aunque en su órbita puedan existir atribuciones discrecionales en un marco legal, es obligatorio su ejercicio⁶.

Para dar contexto a los elementos de la vulneración realizados por ese IAIP, en primer lugar debe señalarse que las decisiones de la entidad llamada a velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP (artículo 58 letra “a”) ha de basarse en el marco legal vigente a sus funciones. En ese sentido, los ejercicios de replicar, equiparar, asemejar u homologar las competencias atribuidas a Tribunales Constitucionales o Cortes Internacionales en materia de Derechos Humanos se consideran una innecesaria superabundancia normativa que puede contrarrestar y apartar la verdadera finalidad y eficacia tras el derecho de acceso a la información pública.

Precisamente, porque el examen de la normativa de acceso a la información debe enfocarse en la medida de las atribuciones dispuestas por la ley a ese Instituto. De ahí que, si esa autoridad administrativa juzga en base al estándar de los que los otros países puedan considerar jurídicamente correcto pierde el sentido del control legal de sus resoluciones al

⁵ Cfr. Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de referencia 45-I-2000.

⁶ Cfr. Sentencia definitiva de inconstitucionalidad de las diez horas y treinta y cinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil seis, en el procedimiento con número de referencia 2-2005.

hacer suyos contextos diferentes, impropios y apartados de la realidad nacional, lo que supone cierta arbitrariedad en el empleo de tales materialidades.

Sobre este punto, debe dejarse claro que el MDN no pretende ocultar u obstruir el acceso a la información pública sobre planes operativos que sucedieron en épocas del conflicto armado; por lo cual, resulta impropio e innecesario que se antagonice la búsqueda de dicha documentación en los archivos de la institución. Y es que, durante todo el transcurso de esta apelación se ha sostenido –consistentemente– que los archivos reclamados por los peticionarios son inexistentes; y no reservados o confidenciales como fueron declarados en los objetos de los procedimientos tramitados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en los casos Claude Reyes y otros vs. Chile, y Gomes Lund y otros vs. Brasil, los cuales sirven de base a los argumentos aludidos en la resolución impugnada.

Ese desencaje en el contexto de los precedentes de la CIDH retomados por el IAIP, vuelve arbitrariamente lúgubres el papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado de El Salvador. En esa perspectiva, sin una investigación y adecuación histórica apropiada sobre el particular, como más adelante se analizará, el IAIP incumple el deber de buscar la verdad material en sus resoluciones administrativas; mermando contra sí mismo la legalidad, legitimidad, claridad y contexto histórico de sus productos normativos.

En segundo lugar, llama poderosamente la atención las inconsistencias sostenidas por ese IAIP en afirmaciones tales como: “(...) *este Instituto asienta el criterio que ningún ente obligado a la LAIP puede negar el acceso a la información necesaria para la tutela judicial o administrativa de derechos fundamentales, así como las informaciones o documentos que versen sobre conductas que impliquen violación de derechos humanos practicadas por agentes públicos o mandatos tampoco pueden ser objeto de restricción de acceso*” (Párrafo 2, Pág. 15 de la resolución impugnada). En esa lógica, el precedente administrativo sentado no es aplicable al caso de autos; puesto que ninguna autoridad administrativa o judicial, nacional o internacional, ha catalogado las operaciones de las

cuales se pretende la información por parte de los apelantes como graves violaciones a derechos fundamentales, concretamente a derechos humanos.

Aún más, resulta inapropiada la afirmación realizada por ese Instituto en tanto: “(...) *esta resolución definitiva debe entenderse complementaria a la pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de amparo: 665-2010, del 5-II-2014, en tanto que con fundamento en el DAIP y el derecho a conocer la verdad, ambos de raigambre constitucional, es posible reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos y reparar las víctimas*”. A todas luces, resulta alambicado y excesivo considerar que las decisiones de la Sala de lo Constitucional necesiten de complementariedad administrativa para su ejecución; precisamente, por el trecho existente entre la divergencia de los alcances entre tutela judicial y lo limitado de la tutela administrativa.

Nótese, por esa autoridad administrativa que este MDN ha cumplido, previo a la existencia y funcionamiento de ese Instituto, de órdenes emanadas por la Sala de lo Constitucional de la exhibición de algunos de los archivos institucionales castrenses a causa de procedimiento constitucionales tales como el de habeas corpus.

Por ello, esa auto-asimilación de competencias realizada a partir de una extensa paráfrasis, sin ningún análisis formal de competencias funcionales, constituye un exceso indebido en los límites de las atribuciones conferidas al IAIP enmarcadas en el artículo 58 de la ley de la materia.

En tercer lugar, debe traerse a colación la afirmación del Instituto en cuanto que en: “(...) *el marco de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales atribuidas a los agentes de seguridad del Estado, este Instituto –como órgano garante e intérprete de la LAIP- considera que, en estos casos, la declaratoria de inexistencia de la información solicitada no debe recaer en el ente obligado, sino en un tercero, debido al eventual conflicto de intereses entre la necesidad de proteger información “sensitiva” en poder del MDN, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las víctimas y*

sus familiares de los actos ilícitos cometidos por sus agentes, así como juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por otro”.

En este punto, debe reiterarse a ese Instituto la falta de necesidad de antagonizar indebidamente el cumplimiento de los deberes constitucionales de las Fuerzas Armadas, en tanto –como ya se acotó- ninguna autoridad administrativa o judicial, nacional o internacional, en el caso de autos, ha declarado los planes operativos solicitados por los peticionarios como graves violaciones a derechos fundamentales. Tanto así, que fuera de sus competencias atribuidas en el artículo 58 LAIP, ese Instituto es el único quien ha dotado de ese calificativo, en un procedimiento desacertado, sin prueba alguna, de existencia de violaciones a derechos.

Y es que la apoteosis de ese Instituto en la interpretación de la LAIP, no puede conllevar, como quiere interpretarse equivocadamente del artículo 73 LAIP, a que un tercero determine la existencia o no de la información dentro de un ente obligado. Claramente el artículo señalado establece que será el Oficial de Información de cada entidad de la Administración Pública quien analizará el caso y tomará las medidas pertinentes –criterio discrecional acorde a la naturaleza del ente obligado- para localizar la información solicitada y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarla, el referido Oficial confirmará la inexistencia. En este punto, la ley es clara y, por ende, desde ningún criterio lógico de hermenéutica, puede interpretarse que corresponderá a un tercero arrogarse dicha competencia exclusiva del Oficial de Información. Por ende, este exceso de interpretación es desproporcional y arbitrario al contenido de la LAIP.

Finalmente, debe señalarse con mayor envergadura el exceso del Instituto al ordenar al titular al MDN a que en el plazo de dos meses calendario, ejecute medidas encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada por los apelantes. Este punto debe abordarse a partir de la competencia de la Administración como elemento de la validez del acto administrativo. Resultan evidentes, las competencias que tiene el Instituto al resolver los procedimientos de apelación acorde al artículo 96 LAIP. En tal sentido, a esa entidad solo le es permitido: a) desestimar el recurso por improcedente o sobreseerlo; b)

confirmar la decisión impugnada del Oficial de Información; c) confirmar la inexistencia de la información pública solicitada; d) revocar o modificar las decisiones del Oficial de Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o los datos personales, que reclasifique la información, o bien, que modifique tales datos y; e) establecer sanciones o requerir el trámite de la imposición de las mismas a las autoridades respectivas.

Como puede evidenciarse del artículo reseñado, el Instituto no tiene la competencia para ordenar a un servidor público a recuperar o reconstruir la información solicitada; en tanto ***no posee cobertura legal para apartarse del cauce de competencias atribuidas por el legislador.*** En este punto debe subrayarse, la trascendencia de la vulneración al principio de legalidad en cuanto ese IAIP se arrogó una competencia más allá del contenido de la LAIP. Y es que, como ya se mencionó, esa autoridad no puede equiparar la eficacia de sus resoluciones fuera de lo permitido de la ley o pretender que su marco de actuaciones tutele judicialmente contenidos más allá al derecho de acceso a la información pública.

Aunado a lo anterior, como más adelante se revisará, el MDN no está obligado a lo imposible en tanto ya existe una doble verificación dentro de la institución de la inexistencia de la información. El absurdo de realizar tal reconstrucción significaría contradecir el principio de integridad de la información (artículo 4 letra “d” LAIP), el cual exige a la Administración Pública que la información debe ser completa, fidedigna y veraz.

Por los motivos expuestos, se solicita a ese Instituto revocar la resolución impugnada en cuanto a la falta de competencia, investigación y errores de interpretación en el contenido de la LAIP; en vulneración al principio de legalidad de la administración.

II. CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL, CONTRADICCIÓN Y APORTACIÓN DE PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN.

a) Contravención al principio de verdad material.

Otros de los principios que rige la actuación de la Administración Pública es el de la verdad material. A partir de este principio se impone la carga a las diferentes instancias del Estado de dar primacía a la verdad material frente a la verdad formal; eso quiere significar que, existe un deber de esclarecimiento con un criterio de amplitud con respecto a las alegaciones y afirmaciones realizadas por las partes dentro de cualquier procedimiento. De ahí que, se imponga la inherente obligación de adecuar sus actos administrativos a hechos y conducentes a la realidad.

Coincidente con esa definición, la Sala de lo Contencioso Administrativo⁷ refiriéndose a este principio ha sostenido que: “(...) [t]oda decisión de la Administración Pública, debe ser regida por uno de sus principios preliminares que es el de la verdad material; según el principio de la verdad material, las autoridades deben resolver en base a hechos reales, más allá de los que hayan sido alegados y probados por el interesado. Sobre dicho principio, el Dr. Agustín Gordillo manifiesta que, el principio de la verdad material implica que la Administración tiene el derecho y el deber de reunir toda la prueba relativa al conocimiento real de los hechos sobre los cuales se debe resolver”.

Durante todo el procedimiento administrativo tramitado ante ese Instituto, incuestionablemente, se ha favorecido indebidamente la prueba presentada por los peticionarios. Con mayor trascendencia, aquella encaminada a probar la existencia de la supuesta vulneración a derechos fundamentales, la existencia de la información y denotar que el MDN se niega deliberadamente a entregar la información pedida por los ciudadanos.

En esta línea de argumentos, en virtud del principio de verdad material, se incorpora al procedimiento el acta notarial realizada por el señor José Arístides Reinoza, en su calidad de Sargento Mayor de Brigada de las Fuerzas Armadas, quien causó alta en el ejército desde el uno de enero de mil novecientos ochenta y tres. En dicha acta notarial, el Sargento

⁷ Sentencia definitiva de las diez horas y treinta minutos del uno de marzo de 2007, en el proceso con número de referencia 463-2007.

Mayor Reinoza, en su calidad de participante en el conflicto armado del cual se pretende la información, y de experto en comunicaciones militares, declara que la información pretendida por los apelantes pudo nunca ser generada. En tal sentido, el referido Oficial Militar señala que: *“(...)Por otra parte la Doctrina Militar establece lineamientos para regular guerras regulares con otros Estados, los cuales delimitan algunas reglas mínimas a cumplir, siendo diferente el contexto del conflicto interno que vivió nuestro país, dentro del cual, los grupos subversivos no encajaban dentro de dichos parámetros establecidos; ya que era un conflicto de constante movimiento, por lo tanto no era posible establecer operativos militares, planificaciones o ubicaciones geográficas exactas para llevarlos a cabo (...)”*.

A partir de la declaración anterior, que se presenta en original junto a este escrito, se infiere que la información pretendida por los apelantes ni siquiera pudo haberse generado dentro de esta institución. Esto es así en cuanto que, como se señaló en la audiencia realizada en este proceso, las operaciones militares relacionadas a la guerrilla no se adecuan un contexto normal beligerante al igual a lo que sucede en guerras frente a otros Estados. Es decir que, al no tener la guerrilla un frente definido o localización precisa, resulta imposible que se generara alguna información en la forma requerida por los ciudadanos. Más aún, aquella información estratégica que solo fue comunicada por radio a los diferentes puntos de atención del ejército.

De ahí que, esta declaración rompe con la equivocada presunción de apariencia de la existencia de la información; y es que de la documentación remitida por el Archivo General de la Nación no se refiere a ninguno de los elementos pretendidos por los solicitantes –dado que ni ese Instituto pudo vincularlos lógicamente en su exposición en el acto impugnado–; puesto que de ser así, deberían constar en su archivo (artículo 7 de la Ley del Archivo General de la Nación) o hacer constar su destrucción (artículo 12 de la Ley del Archivo General de la Nación).

Estas circunstancias, a pesar de haber sido expuestas en la audiencia oral del caso, no fueron tomadas en cuenta por ese Instituto al momento de emitir el acto administrativo impugnado; lo cual contraviene el principio de verdad material en la resolución del caso.

Aunado al argumento precedente, el Instituto ha sostenido que el MDN no argumentó cuales fueron las diligencias que realizó para confirmar o no la existencia de la información, lo cual –a criterio del IAIP- posibilita la actuación discrecional y arbitraria de los entes obligados de facilitar o no determinada información, lo que genera inseguridad jurídica a los ciudadanos respecto al ejercicio del derecho de acceso y a conocer la verdad de lo ocurrido. En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 LAIP en relación con el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, siendo este un nuevo elemento traído a colación por esa autoridad, resulta pertinente controvertir las afirmaciones del IAIP con la presentación en este escrito de las actas notariales por medio de las cuales los señores Guadalupe Adalberto Cortez y Krissia Adlyd Tenorio Franco, asistentes de archivo de este Ministerio, describen las fechas, los procedimientos, lugares y parámetros de búsqueda de la información en comento dentro del MDN.

En consonancia con lo anterior, y en virtud del principio de verdad material, se agregan a este procedimiento el acta de búsqueda del encargado archivos del MDN y el acta de búsqueda del Oficial de Información de este ente obligado que sirve de base para la resolución de inexistencia que motivo este procedimiento. De lo anterior, en contraste con la prueba presentada por la otra parte, debe remarcarse que de las actas de expurgo no es posible inferir que exista la documentación pretendida por el apelante; y mucho menos de la declaración jurada puede advertirse elementos con los cuales se dé –incluso a manera indiciaria- elementos suficientes de la existencia de la información de mérito.

Por los motivos expuestos, y la documentación aportada, resulta procedente que ese Instituto revoque la resolución impugnada; al haberse presentado elementos suficientes que botan la “presunción” argüida por ese IAIP en relación a la generación de la información y los defectos en su búsqueda.

Finalmente, es importante subrayar la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo que acoge la idea del procedimiento contencioso subjetivo o de plena jurisdicción en donde los procesos que se ventilan ante esa Sala constituyen auténticos procesos de contención, en donde es posible alegar y controvertir plenamente los hechos acaecidos en sede administrativa y aquéllos exógenos cuya conexión al objeto del litigio proyectan sus efectos dentro del proceso de formación de las actuaciones de la Administración Pública. Así, (...) *la Jurisdicción Contencioso Administrativo no es únicamente un mero revisor de lo actuado en sede administrativo, sino que en ella se origina un verdadero proceso, instituido en los postulados del principio de economía procesal y tutela judicial efectiva; y superando las posturas del carácter revisor de esta Sala*"⁸.

Con base a todos los elementos antes argüidos, a ustedes PIDO:

- a) Se admita el presente escrito; junto con declaraciones juradas del Sargento Mayor de Brigada José Arístides Reinoza Quintanilla, señor Guadalupe Adalberto Cortez y señora Krissia Adlyd Tenorio Franco; actas del Oficial de Información del MDN, y del Jefe de Archivo General del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; así como las respectivas constancias de alta de los declarantes.
- b) Se tenga por interpuesto el recurso de revocatoria contra el acto administrativo impugnado en este acto.
- c) Se revoque en todas sus partes la resolución de las nueve horas y treinta minutos del día veinticinco de febrero de dos mil catorce; y en su lugar se dicte la que según derecho corresponda.

San Salvador, seis de marzo de dos mil catorce.





⁸ Sentencia definitiva de lo Contencioso Administrativo de las catorce horas y treinta y siete minutos del quince de diciembre de dos mil nueve, con número de referencia 228-2006.



Presentado por Silvia Carolina Guzmán Álvarez

Quién se identifica con DUI


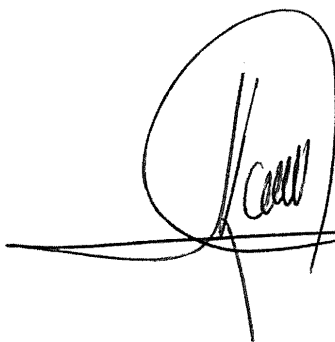
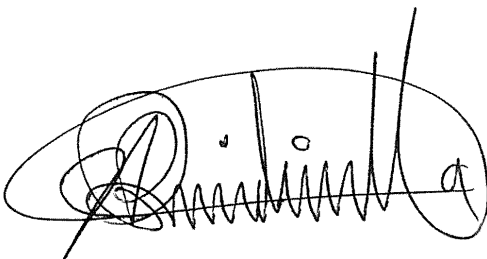
del 16 de Marzo de 20 14. Junto con ocho folios

a las 12:15 horas

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
RECEPCIÓN DE DATOS PERSONALES

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cinco de marzo de dos mil catorce. Ante mí, **JOAQUÍN ELIBERTO GARCÍA CUBÍAS**, notario de este domicilio, comparece el señor **JOSÉ ARÍSTIDES REINOZA QUINTANILLA**, de _____, estudiante, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien conozco, con Documento Único de Identidad número _____, quien en este acto bajo juramento ME DICE: I.- Que posee el rango militar de Sargento Mayor de Brigada, que causó alta en la Fuerza Armada de El Salvador, el día uno de enero de mil novecientos ochenta y tres, en el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA) lugar donde recibió instrucción básica militar, y comunicaciones para desempeñarse como radio operador, referida instrucción la finalizo en el mes de abril del mismo año, posteriormente en el mismo lugar recibió instrucción sobre táctica de patrullas la cual tuvo una duración de cuatro semanas, II.- Posteriormente fue seleccionado con un grupo de aproximadamente veinte elementos de tropa, entre los cuales se encontraba, para ser enviado a una unidad militar desconocida hasta ese momento por razones de seguridad, la cual apoyaría con las comunicaciones como radio operadores. Un día del mes de junio del mismo año fue llevado hacia la Fuerza Aérea, lugar de donde fue trasladado aproximadamente a las once horas vía aérea hacia un nuevo destino; que aproximadamente a las trece horas con treinta minutos aterrizó el avión en que se conducía en una pista en medio de una hacienda, hasta ese momento no sabía dónde se encontraba, ya que fue trasladado en un camión hacia la sede de la unidad militar que iba a apoyar con las comunicaciones; ya en el lugar pudo percatarse que estaba en el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atonal, ubicado en la ciudad de Usulután. III.- Que el apoyo que como radio operadores realizaba, era establecer los enlaces por radio, de los diversos sitios por donde pasaba el patrullaje, reportando cualquier incidente que sucediera, pero no se llevaba nada escrito, ya que cuando se le informaba al Comandante, el operador le acercaba el radio para que recibiera la comunicación y diera sus ordenes y recomendaciones por ese medio, y cuando se consideraba que las ordenes no debían ser dadas por radio se designaba un lugar en donde se reunirían para impartir instrucciones, para movimientos de tropa, traslados en el lugar, salidas con licencia, objetivos a ser patrullados, todo debido a que siempre se suponía que la subversión rastreaba las comunicaciones militares; Durante su estancia en el Batallón Atonal, puede asegurar que nunca se hizo llegar documento escrito alguno en el cual se encontrara información de operaciones a realizar o realizadas, ya que teníamos que transmitir las ordenes giradas, y en las reuniones tampoco se entregaban documentos, ya que las órdenes o instrucciones eran giradas verbalmente, porque como radio operador del Comandante del Batallón, presencio estas situaciones. Me continúa manifestando que su labor como radio-operador la realizo desde junio de mil novecientos ochenta y tres hasta mediados de diciembre del

mismo año, en que fue relevado por otros operadores, y ya en mil novecientos ochenta y cuatro fue enviado al curso de camilleros de combate, el cual se realizo en Artillería. IV.- que en el año de mil novecientos ochenta y cuatro fue ascendido al grado de Cabo, en mil novecientos ochenta y cinco a Subsargento; y en mil novecientos ochenta y seis a Sargento, el compareciente considera importante mencionar esos grados militares obtenidos por el debido a que se le otorgó mando efectivo sobre tropa y entre los hombres que tenía a su cargo, estaba asignado un radio operador, quien realizaba sus funciones tal como el compareciente lo ha narrado, por medio de las cuales reportaba sus actividades realizadas por coordenadas de cuadrícula las cuales indicaban los lugares por donde se había efectuado el patrullaje. Tal proceder, era el denominador común en cuanto a la forma de operar de las tropas en campo, pues no teníamos orden alguna de dejar por escrito constancia de lo que ocurría a diario por la naturaleza misma del conflicto y como medida de seguridad militar. Por otra parte la Doctrina Militar establece lineamientos para regular guerras regulares con otros Estados, los cuales delimitan algunas reglas mínimas a cumplir, siendo diferente el contexto del conflicto interno que vivió en nuestro país, dentro del cual, los grupos subversivos no encajaban dentro de dichos parámetros establecidos, ya que era un conflicto de constante movimiento, por lo tanto no era posible establecer operativos militares, planificaciones o ubicaciones geográficas exactas para llevarlos a cabo. Y finalmente me manifiesta que Dentro de su especialización militar posee el Curso de Jefe de Comunicaciones, Comando Oriental Monterrosa Numero Diez, Básico de paracaidismo y Contraterrorismo Numero Diez, del Comando de Fuerzas Especiales entre otros; que lo consignado en el presente instrumento constituye su declaración jurada,. Así se expreso el compareciente de la presente acta notarial que consta en esta única hoja y leída que le fue por mi en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firma conmigo. DOY FE.-

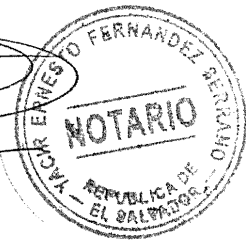


En la ciudad de San Salvador a las once horas con treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil catorce. Ante mí, **YACIR ERNESTO FERNANDEZ SERRANO**, notario del domicilio de San Salvador, comparece, **GUADALUPE ADALBERTO CORTEZ**, de años de edad, bachiller, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad , y ME DICE: I.

Que labora para el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con el cargo de Técnico en Archivo. II. Que los días uno y cuatro de noviembre de dos mil trece, por instrucciones del señor Mayor Kelvin Alfredo Vásquez Mejía, dentro de sus labores asignadas, realizó la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en mensaje Numero SG Cuatro ocho ocho siete, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, relativa al detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador, desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de mil novecientos ochenta y tres, y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y uno; incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nomina de las tropas ejecutoras, nomina de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares tanto del ejercito como insurgentes, y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese ministerio, que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese período. III. Para dicho procedimiento se consultó primeramente el Inventario General de la documentación existente, tomando en cuenta el asunto y las fechas proporcionadas, luego se verificó físicamente la documentación en los diferentes cuerpos de los estantes Dos, Ocho y Trece, donde se encuentra la información de dichos períodos, consultando los Libros de Novedades, Libros de Ordenes del Cuerpo y Libros de Enfermos y Rebajados, no encontrándose la información requerida, así mismo se realizó la búsqueda pertinente en los archivos magnéticos, obteniendo el mismo resultado, lo cual se informó en su debida oportunidad. Yo, el suscrito notario Doy Fe, que explique a la compareciente los efectos legales de la presente acta notarial, escrita en una hoja útil, y leída que le fue por mí, en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firma conmigo. DOY FE.-

En la ciudad de San Salvador a las once horas del día cinco de marzo de dos mil catorce. Ante mí, **YACIR ERNESTO FERNANDEZ SERRANO**, notario del domicilio de San Salvador, comparece, **KRISSIA ADLYD TENORIO FRANCO**, de treinta y ocho años de edad, empleada, del domicilio de departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad , y ME DICE: I. Que labora para el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con el cargo de Técnico en Archivo. II. Que los días uno y cuatro de noviembre de dos mil trece, por instrucciones del señor Mayor Kelvin Alfredo Vásquez Mejía, dentro de sus labores asignadas, realizó la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en mensaje Numero SG Cuatro ocho ocho siete, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, relativa al detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador, desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de mil novecientos ochenta y tres, y en cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y uno; incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nomina de las tropas ejecutoras, nomina de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares tanto del ejercito como insurgentes, y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese ministerio, que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese período. III. Para dicho procedimiento se consulto primeramente el Inventario General de la documentación existente, tomando en cuenta el asunto y las fechas proporcionadas, luego se verificó físicamente la documentación en los diferentes cuerpos de los estantes Dos, Ocho y Trece, donde se encuentra la información de dichos periodos, consultando los Libros de Novedades, Libros de Ordenes del Cuerpo y Libros de Enfermos y Rebajados, no encontrándose la información requerida, así mismo se realizó la búsqueda pertinente en los archivos magnéticos, obteniendo el mismo resultado, lo cual se informó en su debida oportunidad. Yo, el suscrito notario Doy Fe, que explique a la compareciente los efectos legales de la presente acta notarial, escrita en una hoja útil, y leída que le fue por mí, en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firma conmigo. DOY FE.-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ACTA OIR-MDN NÚMERO UNO

EN RELACIÓN A ACTA TRES, PROCEDENTE DE LA JEFATURA DE ARCHIVO GENERAL DEL EMCFA, SEGÚN ART. 73 DE LA LAIP QUE DICE: CUANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ÉSTA DEBERÁ RETORNAR AL OFICIAL DE INFORMACIÓN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CON OFICIO EN DONDE LO HAGA CONSTAR. EL OFICIAL DE INFORMACIÓN ANALIZARÁ EL CASO Y TOMARÁ LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LOCALIZAR EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y RESOLVERÁ EN CONSECUENCIA DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE NO ENCONTRARLA, EXPEDIRÁ UNA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

COMO OFICIAL DE INFORMACIÓN, HAGO CONSTAR FEHACIENTEMENTE QUE: LA INFORMACIÓN RELACIONADA A DETALLE OPERATIVOS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, DESARROLLADOS EN TENANGO Y GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, EN FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES; Y EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ANGULO, TECOLUCA, SAN VICENTE, EL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, LUGARES Y MAPAS DE LOS OPERATIVOS, PARTES E INFORMES MILITARES DE LAS OPERACIONES, NÓMINAS DE LAS TROPAS EJECUTORAS, NÓMINAS DE LOS OFICIALES Y JEFES DE LOS DESTACAMENTOS MILITARES INVOLUCRADOS, EL NÚMERO DE BAJAS MILITARES, TANTO DEL EJERCITO COMO DE LAS FUERZAS INSURGENTES Y CIVILES DE DICHO OPERATIVO, Y TODA INFORMACIÓN QUE ESTÉ EN PODER DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, QUE PERMITA CONOCER E INTERPRETAR EL ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS MILITARES QUE SE DESARROLLARON EN ESE PERÍODO, LA CUAL POR MEDIO DE OFICIO NUMERO 1434 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, FUE INFORMADA A LA OIR DEL MDN, QUE HABIENDO HECHO LA BÚSQUEDA PERTINENTE CON LA DILIGENCIA QUE EXIGE LA LAIP, SE CONSTATÓ QUE TAL INFORMACIÓN ES INEXISTENTE EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, LO CUAL PUDE CONSTATAR AL APERSONARME A DICHO ARCHIVO EL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y HACER LA VERIFICACION EN COMPAÑÍA DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DE ARCHIVO, SEÑORES GUADALUPE ADALBERTO CORTEZ Y KRISSIA ADLYD TENORIO FRANCO. DILIGENCIA EN LA CUAL PUDE CONSTATAR QUE EN LOS ESTANTES NUMEROS DOS, OCHO Y TRECE, DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE DICHS PERÍODOS, CONSULTANDO LOS LIBROS DE NOVEDADES, LIBROS DE ORDENES DEL CUERPO Y LIBROS DE ENFERMOS Y REBAJADOS, NO SE ENCUENTRÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA, ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA PERTINENTE EN LOS ARCHIVOS MAGNÉTICOS, OBTENIENDO EL MISMO RESULTADO. EN CONSECUENCIA, HABIENDO DADO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 73 LAIP, RATIFICO QUE LA DOCUMENTACION REQUERIDA ES INEXISTENTE EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA FUERZA ARMADA. S. DE EL SALVADOR. CINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.



JOEL ANTONIO RIVAS MORENO
CNEL. ART. DEM
SECRETARIO GENERAL Y
OFICIAL DE INFORMACION DEL MDN

ACTA No. TRES

EN RELACIÓN A MENSAJE NUMERO SG CUATRO OCHO OCHO SIETE DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y FIRMADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL GENERAL DE AVIACIÓN JAIME LEONARDO PARADA GONZÁLEZ, EN EL CUAL SOLICITAN SE REMITA A MÁS TARDAR A LAS CATORCE HORAS DEL DIA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, LA INFORMACIÓN QUE DETALLE OPERATIVOS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, DESARROLLADOS EN TENANGO Y GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, EN FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES; Y EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ANGULO, TECOLUCA, SAN VICENTE, EL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, LUGARES Y MAPAS DE LOS OPERATIVOS, PARTES E INFORMES, MILITARES DE LAS OPERACIONES, NÓMINAS DE LAS TROPAS EJECUTORAS, NÓMINAS DE LOS OFICIALES Y JEFES DE LOS DESTACAMENTOS MILITARES INVOLUCRADOS, EL NÚMERO DE BAJAS MILITARES, TANTO DEL EJERCITO COMO DE LAS FUERZAS INSURGENTES Y CIVILES DE DICHO OPERATIVO, Y TODA INFORMACIÓN QUE ESTÉ EN PODER DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, QUE PERMITA CONOCER E INTERPRETAR EL ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS MILITARES QUE SE DESARROLLARON EN ESE PERÍODO, ESTE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, REALIZÓ LAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA:

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EVACUAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, LA OIR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA LE DIO ENTRADA AL DOCUMENTO Y LO REMITIO AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA.

LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA MARGINÓ A LA SECCIÓN DE ARCHIVO PARA QUE DE FORMA INMEDIATA LOS ENCARGADOS DE LA SECCION DE ARCHIVO, SEÑOR GUADALUPE ADALBERTO CORTEZ Y LA SEÑORA KRISSIA ADLYD TENORIO FRANCO, REALIZARAN LA BUSQUEDA DENTRO DE LOS ARCHIVOS FISICOS Y DENTRO DE LOS ARCHIVOS DIGITALIZADOS, SI SE TIENE LA INFORMACION REQUERIDA.

EL MENSAJE SE RECIBIÓ EL DÍA VIERNES UNO DE NOVIEMBRE Y ESE MISMO DÍA Y EL DÍA LUNES CUATRO DEL MISMO MES, SE REALIZÓ UNA EXHAUSTIVA BÚSQUEDA EN LOS INVENTARIOS Y EN LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA RELACIONADA A LAS FECHAS SOLICITADAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE BAJO CUSTODIA, NO ENCONTRANDO NINGÚN ANTECEDENTE RELACIONADO A LA INFORMACION SOLICITADA. LOS SEÑORES ENCARGADOS DE ARCHIVO, REALIZARON DICHA BÚSQUEDA CONSULTANDO PRIMERAMENTE EL INVENTARIO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE, TOMANDO EN CUENTA EL ASUNTO Y LAS FECHAS PROPORCIONADAS, LUEGO SE VERIFICO FÍSICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES CUERPOS DE LOS ESTANTES DOS, OCHO Y TRECE, DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE DICHOS PERÍODOS, CONSULTANDO LOS LIBROS DE NOVEDADES, LIBROS DE ORDENES DEL CUERPO Y LIBROS DE ENFERMOS Y REBAJADOS, NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA PERTINENTE EN LOS ARCHIVOS MAGNÉTICOS, OBTENIENDO EL MISMO RESULTADO; LO CUAL SE INFORMÓ OPORTUNAMENTE. SIENDO EL ARCHIVO GENERAL DE LA FUERZA ARMADA EL ÚNICO EN EL CUAL SE RESGUARDAN DOCUMENTOS QUE DATAN DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

ESTADO MAYOR CONJUNTO

C-I "PERSONAL"

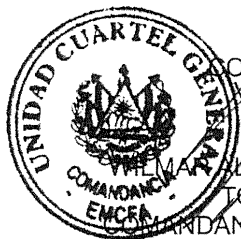
EL INFRASCRITO JEFE DEL CONJUNTO I "PERSONAL" DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA. HACE CONSTAR:

Que en los registros del Personal Administrativo, que se llevan en este Organismo, comprendido en los años del 2009 al 2014, se encuentra que el SEÑOR GUADALUPE ADALBERTO CORTEZ, causó alta el 01ENE2009, por medio del Acuerdo No. 0013 de fecha 05 de enero de 2009, como Administrativo Especialista de 1ª. Clase; actualmente desempeñando las funciones de Técnico en Archivo, en el Archivo General.

Y para ser presentada al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, se extiende la presente en San Salvador, a los cinco días del mes de marzo de dos mil catorce.



RAFAEL ERNESTO FLORES
CNEL. ART. DEM
JEFE DEL C-I "PERSONAL"



CONFRONTO:

GUADALUPE ADALBERTO GÓMEZ TORRES
TCNEL. INF.
COMANDANTE DE LA UCG/EMCFA

REF/WAGT/AL/López
C9C2 065



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

ESTADO MAYOR CONJUNTO

C-I "PERSONAL"

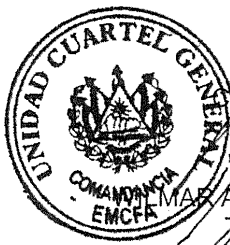
EL INFRASCRITO JEFE DEL CONJUNTO I "PERSONAL" DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA. HACE CONSTAR:

Que en los registros del Personal Administrativo, que se llevan en este Organismo, comprendido en los años del 2009 al 2014, se encuentra que la SEÑORA KRISSIA ADLYD TENORIO FRANCO, causó alta el 01ENE2009, por medio del Acuerdo No. 0013 de fecha 05 de enero de 2009, como Administrativo Especialista de 1ª. Clase; actualmente desempeñando las funciones de secretaria, en el Archivo General.

Y para ser presentada al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, se extiende la presente en San Salvador, a los cinco días del mes de marzo de dos mil catorce.



RAFAEL ERNESTO FLORES
CNEL. ART. DEM
JEFE DEL C-I "PERSONAL"



CONFRONTO:
MAR ALBERTO GÓMEZ TORRES
CNEL. INF.
COMANDANTE DE LA UCG/EMCFA

REF/WAGT/AL/López
C9C2 065



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, HACE CONSTAR:

Que el señor **Sargento Mayor de Brigada JOSÉ ARÍSTIDES REINOZA QUINTANILLA**, se encuentra de alta en esta Secretaría de Estado, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Departamento de Derechos Humanos, desempeñando las funciones de Colaborador, según Orden General para Suboficiales No. 06/013, de fecha 30JUN013, siendo su tiempo de servicio de laborar en la Institución Armada a la fecha, **31 años, 2 meses**.

Y para ser presentada en el **Instituto de Acceso a la Información Pública**, se le extiende la presente en San Salvador, a los cinco días del mes de marzo de dos mil catorce.



GUILLERMO ADOLFO HERRADOR PEÑA
CNEL. INF. DEM

SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, de generales conocidas en el referido expediente, a ustedes atentamente expongo lo siguiente:

Que a las doce horas y quince minutos de este día, mientras la Licenciada Silvia Carolina Guzmán Álvarez presentaba el recurso de revocatoria interpuesto por el suscrito ante este instituto, la persona que recibía el mismo efectuó un comentario que nos hace prever que se corre el riesgo de que el recurso interpuesto sea declarado inadmisile por extemporáneo, debido a una interpretación que hizo dicha persona, quien adujo que el plazo para la interposición del referido recurso vencía este día a las nueve horas quince minutos, ya que a esa hora hace tres días se me había notificado personalmente la resolución impugnada; debiendo aclarar el suscrito por este medio, que el recurso no me fue notificado personalmente.

Que estoy consciente que el recurso se ha interpuesto en legal forma y dentro del término legal, de conformidad a lo establecido en los Artículos 145 y 501 del Código Procesal Civil y Mercantil, y 95 de la Ley de Acceso a la Información Pública; en tal sentido, declarar inadmisile el recurso por extemporáneo, constituiría una vulneración del debido proceso legal, contenido en el Artículo 102 de la referida Ley, lo cual se advierte para que sea tomado en cuenta al momento de conocer el mencionado recurso.

Por lo antes expuesto les pido:

-Me admitan el presente escrito,

-Se tenga de mi parte por advertida la eventual vulneración del debido proceso legal contenido en el Artículo 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

San Salvador, seis de marzo de dos mil catorce.





NUE 67-A-2013 (JC)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas del diez de marzo de dos mil catorce.

Por recibido el escrito presentado en fecha seis de marzo del corriente año, suscrito por René Arnoldo Castellón Mejía, apoderado del Ministerio de la Defensa Nacional, representado por el General **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, titular de dicha institución; y por medio del cual pide la revocatoria de la resolución dictada por este Instituto emitida a las nueve horas y treinta minutos del veinticinco de febrero del presente año, siéndole notificada el tres de marzo del mismo año.

Analizado el recurso y constatando el cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad del mismo y atendiendo a los principios de contradicción y defensa a las partes, de conformidad con los Arts. 2 y 11 de la Constitución de la República, 95 y 102 de la LAIP; y Arts. 4, 19, 20 y 505 del CPCM, este Instituto **RESUELVE:**

a) *Admítase* el recurso de revocatoria interpuesto el Ministerio de la Defensa Nacional;

b) *Córrase* traslado a los ciudadanos CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARCOS DE JESÚS PORTILLO REGALO, BUENAVENTURA ALAS RIVERA, LEONOR VICTORIA PINEDA VIUDA DE MEJÍA y ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, expresen su posición frente al recurso presentado por el ente obligado.

Notifíquese.-

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are positioned above the printed text 'PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN'.

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

UM

NOTIFICACIÓN NUE 44-A-2014 Admisión de revocatoria

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

14 de marzo de 2014, 9:43

Para:

Señores (as):

Carolina Constanza Baires

Heli Jeremías Hernández Hernández

Marcos de Jesús Portillo Regalo

Buenaventura Alas Rivera

Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía

Presentes

A través de este medio, se les adjunta auto de admisión de recurso de revocatoria referente al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Milton Hernández

Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

 NUE 67-A-2013 Admisión recurso de revocatoria (Ciudadanos).pdf
575K

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

14 de marzo de 2014, 9:43

Para:

Licda. Claudia Lizbeth Interiano Quijada

Presente.

A través de este medio, se le adjunta auto de admisión de recurso de revocatoria referente al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Milton Hernández


Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad. San Salvador.

Teléfono: 2517-2090

 **NUE 67-A-2013 Admisión recurso de revocatoria (Ciudadano).pdf**
582K

Claudia Interiano

17 de marzo de 2014, 9:14

Responder a: Claudia Interiano <Para: NOTIFICACIONES IAIP
<notificaciones.iaip@gmail.com>

Buen día, por recibido el escrito.
Saludos cordiales,


Claudia Interiano

Enviado: viernes 14 de marzo de 2014 9:43

Asunto: NOTIFICACIÓN NUE 44-A-2014 Admisión de revocatoria

[El texto citado está oculto]

17 de marzo de 2014, 11:19

Muy buenos días profesionales del IAIP

Por este medio solicitamos atentamente: Copia digital de escrito de solicitud de revocatoria presentado por el representante legal del Ministerio de la Defensa Nacional el día 6 de marzo de 2014. Por su atención, gracias.

El 14 de marzo de 2014, 9:43, NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com> escribió:

[El texto citado está oculto]

Área Jurídica

Centro Para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine
Lagadec"

"El derecho a la verdad es el derecho que asiste a las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también de la sociedad en su conjunto..."

Sentencia Amparo 665-2010. 5 de febrero de 2014.-

Sala de lo Constitucional,

Corte Suprema de Justicia.

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

17 de marzo de 2014, 12:23

Para: Madeleine Lagadec

Buenas tardes,


En adición a la notificación del día catorce del presente mes y año, atentamente remito escrito de recurso de revocatoria con sus respectivos anexos. Las disculpas del caso, por un error involuntario omiti adjuntar la documentación ya referida.

Atentos saludos.

Milton Hernández

El 17 de marzo de 2014, 11:19, Madeleine Lagadec <[El texto citado está oculto]> escribió: [El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos

 NUE 67-A-2013 Recurso de revocatoria.pdf
5801K

 NUE 67-A-2013 Anexos - Recurso de revocatoria.pdf
1392K

17 de marzo de 2014, 13:52

Buenas tardes

Por recibido los escritos adjuntados este día, analizaremos los escritos.
Con nuestro saludo.

Heli Hernández-

El 17 de marzo de 2014, 12:23, NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com> escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 14 horas con 46 minutos del día
14 del mes de marzo del año dos mil catorce, se procedió a
notificar en legal forma a René Arnaldo Castellón Mejía
en su calidad de Apoderado Especial del Min. de la Dgenra
la resolución de referencia 67-A-2013 de las 08 horas
con — minutos del día 10 del mes de
marzo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en
Ministerio de la Dgenra Nacional, Km 5½ Carretera
a Santa Tecla, San Salvador
la cual fue recibida por Carolina Abrego
quien se identifica con su

Documento Único de Identidad número — cuyo
cargo es Secretaría OIR - MDN.


Firma de quien la recibe


Firma del Notificador



Ref. NUE 67-A-2013

**HONORABLES SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

Carolina Constanza Baires, Helí Jeremías Hernández Hernández, Marcos de Jesús Portillo Regalo, Buenaventura Alas Rivera, Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía, Andrés Antonio Romero Santamaría, y Claudia Lizbeth Interiano Quijada, de generales conocidas en el presente procedimiento, y en la calidad que comparecemos respectivamente, a ustedes, atentamente, exponemos:

Que se ha corrido traslado y notificado por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (en adelante IAIP), de la admisión del recurso de revocatoria en fecha del dieciséis de marzo de dos mil catorce, recurso presentado por el licenciado René Arnoldo Castellón Mejía, como apoderado del Ministerio de la Defensa Nacional (en adelante MDN), representado por el General David Victoriano Munguía Payés, y es en ese sentido que *manifestamos nuestra inconformidad ante dicho escrito, no estando de acuerdo con los supuestos fundamentos de tal recurso*, ello debido a lo siguiente:

1) *Información Solicitada y el incumplimiento del ente obligado.*

Como peticionarios, peticionarias, titulares del derecho a la información pública, hemos solicitado información básica en lo referente a *"detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, febrero de 1983 y en Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluir los documentos de planificación, lugares, y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de militares de las tropas ejecutoras, nómina de los oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar que se desarrollaron en esos períodos"*.

Sin embargo, el Ministerio de la Defensa Nacional (en adelante MDN), a la fecha no ha demostrado cumplimiento a su deber como ente obligado dentro lo determinado por la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), al no realizar de manera exhaustiva dicha búsqueda de información básica solicitada. Ello deviene desde el momento en el que en fecha de 23 de enero de 2014, se nos denegó el acceso a las diligencias que se realizaban junto al Comisionado designado del IAIP, a quién también se le denegó la realización de la diligencia de verificación, atendiendo orden del titular del ente obligado, General de División David Victoriano Munguía Payés.

En éste sentido, nos parece preocupante que no se dé mayor detalle de qué tipo de diligencias se han realizado a más de cumplir con el trámite mínimo según se infiere por la declaración jurada presentada por el ente obligado en su escrito de solicitud de

revocatoria. A nuestro entender, al realizarse con exhaustividad las diligencias de búsqueda de información, éstas deberían ir encaminadas a utilizar el poder que tiene el MDN justamente para recabar información, como por ejemplo: nombramientos de jefaturas militares en esa época – como Diarios Oficiales de la época por ejemplo- en donde consten nombramientos de jefaturas militares, entrevistas a dichas jefaturas militares sobre los datos que solicitamos, sobre la forma de llevar registros de actividades militares, de cómo se proporcionaban informes de lo realizado a sus máximas autoridades, teniendo en cuenta que la institución armada, ha sido protagónica en el desarrollo de hechos históricos en el país, por lo que creemos que los movimientos de dicha institución, debieron ser registrados.

Para nosotros/as como peticionarios/as titulares del derecho a la información pública, pareciera evidente, que no existe ningún interés de cumplimiento del deber como ente obligado, por parte del MDN, al no permitirnos participar en las diligencias que se dice han realizado hasta el momento de éste escrito, aún siendo portadores/portadoras del derecho de participar en dichas diligencias en razón de la transparencia y el acceso a la información pública como condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana en el ejercicio de la función pública; además que se han proporcionado escasísimos elementos por parte del oficial de información del MDN al IAIP, sobre las diligencias en cuestión que determinen que la información es “inexistente”.

En efecto, y retomando las palabras escritas en el escrito de revocatoria, respecto a que “...el MDN no está obligado a lo imposible”, pero si está obligado a lo posible, en el sentido de realizar todas las diligencias necesarias y bajo el criterio de exhaustividad, para proporcionar la información en comento, lo que se encuentra pues aunado a la real voluntad respecto a su rol como ente obligado dentro de la Ley de Acceso a la Información, teniendo en cuenta que dicha Ley se encuentra protegiendo un derecho humano fundamental¹.

¹ La Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció en *Claude Reyes v. Chile*, que el acceso a la información es un derecho universal y expresamente estableció el derecho de “buscar y recibir información” del gobierno. El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. El Artículo IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

El Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos también protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole. Finalmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos hace eco de este derecho de acceder a información pública y una vez más resalta que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todo individuo.

2) *Derecho de Acceso a la Información y el Derecho a la Verdad.*

Es claro para nosotros como peticionarios y peticionarias titulares del derecho a la información pública, que la solicitud que llevamos al IAIP, tiene como objetivo, el conocimiento de hechos, para el esclarecimiento de la verdad de los mismos, que han sido relatados por numerosas víctimas sobrevivientes de operativos militares realizados en Tenango y Guadalupe, y San Francisco Angulo durante la época del conflicto armado. Basta con revisar el expediente de amparo constitucional con Referencia 665-2010 en el cual constan declaraciones de víctimas en las cuales se relatan hechos que constituyen violaciones a derechos humanos, debido a que se relatan crímenes contra la población civil que se describe fueron cometidos por sujetos vestidos con indumentaria militar, y además de otros indicios que se especifican dentro de dicho expediente, en periódicos de mayor circulación de la época.

Entre los y las peticionarias/os de la solicitud de información sobre estos operativos, se encuentran personas sobrevivientes, así como víctimas de una masacre perpetrada en los años 1981 y 1983, y sus testimonios son prueba en sí misma, que recoge elementos que hacen constar que dichas masacres fueron ejecutadas por elementos militares, lo que supondría que nos encontramos entonces ante la presencia de un grave violación a derechos humanos, por constituirse un asesinato masivo cometido como parte de un ataque generalizado contra población civil, en tiempos de guerra, por lo que comparte por sus características de un crimen de guerra², que constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Es por lo enunciado, que nos parece pertinente que el IAIP retome lo determinado ya por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en resolución del amparo con Referencia 665-2010, ya que busca a nuestro ver, el agotamiento de la búsqueda de la información con el objetivo de encontrar justicia, pareciéndonos además pertinente y oportuno que retome el IAIP también lo determinado por Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos, sin considerarse esto una *"superabundancia normativa que pueda contrarrestar y a apartar la verdadera finalidad y eficacia del derecho a la información pública"*³, sino que al contrario, al analizarse estos, *facilitan el escenario para la búsqueda de la información* basados en la legalidad, desde la base que el artículo 144 de la Constitución establece que los

² Ya la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos en su informe sobre el caso Jesuitas, *"los crímenes de guerra son graves infracciones de leyes y a las costumbres de guerra que incluyen el asesinato de civiles y de personas especialmente protegidas por el derecho internacional humanitario. Los crímenes de lesa humanidad son "actos graves de violencia que perjudican al ser humano, atacando lo que le es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud o su dignidad(...)"*.

³ Texto del Recurso de Revocatoria presentado el 6 de marzo de 2014, ante el IAIP, firmado por el abogado y notario, licenciado René Arnoldo Castellón Mejía.

Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia.

En ese sentido, cabe destacar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha establecido ya que las masacres ocurridas en el país, durante el conflicto armado, fueron ejecutadas en el marco de operativos militares que tuvieron como uno de sus objetivos el exterminio masivo de personas civiles, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores, como parte de una aberrante estrategia militar conocida como "tierra arrasada", ejecutada por el Estado de El Salvador durante el período que incluye principalmente los años 1980, 1981 y 1982, la cual pretendió destruir la presunta "base social" de las guerrillas en desarrollo y fue dirigida hacia la población rural de las "zonas - objetivo".⁴

Asimismo, el Informe de la Comisión de la Verdad determinó que en los primeros años del conflicto armado, la instauración de la violencia en el país, tuvo un carácter sistemático, evidenciado, por una parte, en el aumento de las ejecuciones extrajudiciales de carácter masivo, principalmente en las zonas rurales.⁵

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el derecho a la verdad, trata del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al Artículo 25.⁶ La interpretación de este derecho

⁴ PDDH. "Informe Especial de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sobre masacres de población civil ejecutadas por agentes del Estado en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en El Salvador entre 1980 y 1992. Emitido el 7 de marzo de 2005

⁵ ONU. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. "De la Locura a la Esperanza" 1993

⁶ Véase Caso 10.580, Informe Nº 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995. La Comisión abordó el tema del derecho a la verdad por primera vez en 1995, con motivo del caso de la desaparición de Manuel Bolaños, en Ecuador. Se denunció que miembros del Cuerpo de Infantería de Marina del Ecuador habían puesto bajo custodia al señor Bolaños para examinar sus documentos de identificación y que nunca volvió a saberse de él. Tras la desaparición del señor Bolaños, su familia interpuso recursos de *habeas corpus* ante los tribunales competentes. Este recurso fue rechazado. Casi dos años después de la desaparición del señor Bolaños, sus familiares recibieron información de que había fallecido mientras se encontraba bajo custodia de la Infantería de Marina y que se había iniciado una investigación en torno a su muerte. Sin embargo, el gobierno nunca determinó la responsabilidad de quienes, según las denuncias, torturaron y ultimaron al señor Bolaños. La Comisión constató numerosas infracciones en el caso, entre ellas la violación del derecho de los familiares a conocer la verdad acerca de lo ocurrido al señor Bolaños, de las circunstancias de su detención y fallecimiento y de la ubicación de sus restos. La Comisión señaló que este derecho surge de la obligación que tiene el estado de usar todos los medios a su alcance para investigar seriamente las violaciones cometidas en su jurisdicción a fin de identificar a los responsables. (Id. en "Análisis", Sección II, párrafo 45, citando la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, del 29 de Julio de

ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la Comisión, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no sólo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.⁷

Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el derecho a la verdad es "un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y, un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a obtener y a recibir información, especialmente en los casos de desaparecidos, con relación a los cuales la Corte y la Comisión han establecido que el Estado está obligado a determinar su paradero".⁸

Señores comisionados, en cualquier circunstancia, pero especialmente en procesos de transición a la democracia, las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer la información sobre graves violaciones de derechos humanos que repose en los archivos del Estado, incluso, si tales archivos se encuentran en las agencias de seguridad o en dependencias militares o de policía. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la obligación de acceso a la

1988, párrafo 166). La Comisión señaló que, en virtud de que los tribunales se abstuvieron inicialmente de investigar la desaparición del señor Bolaños, el estado no informó a los familiares acerca de la muerte del señor Bolaños o de la ubicación de sus restos y de la demora en dar comienzo a la investigación que finalmente se llevó a cabo, el estado había violado el derecho de la familia a la justicia y al conocimiento de la verdad.

⁷ En algunos casos, la Comisión no ha invocado el Artículo 13 dentro del marco de casos sobre el derecho a la verdad. Véase, por ejemplo Caso 10.258, Informe Nº 1/97, Ecuador, Manuel García Franco, 12 de marzo de 1997; Caso 10.606, Informe Nº 11/98, Samuel de la Cruz Gómez, Guatemala, 7 de abril de 1998; Caso 11.275, Informe Nº 140/99, Guatemala, Francisco Guarcas Cipriano, 21 de diciembre de 1999; Casos 10.588 (Isabela Velásquez y Francisco Velásquez), 10.608 (Ronald Homero Nota y otros), 10.796 (Eleodoro Polanco Arévalo), 10.856 (Adolfo René y Luis Pacheco del Cid) y 10.921 (Nicolás Matoj y otros), Informe Nº 40/00, Guatemala, 13 de abril de 2000. Un examen de los hechos de varios casos tocantes al derecho a la verdad pareciera indicar que para la Comisión el Artículo 13 reviste suma importancia en los casos relacionados con leyes de amnistía. Esto obedece al hecho de que cuando se promulga una ley de amnistía, no queda oportunidad para la acción judicial contra los responsables de los delitos y la información es el único medio por el cual los familiares de las víctimas pueden obtener alguna forma de reparación. Además, en esos casos la información es esencial porque los miembros de la sociedad deben tener noción de los abusos que se haya cometido para vigilar y evitar su repetición en el futuro.

⁸ Caso 10.480, Informe Nº 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999. Párrafo 150.

información en este tipo de casos, contempla a su turno un conjunto de obligaciones positivas o de hacer, por lo que definir que la información es “inexistente” nos parece escasa y sin definir mediante diligencias diversas y concretas, en la actuación del ente obligado.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. La Corte Interamericana ha establecido que dicho artículo, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la información ~~bajo el control del Estado~~, con las salvedades permitidas bajo el estricto régimen de restricciones establecido en dicho instrumento. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención, tanto por los Estados miembros de la OEA⁹ como por la doctrina y la jurisprudencia internacional.

El derecho de acceso está regido por los principios de buena fe y máxima transparencia, por lo cual, en principio, la información en poder del Estado debe ser pública salvo las excepciones limitadas establecidas por la ley, el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas internacionales, constitucionales o legales. En este sentido, por ejemplo, si una información que debía custodiar fue destruida o ilegalmente sustraída, y la misma era necesaria para esclarecer violaciones de derechos humanos, el Estado debe adelantar, de buena fe, todos los esfuerzos ~~a su alcance~~ para recuperar o reconstruir dicha información (...)¹⁰

Es pues, para nosotros evidente, que nos encontramos ante información que podría proporcionar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tenango y Guadalupe, así como San Francisco Angulo, mencionando que puede abrir las puertas al esclarecimiento de hechos específicos de graves violaciones a derechos humanos, calificación que para nosotros como víctimas es pertinente, a partir de nuestras vivencias al sobrevivir aberrantes hechos, y a las vivencias de aquellos y aquellas que han testimoniado en diferentes procedimientos y procesos, que son hechos acaecidos con la participación de elementos militares en diversas zonas, hechos que son mejor conocidos en nuestra población salvadoreña como “masacres contra la población civil” u “operaciones de tierra arrasada” por lo que son diligencias

⁹ Corte I.D.H., *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C.No. 101, párrs. 180 a.182.

¹⁰ CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 51, 30 de diciembre de 2009, cap. IV, párr. 83.

que deben realizarse de manera integral y exhaustiva, en ese sentido es que solicitamos la búsqueda de la verdad, por medio del acceso a la información.

3. *Sobre la supuesta transgresión al principio de legalidad por vulneración del elemento volitivo formal del acto administrativo.*

En esencia el recurrente ha alegado por un lado la violación del principio de legalidad de la administración pública, regulado en el Art. 86, inc 3° de la Constitución, por la supuesta transgresión al Art. 52 y 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP y 60 de su Reglamento, al alegar concretamente el recurrente, después de hacer una amalgama de sofismas jurídicos, que el acto administrativo emanado del IAIP "carece de legitimación volitiva" por no encontrarse firmado por todos los integrantes del ente colegiado.

Al respecto, es necesario aclarar que por un lado el Reglamento LAIP en su Art. 60 hace referencia a la validez de un procedimiento administrativo como son las sesiones del ente colegiado, las cuales son validar con la comparecencia de los cinco magistrados propietarios o de los que hagan sus veces y no hace referencia al acto administrativo emanado de la deliberación colegiada como lo es la resolución en concreto.

La validez de la resolución del instituto está condicionada a la existencia de tres votos a favor para que pueda surgir a la vida jurídica dicha resolución, así lo expone el Art. 52 Inc. 3°.

En consecuencia no se debe confundir la validez de las sesiones del Instituto con la validez de sus resoluciones, ya dicho procedimiento y acto administrativo tienen requisitos diferentes.

Por otro lado, el **pluralismo jurídico** en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho debe de fomentarse en todos los entes colegiados. Éste supone la existencia de las minorías y al respeto de las mismas; A pesar de ello, no se puede obligar a las minorías a motivar su decisión teniendo estas el derecho de abstenerse de hacerlo y con ello no se les está visibilizando, ocultando o silenciar sus opiniones.

Al respecto, destacamos el artículo 52 de la LAIP que establece la adopción de decisiones por mayoría simple. No existiendo regulación específica que determine la obligación de emitir votos particulares (disidentes o concurrentes), siendo además estos una manifestación de la voluntad de quienes los emiten y de cualquier manera no afectan ni validan las decisiones tomadas por los organismos administrativos o judiciales.

A partir de que las minorías no quieran, en un órgano colegiado, razonar su forma de votación, no evita que un acto administrativo surja a la vida jurídica y sea válido.

Enunciados estos puntos, a ustedes SOLICITAMOS:

- a) Se nos admita el presente escrito.
- b) Se desestime los argumentos planteados en Recurso de Revocatoria por el Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de su apoderado.
- c) Se confirme en todas sus partes y se considere si es oportuno y correspondiente, el ampliar la resolución de las nueve horas y treinta minutos ~~del día veinticinco~~ de febrero de dos mil catorce.

Anexamos al presente escrito como respaldo a lo planteado, un ejemplar del Libro "Masacres, trazos de la historia" recopilación de testimonios donde se hace referencia a los casos de ejecuciones múltiples ocurridas en los Cantones Tenango y Guadalupe, de Suchitoto en 1983, y en el Cantón San Francisco Angulo en Tecoluca, en 1981. Así también adjuntamos copia certificada de sentencia con referencia 665-2010 acerca de Amparo constitucional.

Señalamos para oír y recibir notificaciones y citaciones, a las oficinas del Centro Para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", situadas en Colonia y para confirmar de recibido con persona que se identifique con su nombre completo, al teléfono y al correo electrónico confirmando correo mediante correo e de persona que conteste de recibido el mismo.

San Salvador, miércoles 19 de marzo de 2014.-



Licda. Claudia Lizbeth Interiano Quijada



Heli Jeremías Hernández Hernández





Presentado por Heli Jeremías Hernández Hernández

Quién se identifica con DUIs a las 11:40 horas

del 19 de 3 de 20 14. Junto con 17 folios y un

ejemplar del libro Masacres, trazos de la historia

Salvadorenas contados por las víctimas.



VERSION PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES



NOTIFICACIONES SALA DE LO CONSTITUCIONAL



109

A LA ABOGADA CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA, APODERADA DE MEDARDO MIJANGO GONZÁLEZ Y OTROS QUE CONSTAN EN EL PROCESO.

HAGO SABER: que en el proceso de Amparo número 665-2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 5 de febrero de 2014, ha pronunciado la resolución que literalmente DICE:

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con cuarenta y un minutos del día cinco de febrero de dos mil catorce.

El presente proceso ha sido promovido los señores Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María Elvira Rodríguez Martínez, Ignacia Geovanny Ábrego Moreno, Eusebia Mirna Martínez Turcios, Ana Miriam Ábrego Moreno, Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado, por medio de su apoderada, la abogada Claudia Lizbeth Interiano Quijada, contra actuaciones del Fiscal General de la República que consideran lesivas de sus derechos a la protección jurisdiccional (en sus manifestaciones de los derechos de acceso a la jurisdicción, a conocer la verdad y a la prohibición de dilaciones indebidas *—rectius: pronta y cumplida justicia en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal—*), de petición y a la seguridad jurídica *—por la presunta inobservancia del principio de legalidad—*.

Han intervenido en el proceso la parte actora y la autoridad demandada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La apoderada de los actores manifestó en su demanda y escrito de cumplimiento de prevenciones que algunos sobrevivientes del homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo, del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, se presentaron el 14-VII-2005 a la Subregional de la Fiscalía General de la República de San Vicente a solicitar la exhumación de los restos de las víctimas.

En virtud de lo anterior, un agente auxiliar de la referida oficina fiscal requirió la exhumación de los restos óseos ante el Juez Primero de Paz de Tecoluca, quien, previo a la autorización de la diligencia, recibió declaraciones de testigos de tal homicidio colectivo. Como resultado de las exhumaciones, se recuperaron 30 esqueletos humanos, pero, en febrero de 2006, se suspendieron tales diligencias de forma definitiva, por parte del Juez Primero de Paz de Tecoluca, al considerar que se habían recuperado todos los restos óseos del lugar.

De esta manera, aseguró que ni el citado funcionario judicial ni la Fiscalía General de la República realizaron más diligencias de investigación de los hechos, no obstante que *—a su criterio—* en el expediente judicial existían los indicios suficientes para continuar con las investigaciones y localizar los demás restos óseos de las víctimas de tal homicidio colectivo.

Finalmente, expresó que el 23-XI-2009 el apoderado de los demandantes interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República con la finalidad de que su titular ordenara la investigación de los hechos antes mencionados. Sin embargo, indica que tales ofendidos no han obtenido respuesta alguna de dicho funcionario ni de sus agentes auxiliares, no obstante que los

días 17-VI-2010 y 15-VII-2010 solicitaron al Fiscal General de la República y al delegado de la oficina fiscal de San Vicente, respectivamente, que informaran sobre las diligencias que se habían realizado en torno a la denuncia interpuesta.

En virtud de lo expuesto, reclamó contra la omisión del Fiscal General de la República de ordenar que se continúe con la investigación del supuesto homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo, del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, con la cual se vulneraron los derechos de protección y acceso a la justicia, petición, a la vida digna y a la integridad personal –respecto de la salud física, mental y moral–, estos dos últimos por la supuesta inobservancia del “derecho a conocer la verdad” de sus poderdantes.

De igual modo, señaló que se ha conculcado el derecho a la seguridad jurídica de sus poderdantes, ya que, al no realizarse la investigación y no existir ninguna comunicación al respecto por parte del Fiscal General de la República, este no ha ajustado su proceder a lo prescrito en la Constitución y las leyes sobre sus funciones y responsabilidades.

2. A. Mediante auto pronunciado el 19-X-2011, se declaró inadmisibile la demanda interpuesta por la abogada Interiano Quijada en contra del Fiscal General de la República, en virtud de no haberse aclarado los motivos concretos de trascendencia constitucional por los cuales consideraba que a sus poderdantes les habían sido vulnerados los derechos a la vida digna e integridad personal –respecto de la salud física, mental y moral–.

B. Por otro lado, se suplió la deficiencia de la queja planteada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales –en adelante, “L.Pr.Cn.”–, en el sentido de que, si bien aquella alegó que la omisión del Fiscal General de la República vulneró su “derecho de protección y acceso a la justicia”, de las argumentaciones expuestas se concluyó que pretendió invocar la posible infracción del derecho a la protección jurisdiccional (en sus manifestaciones de los derechos de acceso a la jurisdicción, a conocer la verdad y a la prohibición de dilaciones indebidas –*rectius*: pronta y cumplida justicia en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal–).

Luego de efectuada la referida suplencia, se admitió la demanda, circunscribiéndose al control de constitucionalidad de la omisión del Fiscal General de la República de ordenar que se continúe con la investigación del supuesto homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; hecho que fue denunciado ante dicho funcionario el día 23-XI-2009, sin que hasta la fecha se hayan realizado diligencia alguna o promovido las acciones penales correspondientes. Tal omisión podría constituir una vulneración de los derechos mencionados en el párrafo anterior, así como de los derechos de petición y a la seguridad jurídica –por la presunta inobservancia del principio de legalidad– del señor Medardo Mijango González y otros.



C. De igual forma, en la misma interlocutoria, por un lado, se declaró sin lugar la adopción de una medida cautelar; y, por otro lado, se consideró que la intervención del Fiscal de la Corte devendría incompatible con la función de *amicus curiae* que desempeña con fundamento en los arts. 17, 23, 27 y 30 de la L.Pr.Cn., por lo que se decidió omitir, en los momentos procesales oportunos, concederle la audiencia y los traslados que prevén los arts. 23, 27 y 30 de la L.Pr.Cn.

D. Finalmente, se pidió al Fiscal General de la República que rindiera el informe que establece el art. 21 de la L.Pr.Cn., quien expresó que los hechos que se le atribuían no eran ciertos.

3. Seguidamente, por medio de la resolución pronunciada el 25-XI-2011, por una parte, se confirmó la denegatoria de la adopción de una medida cautelar; y, por otra, se requirió a la autoridad demandada que rindiera el informe justificativo que regula el art. 26 de la L.Pr.Cn.

Al respecto, el Fiscal General de la República alegó que de 1981 –año en el que ocurrió el mencionado homicidio colectivo– a 2005 –año en que se solicitó la exhumación–, la Fiscalía no era el único ente encargado de dirigir la investigación y, según el Código Procesal Penal de 1974, los jueces de primera instancia de lo penal, luego de tener noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, eran quienes debían instruir diligencias de averiguación de los hechos. Por otro lado, desde 1998, fecha en que entró en vigencia el Código Procesal Penal de 1996, hasta 2005, la Fiscalía no recibió ninguna noticia que le indicara la muerte de personas del referido cantón. Fue a partir de la solicitud de exhumación presentada por los familiares de las víctimas en el 2005 que la Fiscalía conoció los hechos, pero tal conocimiento no se dio en el marco de una investigación penal, sino de una solicitud de colaboración en la exhumación de los restos de personas fallecidas en 1981, la cual fue atendida. Materialmente, tales diligencias se realizaron del 26-IX-2005 al 28-I-2006 y concluyeron formalmente mediante resolución emitida por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca el 24-I-2010. Antes de tal resolución, la Fiscalía no podía realizar diligencias de investigación, incluso habiéndose interpuesto denuncia el 23-XI-2009, pues no se había concluido que efectivamente se estaba ante un hecho criminal. Así, una vez finalizadas legalmente las exhumaciones, se procedió a analizarlas y se concluyó que las diligencias debían ser tramitadas por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, el cual era el competente al momento en que sucedieron los hechos, y se le requirieron una serie de actuaciones. Sin embargo, el juez rechazó la petición y resolvió que la Fiscalía era la encargada de investigar los hechos, por lo que, a partir de este momento, el fiscal asignado al caso comenzó a realizar las diligencias iniciales investigativas. En ese sentido, explicó que el hecho de que las diligencias de investigación hayan sido iniciadas hasta el año 2011 se debió a la controversia que se suscitó en el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca en cuanto a la autoridad a la que le correspondía realizar la investigación del caso.



4. Por auto de fecha 18-I-2012, se confirió el traslado que ordena el art. 27 de la L.Pr.Cn. a la parte actora, la cual, en lo esencial, ratificó los alegatos expuestos en sus anteriores intervenciones.

5. Mediante la resolución pronunciada con fecha 10-II-2012, se habilitó la fase probatoria de este amparo por un plazo de 8 días. Durante este período, la parte actora y la autoridad demandada aportaron la prueba documental y testimonial que consideraron pertinente.

6. Por medio del auto de fecha 8-VII-2013, se tuvo también a los señores Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado como parte demandante en este proceso constitucional, por medio de su apoderada, la abogada Claudia Lizbeth Interiano Quijada. Asimismo, se señaló fecha para la realización de los interrogatorios de los testigos y las declaraciones de parte propuestos por la apoderada de la parte actora; diligencia que se llevó a cabo el 22-VII-2013.

7. Por auto de fecha 23-VII-2013, se otorgaron los traslados que ordena el art. 30 de la L.Pr.Cn. a la parte actora y a la autoridad, quienes, en lo esencial, ratificaron lo expresado en sus anteriores intervenciones.

8. Con estas últimas actuaciones, el presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

II. El orden lógico con el que se estructurará esta resolución es el siguiente: en primer lugar, se depurará y determinará el objeto de la presente controversia (III); en segundo lugar, se expondrán ciertas consideraciones acerca del contenido de los derechos alegados (IV); en tercer lugar, se analizará el caso sometido a conocimiento de este Tribunal (V), y, finalmente, de ser procedente, se desarrollará lo referente al efecto de la decisión (VI).

III. 1. Se advierte que, en la Resolución del 19-X-2011 de este proceso, se admitió la demanda en contra de la omisión del Fiscal General de la República de ordenar que se continúe con la investigación del supuesto homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente: hecho que fue denunciado ante dicho funcionario el día 23-XI-2009, sin que hasta la fecha se hayan realizado diligencia alguna o promovido las acciones penales correspondientes. Tal omisión podría constituir una vulneración de los derechos a la protección jurisdiccional –en sus manifestaciones de los derechos de acceso a la jurisdicción, a conocer la verdad y a la prohibición de dilaciones indebidas –*rectius*: pronta y cumplida justicia en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal–), de petición y a la seguridad jurídica –por la presunta inobservancia del principio de legalidad– del señor Medardo Mijango González y otros.

A. Como se mencionó, se admitió la demanda por la supuesta infracción a la prohibición de dilaciones indebidas –*rectius*: pronta y cumplida justicia– en la investigación del delito y



el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, de los alegatos expuestos por la parte actora, se advierte que la supuesta dilación indebida constituye el concepto de vulneración de otros derechos ya alegados en este proceso, pues la omisión de la autoridad demandada de investigar y ejercer la acción correspondiente implicaría la vulneración de los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad.

Consecuentemente, *deberá sobreseerse* el extremo de la pretensión relativo a la vulneración del derecho a la protección jurisdiccional, en su manifestación de prohibición de dilaciones indebidas –*rectius*: pronta y cumplida justicia– en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal.

B. Respecto a la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica, conviene aclarar que en la jurisprudencia de esta Sala –v.gr., Sentencias de 31-VIII-2011 y 26-VIII-2011, Amps. 493-2009 y 548-2009, respectivamente– se ha establecido que, si bien el contenido de tal derecho alude a la certeza derivada de que los órganos estatales y entes públicos realicen sus atribuciones con observancia de los principios constitucionales, el requerimiento de tutela de aquel es procedente *cuando la transgresión alegada no tenga asidero en la afectación al contenido de un derecho fundamental más específico*.

Señalado lo anterior, se advierte que la parte actora sustenta la probable vulneración del derecho a la seguridad jurídica en la transgresión al principio de legalidad. Sin embargo, de las argumentaciones expuestas, se advierte que pretendió invocar la posible infracción al derecho a la protección jurisdiccional, en su manifestación del derecho de acceso a la jurisdicción –el cual también ha sido alegado como vulnerado en el presente proceso–, pues alega básicamente que la autoridad demandada, al no realizar la investigación y no existir ninguna comunicación al respecto, no ajustó su proceder a lo prescrito en la Constitución y las leyes sobre sus funciones y responsabilidades. Consecuentemente, y en virtud de que se ha aducido la vulneración de un derecho más específico, *deberá sobreseerse este extremo de la pretensión incoada*.

2. En el caso que nos ocupa, el objeto de la controversia consiste en determinar: (i) si el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad del señor Medardo Mijango González y otros, al omitir ordenar que se continúe con la investigación del supuesto homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; hecho que fue denunciado ante dicho funcionario el día 23-XI-2009, sin que hasta la fecha se hayan realizado diligencia alguna o promovido las acciones penales correspondientes; y (ii) si el mencionado funcionario público vulneró el derecho de petición de la parte actora, al omitir dar respuesta a diversos escritos presentados.

IV. En este apartado, se hará una breve exposición sobre los derechos considerados vulnerados con las omisiones reclamadas.



1. A. En cuanto al *derecho de acceso a la jurisdicción*, esta Sala ha afirmado –v. gr., en las Sentencias de 6-VI-2011 y 12-XI-2010, Incs. 38-2011 y 40-2009, respectivamente– que el art. 2 de la Cn. consagra una serie de derechos que considera fundamentales para una existencia humana digna, en libertad e igualdad. Ahora bien, para que tales derechos no se reduzcan a un reconocimiento abstracto y tengan posibilidades de eficacia, es imperioso el reconocimiento de una garantía que posibilite su realización efectiva y pronta. En virtud de ello, la Constitución consagra, en el art. 2 inc. 1º parte final, *la protección en la conservación y defensa de los derechos de toda persona*. El derecho a la *protección en la defensa* implica –en términos generales– la creación de mecanismos idóneos para la reacción mediata o inmediata ante vulneraciones de los derechos de las personas.

B. En su dimensión *jurisdiccional*, tal derecho fundamental se ha instaurado con la esencial finalidad de lograr la eficacia de los derechos fundamentales de la persona, al permitirle reclamar válidamente, en aquella sede, por actos particulares y estatales que hayan atentado contra tales derechos y a través del instrumento heterocompositivo diseñado para tal finalidad: *el proceso jurisdiccional* en todas sus instancias y grados de conocimiento. En tal sentido, *el proceso*, como realizador del derecho a la protección jurisdiccional, es el instrumento del que se vale el Estado para satisfacer las pretensiones de los particulares en cumplimiento de la *función jurisdiccional*; o, desde la perspectiva de los sujetos pasivos de dichas pretensiones, es el instrumento a través del cual se puede privar a una persona de los derechos consagrados a su favor, cuando se realiza de acuerdo con la Constitución.

C. La *protección jurisdiccional* conlleva, entonces, los derechos de *acceder a los órganos jurisdiccionales* a plantear una pretensión u oponerse a la ya incoada y a la *obtención de una respuesta*, fundada en Derecho, a la pretensión o resistencia, a través de un *proceso equitativo* tramitado de conformidad con la Constitución y las leyes correspondientes.

De la anterior noción, se advierte que la protección jurisdiccional se manifiesta a través de cuatro grandes rubros: (i) *el acceso a la jurisdicción*; (ii) *el proceso constitucionalmente configurado o debido proceso*; (iii) *el derecho a una resolución de fondo motivada y congruente*; y (iv) *el derecho a la ejecución de las resoluciones*.

D. Ahora bien, este Tribunal sostuvo –v. gr., en la Sentencia del 15-I-2010, Amp. 840-2007– que el *derecho de acceso a la jurisdicción* implica la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales para que estos se pronuncien sobre la pretensión formulada, lo cual deberá efectuarse conforme a las normas procesales y procedimientos previstos en las leyes respectivas.

Consecuentemente, el aspecto esencial que comprende dicho derecho es el libre acceso al órgano judicial –entiéndase tribunales unipersonales o colegiados–, siempre y cuando se haga por las vías legalmente establecidas. Ello implica que una negativa de este derecho, basada en causa inconstitucional o por la imposición de condiciones o consecuencias meramente



limitativas o disuasorias de la posibilidad de acudir a la jurisdicción, deviene en vulneradora de la normativa constitucional.

No obstante, debe aclararse que si el ente jurisdiccional decide rechazar al inicio del proceso la demanda incoada, en aplicación de una causa establecida en un cuerpo normativo específico y aplicable, la cual le impide entrar a conocer el fondo del asunto planteado, ello no significa que se esté vulnerando el derecho de acceso a la jurisdicción, *salvo que sea –como se dijo anteriormente– por interpretación restrictiva o menos favorable para la efectividad del derecho fundamental aludido.*

2. A. a. El *derecho a conocer la verdad* encuentra sustento constitucional en los arts. 2 inc. 1° y 6 inc. 1° de la Cn. Por un lado, en virtud del derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos –art. 2 inc. 1° de la Cn.–, la verdad solo es posible si se garantiza, a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción. Por otro lado, debido a que la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres, el derecho a conocer la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre hechos que hayan vulnerado los derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon y, por lo tanto, implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.

b. Así, *el derecho a conocer la verdad es el que le asiste a las víctimas –en sentido amplio, es decir, tanto a las víctimas directas como a sus familiares– de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones.* En ese sentido, se advierte que el Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que permitan llegar a la verdad de los hechos, sean judiciales o extrajudiciales. Además, en la medida en que se considera que la sociedad también es titular del derecho a conocer la verdad de lo sucedido, se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales.

B. Así, se advierte que el derecho a conocer la verdad es un derecho fundamental que posee una dimensión individual y una colectiva. Según la *dimensión individual*, las personas, directa o indirectamente afectadas por la vulneración de sus derechos fundamentales, tienen siempre derecho a conocer, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo y porqué se produjo, entre otras cosas; ello porque el conocimiento de lo sucedido



constituye un medio de reparación para las víctimas y sus familiares. En cuanto a la *dimensión colectiva*, la sociedad tiene el legítimo derecho a conocer la verdad respecto de hechos que hayan vulnerado gravemente los derechos fundamentales de las personas.

a. Al respecto, al referirse a un caso contra El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido: “El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad, como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos por dicho país en su calidad de Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [...] Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos...” (Caso Lucio Parada Cea y otros vrs. El Salvador, párrs. 147 y 152; en igual sentido, Caso Ignacio Ellacuría, S.J. y otros vrs. El Salvador, párrs. 221 y 226).

Asimismo, ha sostenido que “[e]l derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos, forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición” (Caso Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez vrs. El Salvador, párr. 148).

b. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) también ha reiterado el “...derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos [...] Esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro” (Caso 19 Comerciantes vrs. Colombia, párrs. 258 y 259).

Dicho Tribunal ha sostenido también que “...toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido” (caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vrs. El Salvador, párr. 298).

C. Teniendo en cuenta lo antes expresado, el derecho a conocer la verdad implica la facultad de solicitar y obtener información sobre: las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron los hechos lesivos de derechos fundamentales; la identidad de los autores; cuando las lesiones sean particularmente contra derechos como la vida o la libertad, el paradero de las víctimas; y los progresos y resultados de la investigación. En torno a ello, existen obligaciones



específicas del Estado que no solo consisten en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de hechos denunciados. Además, dado que el Estado tiene el deber de prevenir y hacer cesar las vulneraciones de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho a conocer la verdad es esencial para el combate a la impunidad y la garantía de no repetición de aquellas lesiones.

No obstante, debe aclararse que si al momento de judicializar una pretensión se decide rechazar al inicio del proceso la demanda incoada, ello no significa que se esté vulnerando el derecho a conocer la verdad. Lo mismo ocurre si, al conocer el fondo, se considera que las personas procesadas no cometieron los hechos que se les atribuían. Sin embargo, el Estado continuará obligado a realizar todas las tareas necesarias para esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que permitan llegar a la verdad de los hechos, sean judiciales o extrajudiciales.

3. A. a. En cuanto al *derecho de petición*, en las Sentencias del 5-I-2009 y 14-XII-2007, Amps. 668-2006 y 705-2006 respectivamente, se sostuvo que este derecho, consagrado en el art. 18 de la Cn., faculta a toda persona –natural o jurídica, nacional o extranjera– a dirigirse a las autoridades para formular una solicitud por escrito y de manera decorosa.

Correlativamente al ejercicio de este derecho, se exige a los funcionarios que respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar constancia de haberse recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales, en forma motivada y congruente, haciéndole saber a los interesados su contenido. Ello, vale aclarar, no significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la correspondiente respuesta.

b. Además, las autoridades legalmente instituidas, que en algún momento sean requeridas para dar respuesta a determinado asunto, tienen la obligación de responder a lo solicitado en el plazo legal o, si este no existe, en uno que sea razonable.

B. a. Ahora bien, en la Sentencia del 11-III-2011, Amp. 780-2008, se aclaró que el mero incumplimiento de los plazos establecidos para proporcionar una respuesta al solicitante no es constitutivo de vulneración del derecho de petición; pero sí se vulnera cuando la respuesta se emite en un periodo mayor de lo previsible o tolerable, lo que lo vuelve irrazonable.

b. En virtud de lo anterior, para determinar la razonabilidad o no de la duración del plazo para proporcionar respuesta a lo solicitado por los interesados, se requiere de una apreciación objetiva de las circunstancias del caso concreto, como pueden serlo: (i) *la actitud de la autoridad requerida*, debiendo determinarse si la dilación es producto de su inactividad por haber dejado transcurrir, sin justificación alguna, el tiempo sin emitir una respuesta o haber omitido adoptar medidas adecuadas para responder a lo solicitado; (ii) *la complejidad fáctica y jurídica del asunto*; y (iii) *la actitud de las partes en el proceso o procedimiento respectivo*.



C. a. Finalmente, en la Sentencia del 15-VII-2011, Amp. 78-2011, se afirmó que las peticiones pueden realizarse, desde una perspectiva material, sobre dos puntos: (i) un derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y que pretende ejercer ante la autoridad; y (ii) un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no es titular, pero pretende su reconocimiento mediante la petición realizada.

b. Entonces, para la plena configuración del agravio, en el caso del referido derecho fundamental, es indispensable que, dentro del proceso de amparo, el actor detalle cuál es el derecho, interés legítimo o situación jurídica material que ejerce o cuyo reconocimiento pretende.

V. Ahora se debe analizar si las omisiones de la autoridad demandada se sujetaron a la normativa constitucional.

I. Como aspecto conceptual previo, se efectuarán algunas consideraciones respecto a la Fiscalía General de la República.

A. El Ministerio Público tiene una posición relevante dentro del marco constitucional del Estado, que se encuentra determinada por el diseño orgánico de sus funciones y la forma en que realiza sus actividades. En efecto, la Constitución establece tal institución dentro del Título VI –denominado *Órganos del Gobierno, Atribuciones y Competencias*–, cuyo art. 191 señala que “será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos humanos y los demás funcionarios que determine la ley” –Sentencia de 28-III-2006, Inc. 2-2005–. Pues bien, de entre todas las instituciones que integran el Ministerio Público, interesa destacar para los efectos de la presente sentencia a la *Fiscalía General de la República*.

B. En primer término, es preciso recordar que en el *Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983* se señaló que al Fiscal General de la República se le otorgaban atribuciones que le permitirían desempeñar su verdadera función, que antes estaba un poco desnaturalizada por la dependencia del Presidente de la República y la falta de capacidad legal para actuar en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, en la Constitución de 1983 la Fiscalía General de la República tiene las siguientes propiedades:

a. Integra, con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público. En vista de la relevancia de las funciones que ejecuta, la Fiscalía General de la República ocupa una posición destacada en la estructura constitucional, resultando determinante para la configuración del modelo de Estado establecido por la Constitución. En ese sentido, el art. 193 de la Cn. establece directamente sus competencias fundamentales.



b. *Realiza funciones públicas.* Dado que la Fiscalía General de la República realiza funciones que le corresponden al Estado, su prioridad es el interés público –art. 193 ord. 1º de la Cn.–.

c. *Goza de autonomía respecto de los órganos fundamentales del Estado.* Orgánicamente, la Fiscalía General de la República no depende del Legislativo, del Ejecutivo ni del Judicial, aunque con ellos guarda una estrecha relación de coordinación; dicha situación fortalece la autonomía de la institución, que aleja al Fiscal de instrucciones de carácter político o partidista. Para tal fin, el art. 218 de la Cn. establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada.

Con arreglo al argumento de la *sede materiae*, una interpretación simplista parecería indicar que tal disposición constitucional solo es aplicable a los funcionarios y empleados públicos pertenecientes al “Régimen Administrativo”. Sin embargo, con base en el principio interpretativo de unidad de la Constitución, es posible entender que el precepto en cuestión se aplica a cualquier funcionario público de elección directa o indirecta. Así las cosas, se entiende que, en el desempeño de sus funciones, *el Fiscal General de la República no lleva a cabo sus competencias bajo la dependencia de un determinado órgano del Estado o en beneficio de una fracción política específica.*

d. *Su titular realiza una labor técnica altamente especializada,* según las funciones que la Constitución le confiere, por lo cual se debe garantizar que *la persona electa sea la más idónea.*

e. Como consecuencia de su autonomía, *sus actos solo deben estar regidos por los principios de legalidad y por el deber de objetividad e imparcialidad* –Sentencia de Inc. 2-2005, ya mencionada–.

Por el principio de legalidad, porque, a semejanza de lo que ocurre con el resto de los funcionarios públicos, se le impone sujeción en su actividad a la Constitución, a las leyes y a las demás normas que integran el sistema jurídico. Tal exigencia se acentúa en la medida en que la Ley Suprema la obliga de forma expresa a la “defensa de la legalidad” –art. 193 ord. 2º de la Cn.–.

Por el deber de objetividad y el principio de imparcialidad, ya que el Fiscal General de la República debe buscar la verdad de las afirmaciones que hace en todas sus actuaciones, así como el respeto de los derechos fundamentales de las personas, especialmente del imputado y de la víctima en un proceso penal. Por ello, en ningún caso, debe constituirse en un acusador a ultranza, sino que ha de valorar el ejercicio de la potestad requirente que posee, excluyéndolo en los casos en los que, conforme a la ley, no se justifica.

C. Se profundizará ahora en la propiedad definitoria de la autonomía.

a. Mediante la interpretación sistemática de los arts. 191, 192 y 193 de la Cn., como ya se ha dicho, se concluye que se trata de una institución que, aunque integrante del Ministerio



Público, no depende de ningún órgano del Estado, razón por la cual detenta una *autonomía* que puede concebirse desde una perspectiva *interna* y *externa*.

(i) La autonomía orgánica *interna* de la Fiscalía General de la República alude a su organización jerarquizada. Internamente, tal entidad está regida por los principios de *unidad de actuación* y *obediencia jerárquica*. En cuanto al primero, el Fiscal General es uno solo para el país, por lo que es él quien responde de forma institucional y personal por la actuación del ente estatal. Por tanto, *sus auxiliares no actúan a título personal, sino como sus representantes*. Con respecto al segundo —que es consecuencia del anterior—, los miembros de ese conjunto se encuentran sometidos a un criterio de jerarquía administrativa, que permite sostener un criterio uniforme y objetivo en la aplicación de la ley —Sentencia de Inc. 2-2005, ya relacionada—.

(ii) La autonomía orgánica *externa* se refiere a las relaciones que la Fiscalía General de la República tiene con el resto de órganos constitucionales. Sin perjuicio de que más adelante se desarrollen, las funciones que la Constitución le ha conferido a la entidad fiscal trazan su inserción institucional con respecto al resto de órganos estatales.

Así, la Fiscalía se distingue del Órgano Judicial tanto en las funciones como en su organización. En relación con las *funciones*, el Órgano Judicial tiene atribuida la potestad jurisdiccional, mientras que la Fiscalía General de la República lleva a cabo funciones de índole postulatoria y representativas. Con respecto a su *organización*, el Judicial se caracteriza por su independencia; en cambio, la organización de la Fiscalía es jerárquica, de modo que cada uno de sus miembros se rige por el principio de dependencia.

También, por razón de sus funciones, el Fiscal se distingue de la Asamblea Legislativa, debido a que una de las principales funciones que aquel debe realizar es la defensa de la legalidad —art. 193 ord. 2° de la Cn.—. El Fiscal General no es ni debe convertirse en un “comisionado” del Legislativo para defender una “correcta interpretación y aplicación de las leyes” que este emite. En ese sentido, el Fiscal, aunque tiene como una de sus funciones la defensa de la legalidad, no es un delegado de la Asamblea Legislativa para intervenir ante los tribunales con el fin de defender las leyes.

De igual manera, la Fiscalía General de la República, como ya se dijo, es un órgano constitucional que está separado estructuralmente del Órgano Ejecutivo, sin perjuicio de que entre ambos exista una íntima relación en lo atinente a la política criminal. Así, la Fiscalía es una institución autónoma del Ejecutivo, tanto en lo orgánico como en lo funcional. Orgánicamente, ya que, por un lado, actúa mediante sus propios funcionarios —incluso puede crear comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones (art. 193 ord. 7° de la Cn.)—, y, por el otro, carece de toda inserción en el entramado de los diferentes órganos que conforman el Ejecutivo. Funcionalmente, debido a que, como defensor de la legalidad, no puede recibir órdenes de parte del Ejecutivo, ni siquiera en la ejecución de la política criminal diseñada por este.



b. De acuerdo con el art. 193 Cn., las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República son: (i) la representación jurídica del Estado y sus intereses en los ámbitos público y privado; (ii) la defensa de los intereses de la sociedad; (iii) la defensa de la justicia y legalidad, de oficio o a petición de parte; (iv) en materia criminal, la investigación de los hechos punibles –con la colaboración de la Policía Nacional Civil–, la promoción de la acción penal de oficio o a petición de parte y la persecución y enjuiciamiento de los responsables de atentados a las autoridades y desacato; (v) el nombramiento de comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones; y (vi) el desarrollo de su propia organización administrativa interna. Para los efectos de la presente sentencia, se analizarán solo las primeras tres funciones.

(i) De conformidad con el art. 193 ord. 1° Cn., el Fiscal General tiene como una función esencial la salvaguarda de los intereses del Estado y de la sociedad, cuando estos se encuentren amenazados o hayan sido conculcados. En puridad, lo que el art. 193 ord. 1° de la Cn. pretende, al atribuir al Fiscal General de la República la defensa de los intereses de la sociedad, es la efectividad de un derecho o interés colectivo, a fin de que cese su lesión o amenaza o que las cosas vuelvan a su estado anterior –si fuera posible–.

(ii) De acuerdo con el art. 193 ord. 2° de la Cn., otra de las funciones relevantes de la Fiscalía General de la República es *la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad*. Tal postulado encierra la misión genérica de la defensa del orden jurídico, delimita el proceso como el ámbito natural en el que la institución ejerce sus funciones e identifica a los tribunales como la instancia ante la que acude el Fiscal.

La defensa pública de la legalidad no es una función neutra ni automática, pues debe entenderse como instrumento para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común –art. 1 inc. 1° de la Cn.–. Justamente, *la defensa de la legalidad, desde estos fines de la actividad del Estado, es la que explica y justifica todas las intervenciones procesales del funcionario en cuestión ante los distintos tribunales*. En ese orden de ideas, el Fiscal está vinculado a la legalidad en una doble dimensión: el deber de actuar *conforme a la legalidad* y el deber de actuar *en defensa de la legalidad*.

En relación con esta última, la Constitución delimita, *prima facie*, el ámbito en que el Fiscal General ha de desenvolverse, así como la posición que en él le corresponde ocupar. Ello introduce un importante matiz a la defensa de la legalidad, ya que, en rigor, debe entenderse que la Constitución no le atribuye una defensa en sentido amplio, sino que lo convierte en uno de los instrumentos para hacer efectiva dicha garantía; limitando su condición postulante al *campo procesal* y siempre acotada dentro de los márgenes del *interés público y social*. Tal intervención puede producirse tanto en la *jurisdicción ordinaria* (penal, tributaria, civil, etc.) como en la *jurisdicción especializada* (constitucional), *pues a dicho funcionario le corresponde representar al Estado en toda clase de juicios* –art. 193 ord. 5° Cn.–.





(iii) Finalmente, el art. 193 ords. 3º y 4º de la Cn. prevé que al Fiscal General le compete dirigir la investigación del delito—con la colaboración de la Policía Nacional Civil—y promover la acción penal de oficio o a petición de parte.

Con respecto a la *investigación del delito*, es oportuno recordar que, previo a la iniciación de un proceso penal, es posible la realización de una serie de diligencias preliminares de carácter indagatorio que, a partir de la comunicación de la *notitia criminis*, permitan determinar la posible existencia de un hecho delictivo e individualizar a su responsable —

Sentencia de Inc. 2-2005, ya relacionada—. Este conjunto de actividades de adquisición de elementos indiciarios probatorios que servirán para el ejercicio de la acción penal vía requerimiento fiscal y el posterior sostenimiento de la pretensión punitiva en el juicio oral y público corresponden al Fiscal, de acuerdo con el art. 193 ord. 3º de la Cn. Según dicha función constitucional, el citado funcionario público debe investigar oficiosamente el delito y perseguir a los presuntos responsables, lo cual es una aplicación práctica de los principios que rigen el marco realizativo del *ius puniendi* estatal: oficialidad, obligatoriedad, irrevocabilidad, indivisibilidad y unidad. Para cumplir con ese cometido, la Constitución designa a la Policía Nacional Civil como órgano colaborador de la actividad fiscal, por lo que las relaciones entre ambas entidades se rigen por medio de la denominada *dirección funcional de la investigación*; situación que convierte a la Fiscalía en la responsable de la legalidad y constitucionalidad de todo acto de investigación que avale.

El art. 193 ord. 4º Cn. le atribuye de igual manera al Fiscal General el ejercicio de la *acción penal*. En la Sentencia de Inc. 2-2005 se dijo que la acción penal pública está a cargo del Fiscal General, en la medida en que la persecución del delito debe ser llevada a cabo con rigor, uniformidad y objetividad, sin tomar en cuenta otros intereses más que el de la aplicación de la ley. También se sostuvo en tal precedente que el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía se ha instaurado para excluir toda posibilidad de que el proceso penal sea iniciado de oficio por el juez.

Sin embargo, en la Sentencia de Inc. 5-2001 se *reinterpretó dicha función fiscal*, teniendo en cuenta el derecho de acceso a la justicia y su relación con los derechos de las víctimas; derechos y garantías que les permiten participar en los procesos judiciales, ser escuchadas, aportar pruebas, recurrir los fallos o resoluciones judiciales y obtener una reparación integral. En definitiva, se acotó que, en la actualidad, existe un principio de naturaleza político-criminal que se relaciona con la autonomía de la víctima y que se constituye en un nuevo lineamiento estructural que informa los sistemas de enjuiciamiento criminal modernos, en especial, el procesal penal.

En ese sentido, se concluyó que el ejercicio de la acción penal pública “no es un monopolio” ni competencia exclusiva del Fiscal General de la República, ya que, entenderlo

así, implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos.

2. Establecido lo anterior, se examinará el caso concreto.

A. a. La parte actora aportó como prueba los siguientes documentos: (i) fotocopia simple del expediente de las diligencias de exhumación iniciadas y continuadas ante el Juzgado de Paz del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; (ii) certificación de escrito suscrito por el abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera, por medio el cual se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República el 23-XI-2009 sobre el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (iii) certificación de escrito de fecha 17-VI-2010, suscrito por la apoderada de la parte actora y otros miembros del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" –en lo sucesivo, "CPDHML"–, dirigido al Fiscal General de la República, mediante el cual se solicitó: que se realizaran las investigaciones pertinentes; certificación integra de las exhumaciones realizadas y de las pruebas recabadas durante el proceso; recabar información sobre los jefes militares y acciones militares reportadas en la zona durante la época de tal homicidio colectivo; recabar testimonios de familiares de las víctimas y de otros testigos de los hechos; realizar nuevas exhumaciones; realizar peritaje sobre los dictámenes forenses; y, además, que se notificaran a los familiares de las víctimas del homicidio colectivo de San Francisco Angulo los avances de la investigación y se concediera una reunión para el mismo efecto; (iv) certificación de escritos de fecha 13-VII-2010, suscritos por la apoderada de la parte actora, dirigidos al Fiscal General de la República y con copia al agente auxiliar de dicho funcionario en San Vicente, mediante los cuales solicitó un informe sobre la denuncia penal interpuesta el 23-XI-2009 y, además, que se proporcionara una certificación de la pieza n° 4 y siguientes, así como de las demás diligencias realizadas en relación con el homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (v) certificación de escrito de fecha 24-XI-2010, suscrito por la apoderada de la parte actora y la directora del CPDHML, dirigido al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a su Procurador Adjunto y al agente auxiliar de la Fiscalía General de la República en San Vicente, mediante el cual, por un lado, se denunciaron las omisiones del Fiscal General de la República en la notificación de las diligencias realizadas en el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo o en la realización de las mismas y, por el otro, se solicitó que se realizaran las diligencias respectivas que le competían a la mencionada Procuraduría ante las instituciones públicas correspondiente; (vi) certificación de escrito de fecha 24-XI-2010, suscrito por la apoderada de la parte actora y la directora del CPDHML, dirigido al Director de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Regional Zona Central, de la Fiscalía General de la República, con copia al Fiscal General de la República, mediante el cual se solicitó: que se realizaran las investigaciones pertinentes; certificación integra de las exhumaciones realizadas y de las pruebas recabadas durante el proceso; recabar información sobre los jefes militares y acciones militares reportadas en la zona



durante la época del homicidio colectivo a través de la inspección de los archivos militares; recabar testimonios de familiares de las víctimas y de otros testigos de los hechos; realizar nuevas exhumaciones; realizar peritaje sobre los dictámenes forenses; y, además, que se concediera una reunión para conocer las diligencias realizadas en el caso denunciado; (vii) certificación de escrito de fecha 16-XII-2010, suscrito por la apoderada de la parte actora, dirigido al Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, por medio del cual se solicitó una reunión con el Fiscal General de la República o un representante que pudiera informar sobre las diligencias realizadas en el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo, ya sea a los familiares de las víctimas o a su apoderada; (viii) certificación de escrito de fecha 16-VI-2011, suscrito por la apoderada de la parte actora y por la directora y el asesor jurídico del CPDHML, dirigido al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a su Procurador Adjunto, por medio del cual solicitaron que se monitorearan las diligencias realizadas en el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo y que se les notificaran tales diligencias; y (ix) certificación de resolución de fecha 22-VII-2011, mediante la cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos admitió la denuncia interpuesta en el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo.

b. Por su parte, la autoridad demandada aportó como prueba certificación notarial de los siguientes documentos: (i) escrito presentado ante la oficina fiscal de San Vicente el 14-VI-2005, mediante el cual se solicitó la exhumación de restos humanos, con el fin de determinar el lugar de fallecimiento y la causa de muerte de las personas mencionadas; (ii) oficio del 18-VII-2005, suscrito por el Jefe de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de San Vicente y dirigido al Jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de San Vicente, para que designara un investigador y, de esa manera, evacuar la petición de exhumación; (iii) escrito presentado por la Fiscalía ante el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca el 8-VIII-2005, solicitando que se ordenara la exhumación de restos humanos, con el fin de poder inhumar, con respeto a las convenciones de nuestra cultura, los cuerpos de las personas que residían en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca; (iv) auto del 12-VIII-2005, emitido por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, mediante el cual se admitió el escrito presentado por la representación fiscal; (v) auto del 19-IX-2005, emitido por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, por medio del cual se señaló como fecha para iniciar la exhumación el 26-IX-2005; (vi) resolución del 28-II-2005, pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, mediante la cual se concluyeron las diligencias de exhumación; (vii) resolución del 24-I-2010, pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, mediante la cual se le requirió al Fiscal General de la República el inicio inmediato de la investigación y de la acción penal correspondiente y se le remitió certificación de las diligencias de exhumación; (viii) oficio n° 1946 del 4-XI-2011, dirigido a la Policía Nacional Civil de San Vicente, mediante el cual se solicitó el nombramiento de un investigador para las diligencias instruidas en sede fiscal; (ix)



oficio ref. SDVIN2011-2198 del 04/11/2011, emitido por la Oficina de Investigación de Denuncias, Delegación de la Policía Nacional Civil de San Vicente, por medio del cual se asignó como investigadores a Juventino Cortez, Guillermo Comayagua Barahona y Francisco Alexander Torres Rivera; (x) dirección funcional del caso ref. 779-UDVSV-05, emitida por el Fiscal del caso el 5-XI-2011, mediante la cual se encomendó la realización de una serie de diligencias para el esclarecimiento del homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (xi) escritos de fecha 11-XI-2011, dirigidos a los Juzgados Primero de Paz de Tecoluca, Segundo de Paz de Zacatecoluca y Primero de Instrucción de San Vicente, por medio de los cuales se les solicitó que informaran si existían diligencias de investigación sobre los hechos denunciados; (xii) oficio n° 1977 del 10-XI-2011, dirigido al Ministro de la Defensa Nacional, mediante el cual se le solicitó que proporcionara información respecto al homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (xiii) oficios n° 2193-11, 2194-11, 2195-11, 2196-11 y 2197-11, todos del 8-XII-2011, dirigidos a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, al Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, al Director de Tutela Legal del Arzobispado, al Director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y al Director de Derechos Humanos de Cancillería, mediante los cuales se les solicitó que explicaran su rol en la investigación de la muerte de los habitantes de San Francisco Angulo y si poseían alguna información que pudiera coadyuvar al desarrollo de la investigación; (xiv) oficio ref. B3c1b.01, suscrito por el General de División del Ministerio de Defensa, José Atilio Benítez Parada, mediante el cual manifestó que no se habían encontrado antecedentes relacionados con el supuesto operativo militar realizado en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca; (xv) escrito de fecha 3-I-2012, suscrito por el Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, mediante el cual aclaró que dicho instituto había colaborado en rescatar la memoria histórica, exhumaciones, asistencia jurídica y apoyo psicosocial, pero no proporcionó información particular sobre el caso del homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (xvi) dirección funcional del caso ref. 779-UDVSV-05, emitida por el fiscal del caso el 17-I-2012, mediante la cual se le ordenó, por segunda ocasión, a los investigadores de la Policía Nacional Civil nombrados la realización de una serie de diligencias para el esclarecimiento del homicidio colectivo de San Francisco Angulo; (xvii) oficio n° 40-01 del 12-I-2012, suscrito por la Jueza Segundo de Paz de Zacatecoluca, mediante el cual informó que dicho juzgado no contaba con registro alguno de investigación sobre el hecho acaecido el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca; y (xviii) oficio n° 0006817 del 25-I-2012, suscrito por el Tercer Secretario Directivo de la Asamblea Legislativa, mediante el cual informó que la Junta Directiva de dicho Órgano del Estado no había desempeñado ningún rol en las diligencias de exhumación de cadáveres practicadas en el Cantón San Francisco Angulo y que no tenía información relacionada con el caso.



c. Asimismo, se encuentra agregada el acta de las declaraciones de parte del señor Higinio Ponce Ruiz y la señora Ana Miriam Ábrego Moreno y de las declaraciones de testigo de los señores Heli Jeremías Hernández Hernández y Donny José Alberto Soriano Carranza y la señora Victoria Carolina Constanza Baires. Dichas partes y testigos expusieron sobre los hechos ocurridos el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo y, además, sobre la omisión del Fiscal General de la República de proporcionar información sobre las diligencias realizadas para investigar tales hechos.

B. a. Los documentos públicos, según el art. 331 del Código Procesal Civil y Mercantil (C.Pr.C.M.), de aplicación supletoria al proceso de amparo, son aquellos expedidos por un notario, una autoridad o un funcionario, en el ejercicio de su cargo, y que, cuando se aportan en original o testimonio y no se ha probado su falsedad, constituyen prueba fehaciente de los hechos o actos que documentan, de la fecha, de los intervinientes y del fedatario o funcionario que los expide.

Teniendo en cuenta lo anterior, con las certificaciones aportadas por las partes procesales, las cuales fueron expedidas por los funcionarios correspondientes en el ejercicio de sus competencias, se han comprobado los hechos que en esos documentos se consignan.

b. Sobre las copias simples de documentos, aunque el C.Pr.C.M. no se refiere expresamente a su valor probatorio, en tanto que medios no previstos en la ley, serán admisibles cuando respeten la moral y la libertad personal de las partes y de terceros, debiendo aplicárseles las disposiciones relativas a los medios reglados. Así, dada su similitud con las fotografías, las disposiciones a aplicárseles son las de los documentos (arts. 330 inc. 2º y 343 C.Pr.C.M.).

En virtud de lo anterior, con la fotocopia simple de parte del expediente de las diligencias de exhumación iniciadas y continuadas ante el Juzgado de Paz del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, se han comprobado los hechos que en esos documentos se consignan.

c. Por otra parte, el interrogatorio de testigos está contemplado en el art. 354 del C.Pr.C.M. y es un medio de prueba admisible, siempre que la persona propuesta, sin tener calidad de parte, tenga conocimiento de los hechos controvertidos que son objeto de prueba. Además, la prueba testimonial se valora según las reglas de la sana crítica, es decir que el juzgador debe considerar ciertos elementos que coadyuven a la credibilidad del testimonio, tales como: la forma en la que el testigo tuvo conocimiento de los hechos; si los presenció por sí mismo o tuvo noticia de ellos por referencia de un tercero; si el interrogatorio se realizó con inmediación judicial; si lo declarado es relevante para el objeto del proceso, etc., pero no está obligado a los resultados de dicha prueba.

En el caso en estudio, la prueba testimonial fue realizada con total inmediación judicial, ya que el interrogatorio se llevó a cabo en la sede de este Tribunal y, de igual forma, los testigos comparecieron el día y hora señalados, respondiendo de forma clara, precisa, concordante y



coherente en un interrogatorio directo. Además, no se han advertido aspectos sustanciales que contraríen lo sostenido por los testigos y las deposiciones de estos se encuentran corroboradas por la prueba documental incorporada en este proceso; por tanto, dichas declaraciones son creíbles.

d. La declaración de parte se encuentra contemplada en el C.Pr.C.M. como un medio probatorio, en virtud del cual, para aportar datos y esclarecer afirmaciones anteriores o, en su caso, para preparar su pretensión, su oposición a esta o su excepción, cada parte podrá solicitar al juez que ordene recibir su declaración personal (art. 344) o la de la parte contraria o de quien pudiera ser su contraparte en un proceso (art. 345). Dicha declaración de parte se valora según las reglas de la sana crítica, es decir que el juzgador podrá considerar como ciertos los hechos que una parte haya reconocido en la contestación del interrogatorio, pero no está obligado por los resultados de dicha prueba, sobre todo si tal reconocimiento se opone al resultado de las otras pruebas.

En el caso en estudio, las declaraciones de parte fueron realizadas con total inmediación judicial, ya que los interrogatorios se llevaron a cabo en la sede de este Tribunal y, de igual forma, las partes declarantes comparecieron el día y hora señalados, respondiendo de forma clara, precisa, concordante y coherente en un interrogatorio directo. Además, no se han advertido aspectos sustanciales que contraríen lo sostenido por las partes y las declaraciones de estas se encuentran corroboradas por la prueba documental incorporada en este proceso; por tanto, dichas declaraciones son creíbles.

C. Con base en los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos y datos:

a. El 25-VII-1981, entre las 10:45 y las 11:00, llegó al cantón San Francisco Angulo, de la jurisdicción de Tecoluca, departamento de San Vicente, un grupo de aproximadamente 20 hombres fuertemente armados, al parecer militares, y procedieron a asesinar a 45 personas civiles, en su mayoría mujeres y niños, sin que se produjera enfrentamiento alguno.

b. Un grupo de familiares y sobrevivientes de dicho homicidio colectivo solicitaron, mediante escrito presentado ante la oficina fiscal de San Vicente el 14-VI-2005, la exhumación de los restos humanos, con el fin de determinar el lugar de fallecimiento y la causa de muerte de las personas mencionadas.

c. La Fiscalía General de la República ordenó la realización de una inspección técnico-policial en el lugar donde supuestamente fueron sepultados los cadáveres y, durante su realización, personas que manifestaron ser sobrevivientes del homicidio colectivo que ocurrió el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, señalaron 8 presuntas fosas con los restos de unas 45 personas asesinadas en dicho lugar.

d. La Fiscalía General de la República, luego de considerar que se había obtenido información que, por sus características, se deducía que era veraz en cuanto a tiempo, espacio y



circunstancias, solicitó diligencias de exhumación ante el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, por medio de escrito presentado el 12-VIII-2005, con la finalidad de extraer los restos de más de 40 osamentas sepultadas en el cantón San Francisco Angulo, para que "... se les pudiera inhumar con los respetos convencionales de nuestra Cultura".

e. El Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, previo a resolver lo solicitado, consideró que debía citarse a los testigos, con el objeto de indagar, entre otros aspectos de interés, la fecha, hora y lugar de los hechos mencionados por la representación fiscal, por lo que se señaló el 8-IX-2005 para la realización de una audiencia especial. Durante la realización de dicha diligencia, en la cual estuvo presente la representación fiscal por medio del abogado Sergio Alfredo Flores Acevedo, los declarantes expusieron, en síntesis, que eran sobrevivientes del homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, el 25-VII-1981, perpetrada por un grupo de aproximadamente 20 hombres armados con fusiles, a quienes identificaron como miembros de los escuadrones de la muerte, de la Fuerza Armada de El Salvador, de la defensa civil y de la comandancia de la Guardia Nacional de Tecoluca, siendo el jefe en dicha ciudad una persona identificada como "sargento Ramos".

f. Mediante auto del 19-IX-2005, el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca accedió a lo solicitado y señaló como fecha para iniciar la exhumación de cadáveres ubicados en diferentes lugares del Cantón San Francisco Angulo el 26-IX-2005.

g. Durante la realización de las excavaciones se encontraron 30 osamentas y, posteriormente, el 28-II-2006, dichas diligencias se suspendieron, pues no fue posible localizar otros restos humanos por falta de equipo tecnológico idóneo, así como por la desorientación de los testigos por el cambio de la topografía a través del tiempo.

h. Por medio del escrito de fecha 23-XI-2009, el abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera denunció ante la Fiscalía General de la República a efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Defensa Civil de Tecoluca o a quienes eventualmente resultaran responsables de la comisión de los delitos de Asesinato, Actos de Terrorismo y Actos Preparatorios del Terrorismo, por la matanza de aproximadamente 45 personas en la comunidad San Francisco Angulo, jurisdicción de Tecoluca, departamento de San Vicente, el día 25-VII-1981, solicitando expresamente que se realizaran las investigaciones pertinentes, en orden a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

i. El Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, por medio de resolución del 24-I-2010, consideró que la ley penal aplicable en el tiempo era el Código Penal de 1973, pues los hechos fueron realizados el 25-VII-1981. Asimismo, aclaró que, de investigarse los delitos e individualizarse y juzgarse a los responsables, en atención al principio de legalidad, era aplicable el Código Procesal Penal de 1998 –el vigente en ese momento–. También estableció que crímenes tan graves como los ocurridos el 25-VII-1981 en San Francisco Angulo, de conformidad con la normativa interna e internacional, no podían ser sometidos a excluyentes de



responsabilidad penal, como la amnistía y la prescripción, pues las mismas vendrían a asegurar la impunidad de los perpetradores. Sin embargo, en la mencionada resolución se advirtió que las diligencias de exhumación de las víctimas del homicidio colectivo de San Francisco Angulo no se habían efectuado como consecuencia del ejercicio de la acción punitiva estatal, sino en el marco de una actuación jurisdiccional para garantizar el “derecho de petición y respuesta” a los familiares de las víctimas y el fin humanitario de que estos familiares pudiesen recuperar los restos de sus seres queridos y darles “cristiana sepultura”. En ese sentido, para garantizar los derechos de los familiares de las víctimas del mencionado homicidio colectivo, consideró procedente remitir los resultados obtenidos con las diligencias a la Fiscalía General de la República para que se iniciara de inmediato la investigación y se promoviera acción penal, de conformidad con los arts. 193 de la Cn. y 83 y 84 del Código Procesal Penal de 1998 –el vigente en ese momento–. Dichos resultados fueron remitidos por medio de certificación de las diligencias de exhumación –conformadas por 7 piezas (1287 folios)–, la cual fue recibida en la Fiscalía General de la República el 25-I-2010 por el Lic. Héctor Francisco Burgos Guidos, quien se desempeñaba como asesor personal del Fiscal General.

j. Por medio de escrito de fecha 24-X-2011 presentado ante el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, la Fiscalía General de la República expuso que, para la investigación del homicidio colectivo ocurrido en San Francisco Angulo, debían aplicarse los Códigos Penal y Procesal Penal vigentes el día de los hechos, por lo que consideró que la investigación sobre las primeras diligencias le correspondía al Juez de Paz, quien debía remitirlo posteriormente al Juez de Primera Instancia (ahora Primero de Instrucción). En ese sentido, solicitó que el Juez Primero de Paz de Tecoluca continuara con la investigación y practicara una serie de diligencias de investigación. Asimismo, mediante el mencionado escrito, se puso a disposición de la autoridad judicial, en original, la denuncia interpuesta por el abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera, para que la anexara al proceso judicial n° 01/2005 y le diera el trámite de ley correspondiente.

k. Mediante la resolución de fecha 27-X-2011, pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, se aclaró que el expediente judicial n° 01/2005 se refería a diligencias de exhumación solicitadas por la Fiscalía General de la República el 12-VIII-2005, por lo que no existía un proceso judicial. Asimismo, insistió en que no se debía aplicar el Código Procesal Penal de 1973, sino el de 1998. Por otro lado, se mencionó que la denuncia interpuesta en sede fiscal por el abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera era del 23-XI-2009 y que, a esa fecha, 27-X-2011, no se había hecho nada por parte de la Fiscalía en cuanto a la investigación y/o promoción de la acción penal. En conclusión, se consideró que era inatendible la solicitud de que fuera la mencionada autoridad judicial la que iniciara la investigación.

l. La apoderada de la parte actora, junto con otros miembros del CPDHML, suscribió los escritos de fechas 17-VI-2010 –presentado el 17-VI-2010–, 13-VII-2010 –2 escritos,



presentados el 15-VII-2010 y el 16-VII-2010-, 24-XI-2010 –presentado el 16-XII-2010– y 16-XII-2010 –presentado el 17-XII-2010–, dirigidos o con copia al Fiscal General de la República, en los cuales se solicitó: la realización de las investigaciones respecto a los hechos denunciados, relativos al homicidio colectivo de San Francisco Angulo ocurrido el 25-VII-1981; certificación de algunas diligencias; la realización de algunas diligencias –v.gr., recabar información sobre los jefes militares y acciones militares reportadas en la zona durante la época del homicidio colectivo y realizar entrevistas a los familiares de las víctimas y otros testigos–; y, además, que se notificaran a los familiares de las víctimas del homicidio colectivo de San Francisco Angulo los avances de la investigación y se concedieran reuniones para el mismo efecto.

m. La Fiscalía General de la República, por medio del oficio n° 1946 del 4-XI-2011, dirigido a la Policía Nacional Civil de San Vicente, solicitó el nombramiento de un investigador para las diligencias instruidas en sede fiscal. En virtud de tal solicitud, la Oficina de Investigación de Denuncias, Delegación de la Policía Nacional Civil de San Vicente, mediante el oficio ref. SDVIN2011-2198 del 04/11/2011, asignó como investigadores a Juventino Cortez, Guillermo Comayagua Barahona y Francisco Alexander Torres Rivera.

n. La Fiscalía General de la República, por medio de la dirección funcional del caso ref. 779-UDVSV-05, emitida el 5-XI-2011, le solicitó al Subinspector José Paz Calles Chévez, Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de San Vicente, que le ordenara a los investigadores nombrados la realización de las siguientes diligencias para el esclarecimiento del homicidio colectivo de San Francisco Angulo: entrevistar, como testigos u ofendidos, a los familiares de las víctimas y sobrevivientes de los hechos investigados, así como a cualquier persona que estos mencionaran; ubicar a los familiares de 19 víctimas y recibirles las correspondientes denuncias; ubicar a las personas que participaron en la inhumación de los cadáveres el día del hecho y entrevistarlos; averiguar quiénes eran los propietarios de los inmuebles donde fueron inhumados los cadáveres y entrevistarlos; ubicar nuevas fosas con restos óseos y realizar inspección y álbum fotográfico; ubicar los lugares donde se cometieron los hechos y practicar inspección técnica ocular; solicitar informe detallado al Ministro de la Defensa Nacional y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada sobre las unidades especiales que intervinieron en el operativo realizado en San Francisco Angulo el 25-VII-1981, con la identidad de los jefes u oficiales al mando de cada una de las unidades involucradas; averiguar quién era la persona identificada como “sargento Ramos”, aparentemente el jefe de la comandancia de guardia que se ubicaba en la Alcaldía Municipal. Dicha dirección funcional, según consta, fue recibida a las 15:40 horas del 7-XI-2011, por “Luis González”. El 17-I-2012 se emitió por segunda ocasión dirección funcional, reiterándole al Subinspector José Paz Calles Chévez que ordenara a los investigadores designados la realización de las diligencias encomendadas. Tal dirección funcional fue recibida,



según consta, por el “señor Calles”. En ambas direcciones funcionales se requirió la presentación de las diligencias encomendadas dentro de un plazo máximo de 15 días.

ñ. La Fiscalía General de la República, mediante los escritos de fecha 11-XI-2011, dirigidos a los Juzgados Primero de Paz de Tecoluca, Segundo de Paz de Zacatecoluca y Primero de Instrucción de San Vicente, les solicitó que informaran si existían diligencias de investigación sobre los hechos denunciados. En virtud de dichas peticiones, la Jueza Segundo de Paz de Zacatecoluca, mediante oficio n° 40-01 del 12-I-2012, informó que dicho juzgado no contaba con registro alguno de diligencias sobre el hecho acaecido el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca.

o. La Fiscalía General de la República, mediante oficio n° 1977 del 10-XI-2011, solicitó al Ministro de la Defensa Nacional que proporcionara información respecto al homicidio colectivo de San Francisco Angulo. En razón de tal solicitud, el General de División del Ministerio de Defensa, José Atilio Benítez Parada, por medio del oficio ref. B3clb.01, manifestó que no se habían encontrado antecedentes relacionados con el supuesto operativo militar realizado en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca.

p. La Fiscalía General de la República, mediante los oficios n° 2193-11, 2194-11, 2195-11, 2196-11 y 2197-11, todos del 8-XII-2011, dirigidos a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, al Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, al Director de Tutela Legal del Arzobispado, al Director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y al Director de Derechos Humanos de Cancillería, respectivamente, les solicitó que explicaran su rol en la investigación de la muerte de los habitantes de San Francisco Angulo y si poseían alguna información que pudiera coadyuvar al desarrollo de la investigación. En virtud de tales peticiones, el Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y el Tercer Secretario Directivo de la Asamblea Legislativa informaron que no tenían información relacionada con el caso.

D. Teniendo en cuenta el objeto de la controversia, se procederá a determinar el primer punto de la pretensión, esto es, si el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad del señor Medardo Mijango González y otros, al omitir ordenar que se continuara con la investigación del homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en la Comunidad San Francisco Angulo del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; hecho que fue denunciado ante dicho funcionario el día 23-XI-2009, sin que hasta la fecha haya realizado diligencia alguna o promovido las acciones penales correspondientes.

a. (i) En virtud de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, se configura el deber genérico de protección de los mismos. Así, del significado y funciones de estos derechos dentro del orden constitucional, se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que la misma ha de



ser asumida por el Estado. Por consiguiente, este tiene tanto la prohibición de lesionar la esfera individual protegida por los derechos fundamentales como la obligación de contribuir a la efectividad de tales derechos.

En efecto, según ha sido caracterizada por la jurisprudencia constitucional, la justicia, como concepto omnicomprendivo, exige garantizar a todos los individuos una cuota igual de libertad (Sentencia de 23-III-2001, Inc. 8-97). En ese sentido, los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son la fuente de obligaciones para el Estado, principalmente en las tareas de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados.

(ii) Como se sostuvo anteriormente, el art. 193 ords. 3° y 4° de la Cn. establece que al Fiscal General de la República le compete dirigir la investigación del delito –con la colaboración de la Policía Nacional Civil– y promover la acción penal de oficio o a petición de parte, respectivamente.

Así, a dicho funcionario le corresponde la adquisición de los elementos indiciarios probatorios que permiten determinar la posible existencia de un hecho delictivo e individualizar a su responsable y que eventualmente sirven para el ejercicio de la acción penal vía requerimiento fiscal y el sostenimiento de la pretensión punitiva en el juicio oral y público. Por lo que, según dicha función constitucional, el citado funcionario público debe investigar oficiosamente el delito y perseguir a los presuntos responsables, lo cual es una aplicación práctica de los principios que rigen el marco realizativo del *ius puniendi* estatal: oficialidad, obligatoriedad, irrevocabilidad, indivisibilidad y unicidad.

Para cumplir con ese cometido, la Constitución designa a la Policía Nacional Civil como órgano colaborador de la actividad fiscal, por lo que las relaciones entre ambas entidades se rigen por medio de la denominada *dirección funcional de la investigación; situación que convierte a la Fiscalía en la responsable de la legalidad y constitucionalidad de todo acto de investigación que avale*.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional, por parte de la Fiscalía General de la República, consistirá en formular y probar la acusación, como parte de su rol dentro del procedimiento común, y, cuando ello no sea posible, solicitar el sobreseimiento, la absolución del encausado o la aplicación de una salida alterna al sistema penal. Esto es así, debido a que el fin del ejercicio de la acción penal no es el de llegar a una condena, sino determinar la verdad a propósito de un delito que se dice cometido y que se atribuye a una determinada persona. En ese sentido, debe recordarse que el ejercicio de la acción penal pública no es un monopolio ni competencia exclusiva del Fiscal General de la República, ya que, entenderlo así, implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos.



(iii) En el presente caso, la autoridad demandada sostuvo que fue a partir de la solicitud de exhumación presentada en el 2005 que la Fiscalía conoció los hechos relativos al homicidio colectivo de San Francisco Angulo, pero que tal conocimiento no se había tenido en el marco de una investigación penal, sino de una solicitud de colaboración en la exhumación de los restos de personas fallecidas en 1981, la cual fue atendida. Consecuentemente, antes de la resolución emitida por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, el 24-I-2010 --con la que se concluyeron formalmente las diligencias de exhumación--, dicha Fiscalía no podía realizar diligencias de investigación, aun habiéndose interpuesto denuncia el 23-XI-2009, pues no se había concluido que efectivamente se estaba ante un hecho criminal.

De la documentación aportada por las partes se advierte que, efectivamente, la Fiscalía General de la República tuvo inicialmente conocimiento del homicidio colectivo de San Francisco Angulo por la solicitud de exhumación de los familiares y sobrevivientes de tal hecho, es decir, no mediante una denuncia formal. Sin embargo, en virtud de los elementos expuestos en tal solicitud, la Fiscalía ordenó la realización de una inspección técnico-policial en el lugar donde supuestamente fueron sepultados los cadáveres y, durante su realización, personas que manifestaron ser sobrevivientes del homicidio colectivo del 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo señalaron 8 presuntas fosas con los restos de unas 45 personas asesinadas en dicho lugar. Por ello, la misma Fiscalía, al momento de solicitar a la autoridad judicial la realización de las diligencias de exhumación, consideró que se había obtenido "...información que por sus características se deduce que es veraz en cuanto a tiempo, espacio y circunstancias...".

Lo anterior implica que, a pesar de no haberse interpuesto formalmente una denuncia en el año 2005, de los hechos expuestos y diligencias realizadas, la Fiscalía advirtió que se encontraba en presencia de una situación fáctica veraz respecto a la comisión de ilícitos penales. Dicho conocimiento fue reforzado posteriormente, ya que el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, previo a resolver la solicitud de exhumación, realizó una audiencia especial el 8-IX-2005, con el objeto de indagar, entre otros aspectos de interés, la fecha, hora y lugar de los hechos mencionados por la representación fiscal, y en la cual estuvo presente por medio del abogado Sergio Alfredo Flores Acevedo. En ese sentido, la Fiscalía pudo escuchar a los declarantes, quienes expusieron, en síntesis, que eran sobrevivientes del homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, el 25-VII-1981, perpetrada por un grupo de aproximadamente 20 hombres armados con fusiles, quienes fueron identificados como miembros de los escuadrones de la muerte, de la Fuerza Armada de El Salvador, de la defensa civil y de la comandancia de la Guardia Nacional de Tecoluca, siendo el jefe en dicha ciudad una persona identificada como "sargento Ramos".

Consecuentemente, en virtud de que la función constitucional atribuida al Fiscal General de la República es la de investigar oficiosamente el delito y perseguir a los presuntos



responsables, no es válido sostener que, solo por el hecho de que en el 2005 no se interpuso formalmente una denuncia, dicha autoridad no tenía la obligación de investigar los hechos relativos al homicidio colectivo ocurrido, según los denunciantes, en San Francisco Angulo el 25-VII-1981. Por el contrario, *desde el momento en que la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento de los hechos mencionados, respecto a los cuales consideró que tenía "...información que por sus características se deduc[ía] que e[ra] veraz en cuanto a tiempo, espacio y circunstancias..."*, tuvo la obligación constitucional de investigarlos.

Así, admitir que la Fiscalía no tenía la obligación de investigar de oficio los hechos que habían sido sometidos a su conocimiento únicamente por la circunstancia de que no se había planteado una demanda, implicó una desprotección para los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, los cuales son fuente de obligaciones para el Estado, principalmente, en las tareas de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados. En razón de lo anterior, tampoco puede admitirse que la Fiscalía General de la República se encontrara imposibilitada para investigar solo por el hecho de que no existiera una resolución judicial que finalizara las diligencias de exhumación y que señalara la posible existencia de algún delito, ya que era justamente a dicha Fiscalía a la que correspondía analizar los hechos denunciados y realizar las investigaciones pertinentes para que, si se encontraba ante la posible comisión de un delito, ejerciera la correspondiente acción penal.

Por otro lado, se advierte que, a pesar de que el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, mediante resolución del 24-I-2010, le remitió a la Fiscalía General de la República los resultados obtenidos en las diligencias de exhumación para que se iniciara de inmediato la investigación y se promoviera acción penal, la autoridad demandada objetó, el 24-X-2011, que las diligencias deberían ser tramitadas por el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca, ya que era el competente en el momento en que sucedieron los hechos. Ello significa que la Fiscalía General de la República no realizó ninguna actividad desde que se emitió la mencionada resolución judicial hasta el 24-X-2011, es decir, *durante 1 año y 9 meses la actividad fiscal fue nula*. Al respecto, la autoridad demandada sostuvo que la controversia en cuanto a quién le correspondía la investigación de los delitos fue lo que le imposibilitó realizar la actividad investigativa correspondiente.

Con relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que toda ley procesal, al entrar en vigencia, es de aplicación inmediata para procesos futuros, pero se amplía la vigencia de la ley derogada para los procesos iniciados con anterioridad. En ese sentido, dado que en ese momento el art. 453 del Código Procesal Penal de 1998 –al igual que el art. 504 del Código Procesal Penal ahora vigente– establecía que “[l]as disposiciones de este Código se aplicarán desde su vigencia a los procesos futuros, cualquiera que sea la fecha en que se hubiere cometido el delito o falta” y que no se había iniciado ningún proceso penal, no podía aplicarse en ese caso el Código Procesal Penal de 1973. Por lo tanto, no se justifica que hayan transcurrido 1 año y 9



meses sin que la Fiscalía General de la República efectuara alguna diligencia investigativa o que, al menos, solicitara que se aclarara la supuesta controversia. Además, debe observarse que la denuncia penal fue interpuesta por el abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera el 23-XI-2009, por lo que *ya habían transcurrido más de 2 años sin que se investigaran los hechos denunciados*. Incluso el Juez Primero de Paz de Tecoluca señaló en su resolución del 27-X-2011 que, “...a la presente fecha, no se ha hecho nada por parte de la Fiscalía en cuanto a la investigación y/o promoción de la acción penal...”.

Consecuentemente, *a pesar de la existencia de una denuncia formal y de una resolución judicial, la autoridad demandada no ejerció las funciones constitucionales de dirigir la investigación de los delitos e incoar la acción penal, tratando incluso de eludir esas obligaciones*.

La Fiscalía General de la República alegó que, luego de que fue dilucidada la controversia respecto a la autoridad a la que le correspondía realizar la investigación del homicidio colectivo de San Francisco Angulo, procedió a realizar las diligencias de investigación correspondientes, cumpliendo con su rol. Al respecto, se advierte que, efectivamente, la autoridad demanda, del 4-XI-2011 al 17-I-2012, realizó algunas actividades investigativas, pues, además de emitir la correspondiente dirección funcional en 2 ocasiones, efectuó peticiones a diversas instituciones para recabar información.

Sin embargo, con posterioridad al 17-I-2012, la Fiscalía General de la República no ha realizado más diligencias de investigación ni ha estado pendiente del cumplimiento de las actividades investigativas encomendadas a los investigadores de la Policía Nacional Civil. En ese sentido, la autoridad demandada no ha dirigido la investigación del delito, pues esta no puede limitarse a la simple emisión del documento conocido como “dirección funcional”, sino que implica la realización de todas las actuaciones necesarias que se relacionen con los hechos denunciados y, así, determinar si se está o no en presencia de un ilícito penal. Para ello, tiene que analizar los resultados de la investigación y, si es necesario, proponer nuevas diligencias que posibiliten el cabal cumplimiento de su función constitucional, con el fin de proteger los derechos fundamentales. Así, *a pesar de haberse realizado ciertas diligencias de investigación, las mismas no se pueden considerar suficientes para satisfacer la obligación constitucional de dirigir la investigación de los delitos*.

Al respecto, la CrIDH ha sostenido que el Estado “...está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de *investigar seriamente* con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” --cursivas de este Tribunal-- (Caso Velásquez Rodríguez vrs. Honduras, párr. 174). En similar sentido se expresó en el Caso Hermanas Serrano Cruz vrs. El Salvador, en el cual estableció que los “...familiares de las presuntas



víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido [...] sea *efectivamente investigado* por las autoridades del Estado...” (párr. 64).

(iv) Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Tribunal concluye que la Fiscalía General de la República tuvo, desde el año 2005, la obligación constitucional de investigar los hechos relativos al homicidio colectivo de San Francisco Angulo ocurrido, según los denunciantes, el 25-VII-1981, ya que, entre sus funciones, se encontraban las de investigar oficiosamente los delitos y de perseguir a los responsables. Asimismo, a pesar de haberse realizado algunas diligencias de investigación, estas se efectuaron entre finales del 2011 y principios del 2012, lo que implica una dilación injustificada, y, en todo caso, la actividad investigativa fue insuficiente, descuidada e ineficaz a la luz de su obligación constitucional. Y es que el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que depende de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad.

La CrIDH ha establecido que “...el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales *en tiempo razonable*, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Asimismo, el Tribunal ha señalado que los órganos estatales encargados de la investigación [...], cuyos objetivos son [...] el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción, *deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustiva*” –resaltados de este Tribunal– (Caso Contreras y otros vrs. El Salvador, párr. 145).

Además, debe tenerse en cuenta que los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos para cumplir su objetivo. En efecto, el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y, en algunos casos, la imposibilidad de obtener las pruebas y/o testimonios –en el presente caso ya fallecieron 2 de los denunciantes y testigos–, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz la práctica de diligencias probatorias para esclarecer los hechos materia de investigación, la identificación de los posibles autores y partícipes y la determinación de las eventuales responsabilidades penales. Pero ello no implica que la autoridad demandada esté exenta de realizar todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de su obligación de investigar.

En ese sentido, la Fiscalía General de la República debe considerar la jurisprudencia de la CrIDH, la cual establece, por un lado, que, “[e]n aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, que



ocurrieron en el marco de operativos de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, y la estructura en la cual se ubicaban las personas probablemente involucradas en los mismos, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación” (Caso Contreras y otros vrs. El Salvador, párr. 146), y, por el otro, que “... son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos...” (Caso Hermanas Serrano Cruz vrs. El Salvador, párr. 172). Aunado a ello, este Tribunal sostuvo en la Sentencia del 26-IX-2000, Inc. 24-97, que “...la amnistía [...] es aplicable únicamente en aquellos casos en los que el mencionado curso de gracia no impida la protección en la conservación y defensa de los derechos de las personas, es decir cuando se trata de delitos cuya investigación no persigue la reparación de un derecho fundamental”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, entre las Unidades Técnicas y de Asesoría que dependen directamente del Fiscal General de la República, se encuentra el *Fiscal de Derechos Humanos* (arts. 6 y 34 del Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República). Dicho funcionario, según información oficial alojada en el sitio web <http://www.fiscalia.gob.sv> y que, por lo tanto, es de libre acceso al público, es el responsable de apoyar la gestión del Fiscal General de la República en lo que concierne a la efectiva aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Interno en esa temática. Entre sus funciones, se encuentran las de asesorar al Fiscal General en materia de derechos humanos y de apoyar esfuerzos o mecanismos para defender los intereses del Estado en dicha materia. En ese sentido, el Fiscal General de la República cuenta con un funcionario idóneo para coadyuvar en la investigación y tramitación de casos complejos en los que se ven afectados gravemente los derechos fundamentales de las personas.

Por todas las razones anteriores, se concluye que *el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los señores Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María Elvira Rodríguez Martínez, Ignacia Geovanny Ábrego Moreno, Eusebia Mirna Martínez Turcios, Ana Miriam Ábrego Moreno, Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido, según los demandantes, el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, departamento de San Vicente, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva ni diligente. Ello ha devenido en una obstaculización a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del acceso a los órganos jurisdiccionales para que estos se pronuncien sobre su pretensión. En ese sentido, al no existir una investigación y búsqueda de información sobre la verdad de los hechos –con las características de seriedad, exhaustividad*



y diligencia-, no es posible la justicia ni la posterior reparación integral. Por tal razón, es procedente estimar este punto de la pretensión de la parte actora.

E. Establecido lo anterior, se procederá a examinar la segunda pretensión de la parte actora, esto es, si Fiscal General de la República vulneró el derecho de petición del señor Medardo Mijango González y otros, al omitir darles respuestas a los escritos que presentaron, por medio de su apoderada, en relación con la denuncia relativa al homicidio colectivo de San Francisco Angulo.

a. Con la documentación antes relacionada, se ha comprobado que la apoderada de la parte actora, junto con otros miembros del CPDHML, suscribió los escritos de fechas 17-VI-2010 –presentado el 17-VI-2010–, 13-VII-2010 –2 escritos, presentados el 15-VII-2010 y el 16-VII-2010–, 24-XI-2010 –presentado el 16-XII-2010– y 16-XII-2010 –presentado el 17-XII-2010–, dirigidos o con copia al Fiscal General de la República, en los cuales solicitaron la investigación de los hechos denunciados relativos al homicidio colectivo en San Francisco Angulo del 25-VII-1981. Además, mediante dichos escritos se solicitó: la certificación de algunas diligencias; la realización de algunas diligencias –v.gr., recabar información sobre los jefes militares y acciones militares reportadas en la zona durante la época del homicidio colectivo y realizar entrevistas a los familiares de las víctimas y otros testigos–; y, además, que se notificaran a los familiares de las víctimas de tal homicidio colectivo de San Francisco Angulo los avances de la investigación y se concedieran reuniones para el mismo efecto.

En ese sentido, se logran comprobar las peticiones efectuadas por la parte demandante y, además, que dichos escritos fueron recibidos por la autoridad demandada, pues en ellos constan sello y firma de recepción. Efectivamente, se deduce, por un lado, que el Fiscal General de la República tuvo conocimiento de las solicitudes efectuadas y, por el otro, que aquel era la autoridad competente y obligada a dar respuesta a lo solicitado, ya que los requerimientos efectuados por la parte actora tenían relación directa con la denuncia interpuesta referida a que se investigara el homicidio colectivo ocurrido el 25-VII-1981 en San Francisco Angulo y que, así, se tutelaran los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Sin embargo, de los elementos aportados en el presente proceso, se advierte que la autoridad demandada no ha realizado ni comunicado resolución alguna respecto a los requerimientos efectuados por los peticionarios, a pesar de haberse proporcionado dirección, número telefónico e, incluso, correo electrónico para recibir notificaciones.

b. Pues bien, teniendo en cuenta la caracterización del derecho de petición que se hizo más arriba, la parte demandada estaba obligada a: (i) documentar el hecho de la recepción de la solicitud; (ii) admitirla, si procedía, y darle el trámite correspondiente –v.gr., remitirla al departamento o unidad competente–; (iii) resolver lo solicitado –favorable o desfavorablemente– de forma motivada, congruente y en un plazo razonable; y (iv) comunicar a



los peticionarios la resolución adoptada. En ese sentido, dado que *la autoridad demandada no ha emitido ni proporcionado una respuesta a los diversos escritos presentados por la parte actora ni, mucho menos, le ha comunicado la decisión adoptada o el trámite a seguir previo a ello, este Tribunal concluye que el Fiscal General de la República vulneró el derecho de petición de los señores Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María Elvira Rodríguez Martínez, Ignacia Geovanny Ábrego Moreno, Eusebia Mirna Martínez Turcios, Ana Miriam Ábrego Moreno, Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado. En consecuencia, resulta también procedente estimar este punto de la pretensión planteada.*

VI. Determinada la vulneración de los derechos fundamentales del señor Medardo Mijango González y otros, por parte del Fiscal General de la República, corresponde establecer en este apartado el efecto restitutorio de la presente sentencia.

1. A. En la Sentencia del 15-II-2013, Amp. 51-2011, se indicó que el art. 245 de la Cn. regula lo relativo a la responsabilidad por daños en la que incurren los funcionarios públicos como consecuencia de una actuación dolosa o culposa que produce vulneración de derechos constitucionales, la cual es personal, subjetiva y patrimonial. A su vez, de dicha disposición se colige que, cuando dentro de la fase de ejecución del proceso respectivo se constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar los daños materiales y/o morales ocasionados con la conculcación de derechos constitucionales, el Estado, en posición de garante, asume subsidiariamente el pago de dicha obligación –lo que, en principio, no le correspondía–.

B. Por otro lado, el art. 35 de la L.Pr.Cn. establece, en su parte inicial, el efecto material de la sentencia de amparo, el cual tiene lugar cuando existe la posibilidad de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. En cambio, cuando dicho efecto no es posible, la sentencia de amparo se vuelve meramente declarativa, dejándole expedita al amparado la posibilidad de incoar un *proceso* en contra del funcionario por la responsabilidad personal antes explicada.

Ahora bien, tal como se sostuvo en el mencionado Amp. 51-2011, la citada disposición legal introduce una condición no prevista en la Constitución y, por ello, no admisible: el que la “acción civil de indemnización por daños y perjuicios” solo procede cuando el efecto material de la sentencia de amparo no es posible. Y es que esta condición, además de injustificada, carece de sentido, puesto que el derecho que establece el art. 245 de la Cn. puede ejercerse sin necesidad de una sentencia estimatoria de amparo previa.

Así, teniendo en cuenta que en la actualidad el proceso de amparo está configurado legal y jurisprudencialmente como declarativo-objetivo y, por ende, no tiene como finalidad el establecimiento de responsabilidad alguna, en la sentencia mencionada se concluyó que, según



el art. 35 de la L.Pr.Cn., interpretado conforme al art. 245 de la Cn., cuando un fallo sea estimatorio, con independencia de si es posible o no otorgar un efecto material, se debe reconocer el derecho que asiste al amparado para promover, con base en el art. 245 de la Cn., el respectivo proceso de daños directamente en contra del funcionario responsable por la vulneración de sus derechos fundamentales y subsidiariamente al Estado.

2. A. a. En el caso particular, en cuanto a la vulneración de los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad, el efecto reparador se concretará en *ordenar al Fiscal General de la República que efectúe, dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad de los hechos ocurridos el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, departamento de San Vicente, y que, en caso de que, a su criterio, se haya cometido algún delito, ejerza de inmediato la acción penal, a fin de que oportunamente se realice un juicio inmediato, independiente e imparcial en el que se sancione a los autores intelectuales y materiales del mismo.*

Además, teniendo en cuenta que la sociedad tiene el legítimo derecho e interés de saber la verdad respecto de hechos que vulneren gravemente los derechos fundamentales de las personas, *la Fiscalía General de la República deberá dar a conocer públicamente los resultados de la investigación sobre el homicidio colectivo ocurrido, según los demandantes, el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, departamento de San Vicente. Asimismo, en caso de ejercer la acción penal por estarse en presencia de algún delito, deberá informar públicamente sobre los resultados del proceso penal para que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido.*

b. Por otro lado, en relación con la vulneración del derecho de petición, el efecto restitutorio se concretará en *ordenar al Fiscal General de la República que proporcione respuesta a las peticiones formuladas mediante los escritos de fechas 17-VI-2010 –presentado el 17-VI-2010–, 13-VII-2010 –2 escritos, presentados el 15-VII-2010 y el 16-VII-2010–, 24-XI-2010 –presentado el 16-XII-2010– y 16-XII-2010 –presentado el 17-XII-2010–. Tal respuesta deberá ser emitida y comunicada dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia.*

B. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1º de la L.Pr.Cn., *la parte actora tiene expedita la vía judicial indemnizatoria por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales constatada en esta sentencia directamente en contra de las personas que ocuparon el cargo de Fiscal General de la República mientras persistieron las vulneraciones aludidas. De incoarse esta vía, la jurisdicción ordinaria competente deberá constatar la existencia del daño, el nexo de causalidad entre este y las omisiones cuestionadas, la antijuridicidad de dichas omisiones y, dado que se trata de una responsabilidad de carácter personal, el dolo o la culpa del funcionario.*



POR TANTO, con base en las razones expuestas y en los arts. 2, 6 y 18 de la Constitución y 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala **FALLA:** (a) *Sobreséese* en el presente amparo la supuesta vulneración del derecho a la protección jurisdiccional, en su manifestación de prohibición de dilaciones indebidas en la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal; (b) *Sobreséese* en el presente amparo la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica –por inobservancia del principio de legalidad–; (c) *Declárase que ha lugar* el amparo solicitado por los señores Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María Elvira Rodríguez Martínez, Ignacia Geovanny Ábrego Moreno, Eusebia Mirna Martínez Turcios, Ana Miriam Ábrego Moreno, Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado, contra el Fiscal General de la República, por la vulneración de sus derechos a la protección jurisdiccional –en su manifestación del derecho de acceso a la jurisdicción–, a conocer la verdad y de petición; (d) *Ordénase* al Fiscal General de la República que efectúe, dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo ocurrido, según los demandantes, el 25-VII-1981 en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, departamento de San Vicente, y que, en el caso de que, a su criterio, se haya cometido algún delito, ejerza de inmediato la acción penal; además, deberá dar a conocer públicamente los resultados de la investigación sobre el homicidio colectivo aludido y, en caso de ejercer la acción penal, deberá informar públicamente los resultados del proceso penal; (e) *Ordénase* al Fiscal General de la República que proporcione una respuesta a las peticiones formuladas mediante los escritos de fechas 17-VI-2010 –presentado el 17-VI-2010–, 13-VII-2010 –2 escritos, presentados el 15-VII-2010 y el 16-VII-2010–, 24-XI-2010 –presentado el 16-XII-2010– y 16-XII-2010 –presentado el 17-XII-2010–, la cual deberá ser emitida y comunicada dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia; (f) *Queda expedita a la parte actora* la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales constatada en esta sentencia directamente en contra de las personas que ocuparon el cargo de Fiscal General de la República mientras persistieron las vulneraciones aludidas; y (g) *Notifíquese*.-

-----F. MELÉNDEZ-----FCO. F. ORTIZ R.-----J. B. JAIME-----E. S. BLANCO R.-----R. E. GONZÁLEZ B.-----
-----PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN-----
-----E. SOCORRO C.-----RUBRICADAS-----

Y para que le sirva de legal notificación _____ le _____ extendiendo la presente, San Salvador,
a las once horas y veintidós minutos del
día cinco de febrero de dos mil catorce.

A SUSCRITA NOTARIA CERTIFICA: Que
la presente fotocopia es fiel y conforme con su
original, con el cual confronté. Y para los efectos
del Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial
y la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
firmo y sello la presente, en la ciudad de
San Salvador, a los veintinueve días del
mes de marzo del año dos mil catorce.





NUE 67-A-2013 (JC)

BAIRES Y OTROS contra MINISTERIO DE LA DEFENSA

Recurso de Revocatoria

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas del treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

Por recibido el escrito presentado por los ciudadanos CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARCOS DE JESÚS PORTILLO REGALO, BUENAVENTURA ALAS RIVERA, LEONOR VICTORIA PINEDA VIUDA DE MEJÍA, ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA y CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA, de fecha 19-III-2014, por medio del cual contestan el traslado conferido por este Instituto con relación al recurso de revocatoria presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional –en adelante MDN– en fecha 6-III-2014, contra la resolución definitiva proveída por este Instituto en fecha 25-II-2014, y que le fue notificada al ente obligado el 3-III-2014.

I. En el planteamiento del recurso, y en la contestación de los ciudadanos al mismo, las partes expresaron sus argumentos de la forma siguiente:

A) La entidad obligada alega una supuesta infracción al principio de legalidad por vulneración al elemento volitivo formal del acto administrativo en las resoluciones de este Instituto, pues según el apoderado del MDN, la resolución definitiva solamente está firmada por tres de los cinco Comisionados que integran el pleno de este Instituto; arguyendo dicho apoderado, que para que las resoluciones emitidas por esta Administración tengan validez deben contar con las opiniones de todos los integrantes del pleno, de conformidad con los Arts. 52 y 96 de la LAIP, y Art. 60 del RELAIIP. A propósito de esto, citó la Sentencia de Inconstitucionalidad de las doce horas del 1-III-2014 con referencia 78-2011, en la que el tribunal Constitucional expresó –de manera

resumida– que la diferencia de opiniones combate el dogmatismo que supone la certeza de las respuestas indiscutibles y expande el análisis y abre el espacio para tesis que de otro modo serían silenciadas.

Respecto de este punto, los ciudadanos apelantes –al momento de contestar el traslado conferido por este Instituto– contestaron que la “amalgama de sofismos jurídicos” invocados por el MDN carecen de veracidad pues el Art. 60 de la LAIP hace referencia a la validez de las sesiones del Instituto con la comparecencia de los cinco comisionados integrantes del pleno, más no hace referencia al acto administrativo emanado de la resolución colegiada. Reiteraron que no debe confundirse *“la validez de las sesiones del Instituto con la validez de sus resoluciones, ya [que] dicho procedimiento y acto administrativo tienen requisitos diferentes.”*

B) Asimismo, el apoderado del MDN alegó una supuesta infracción al *principio de legalidad por el exceso de competencia del IAIP* para ordenar al ente obligado a recuperar o reconstruir la información solicitada por los peticionarios, por contravención a lo dispuesto en el Art. 58 y 96 de la LAIP.

Además, expresó el apoderado del MDN, que este Instituto ha juzgado el presente caso en base a estándares de otros países y que, por tanto, no deben ser aplicados dichos criterios en sus resoluciones. Señaló también que los casos *Claude Reyes y otros vs Chile*; y *Gómez Lund y otros vs Brasil*, no versan sobre el mismo supuesto sobre el cual se controvertió el presente caso y por ende, dichos criterios no deben ser aplicables.

Ese desencaje en el contexto de los precedentes de la CIDH retomados por el IAIP –continuó el recurrente– *“(...) vuelve arbitrariamente lúgubres el papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado de El Salvador. En esa perspectiva, sin una investigación y adecuación histórica apropiada sobre el particular (...) el IAIP incumple el deber de buscar la verdad material en sus resoluciones administrativas; mermando contra sí mismo la legalidad, legitimidad, claridad y contexto histórico de sus productos normativos”*.

C) También señaló el MDN en su recurso que este Instituto realizó una afirmación inapropiada al catalogar la resolución definitiva del presente proceso como *complementaria* a la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en el amparo 665-2010, de fecha 5-II-2014; pues se argumentó que es *“alambicado y excesivo considerar que las decisiones de la Sala de lo Constitucional necesiten de complementariedad administrativa para su ejecución; precisamente, por el trecho existente entre la divergencia de los alcances entre la tutela judicial y lo limitado de la tutela administrativa.”* (Negritas añadidas)

Al respecto, los ciudadanos contestaron el anterior argumento que su recurso de apelación ante este Instituto tiene como objetivo el conocimiento de hechos para el esclarecimiento de la verdad de los mismos, que fueron relatados por numerosas víctimas sobrevivientes de operativos militares. En el proceso de amparo constitucional 665-2010 –continuaros los ciudadanos– se reprodujeron muchos testimonios de testigos de dichos operativos, testimonios que por su naturaleza son prueba al interior de dicho proceso judicial, por lo que consideran pertinente que este Instituto retome lo expresado en sentencia de dicho proceso de amparo, ya que a su juicio busca el agotamiento de la búsqueda de la información con el objetivo de encontrar la justicia, así también, retomar los criterios de tribunales internacionales en materia de Derechos Humanos.

D) Por otro lado, el MDN señaló una supuesta *contravención al principio de verdad material, al principio de contradicción y aportación de prueba* dentro del procedimiento de apelación. En cuanto al principio a la verdad material se argumentó en el recurso de revocatoria que las decisiones de la Administración Pública deben ser resueltas con base a hechos reales, más allá de los que hayan sido alegados y probados por el interesado.

A la vez, se acusó a este Instituto de favorecer indiscutiblemente la prueba presentada por los apelantes, sobre todo la que tiene que ver con las violaciones a derechos fundamentales y de no haber sido tomada en cuenta la prueba presentada esa entidad obligada. Por esta razón, el apoderado del MDN incorporó en su recurso de

revocatoria –en virtud del Art. 312 del CPCM– declaración jurada del Sargento Mayor de Brigada José Arístides Reinoza, experto en comunicaciones militares.

E) Asimismo, ante la afirmación de este Instituto sobre que el MDN no identificó cuales fueron las diligencias que realizó para confirmar o no la existencia de la información solicitada, el recurrente incorporó actas notariales de los señores Guadalupe Alberto Cortez y Krissia Adlyd Tenorio Franco, con las cuales pretende describir dichos procedimientos de búsqueda.

F) Por su parte, los ciudadanos peticionarios, alegaron que aunque el MDN no está obligado a lo imposible, sí está obligado a hacer lo posible por relucir la verdad de los hechos del conflicto armado. Sumado a lo anterior, destacaron que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), así como en el informe de la Comisión de la Verdad, se ha establecido que las masacres ocurridas en el país durante el conflicto armado fueron ejecutadas en el marco de operaciones militares. Para tal efecto, adjuntaron un ejemplar del libro “Masacres, trazos de la historia salvadoreña contados por las víctimas”, del Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Legadec”, segunda edición, El Salvador, 2007, el cual consiste en una recopilación de testimonios donde se hace referencia a los casos de ejecuciones múltiples ocurridas durante el conflicto armado.

II. Luego de expuestos los motivos de revocatoria argumentados por el ente obligado, así como la contestación a dicho recurso hecha por los ciudadanos, este Instituto, antes de proceder a analizar los argumentos de las partes y pronunciarse sobre los mismos, considera oportuno resolver sobre los elementos probatorios aportados por ambas partes.

Y es que, el apoderado del MDN, justifica la aportación probatoria consistente en declaraciones juradas, actas notariales y constancias de servicio activo en la Fuerza Armada, en base al Art. 102 de la LAIP en relación con el Art. 312 del CPCM. Al respecto, cabe hacer la aclaración que ésta última disposición no regula más que el *derecho de probar*, que como derecho mismo no es absoluto y no puede ejercerse al

arbitrio de las partes intervinientes en los procesos administrativos y/o judiciales, sino bajo los límites que establecen la Constitución y las leyes.

Ante la falta de regulación procesal que contempla la LAIP en las disposiciones referentes al recurso de revocatoria, este Instituto se avoca al Art. 102 de la misma Ley que da la posibilidad de complementar a la misma con las normas del derecho común, de manera que se apliquen aquellas normas del Código Procesal Civil y Mercantil que le fueren afines a dicho recurso y que no colisionen con las normas contenidas de la LAIP.

Así las cosas, al analizar la arquitectura procedimental del recurso de revocatoria se puede advertir que el mismo no contempla una etapa para el desahogo de prueba, debido a su tramitación rápida y sencilla, y por su carácter de *no devolutivo*, es decir, que conoce de dicho recurso el mismo ente que dictó la resolución impugnada, y además, por ser un recurso meramente argumentativo. Por tanto, la prueba aportada por el apoderado del MDN, que consiste en: (i) Declaración jurada del Sargento Mayor de Brigada José Aristides Reinoza Quintanilla; (ii) Constancia de servicio activo del Sargento Mayor de Brigada José Aristides Reinoza Quintanilla; (iii) Acta notarial del señor Guadalupe Alberto Cortez; (iv) Constancia de servicio activo del señor Guadalupe Alberto Cortez; (v) Acta notarial de la señora Krissia Adlyd Tenorio Franco; (vi) Constancia de servicio activo de la señora Krissia Adlyd Tenorio Franco; así como el documento aportado por los ciudadanos, relativo a un ejemplar del libro “Masacres, trazos de la historia salvadoreña contados por las víctimas” del Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Legadec”, segunda edición, El Salvador, 2007; deben rechazarse por inadmisibles y no ser tomados en cuenta en la deliberación de este Instituto, pues, debieron ser aportados en el momento procesal oportuno el cual era hasta el momento de la audiencia oral del recurso de apelación, la cual tuvo lugar el 10-I-2014.

III. Sobre la inconformidad del MDN que la resolución impugnada solo haya sido firmada por tres de los cinco que podían firmar, según el apoderado del ente obligado, cabe aclarar, que la sentencia citada por el recurrente de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, marcada con referencia Inc. 78-2011, no es del todo aplicable al presente caso, pues son supuestos diferentes dada la configuración orgánica de este Instituto. De manera que,

la sentencia citada hace referencia a aquellos órganos colegiados en el que sus integrantes pueden ejercer su voto en todos los casos, como sería por ejemplo, el caso de la CSJ o las Salas de la misma, o el Tribunal Supremo Electoral; sin embargo, en el Art. 87 de la LAIP, se establece que: *“Admitido el recurso o denuncia, el Instituto lo someterá a uno de sus comisionados el caso de manera rotativa. (...) Este comisionado no participará en las decisiones del pleno referentes al caso”*. Por lo que al ser excluido el comisionado designado de las decisiones del caso solo se cuenta con cuatro votos posibles y no con cinco, como sostiene el MDN.

Aclarado lo anterior, el Art. 52 inciso 3° de la LAIP, establece que el Instituto *“adoptará sus decisiones por mayoría simple”*, lo que le genera a este órgano garante una habilitación legal para tomar sus decisiones con tan solo tres votos, lo cual no quiere decir que el caso no haya sido sometido a conocimiento del cuarto comisionado con opción de voto.

Además, se advierte una inconsistencia en el argumento del MDN, pues el Art. 60 del RELAIP expresa que para que las *sesiones* del Instituto sean válidas deben estar los cinco Comisionados, pero al hablar de sesiones, no se está hablando de votaciones, ya que el mismo artículo en su parte última repite lo establecido en el Art. 52 de la LAIP, en cuanto a que las resoluciones podrán tomarse con mayoría simple. Por lo que la petición de revocatoria respecto de este punto deberá ser declarada sin lugar.

IV. Respecto al alegato de que este Instituto excedió sus competencias al ordenar reconstruir la información solicitada por los ciudadanos, debe aclararse que, la Sala de lo Constitucional expresó que: *“(...) el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional requiere de esta Sala la elaboración de criterios jurisprudenciales uniformes que, en la mayor medida de lo posible, suministren seguridad jurídica en relación con la interpretación y aplicación que se hace de las disposiciones constitucionales. Dicha labor obliga a entender a la jurisprudencia constitucional como una actividad racional y argumentativa creadora de reglas constitucionales, las cuales han de convertirse en un canon de obligatoria observancia para este Tribunal –autoprecedente– y para las otras entidades jurisdiccionales –precedentes verticales–, así como para los particulares y*

los poderes públicos, con el fin de poder dirimir los casos futuros, siempre y cuando estos guarden una semejanza relevante con los ya decididos. (Negritas añadidas)

En ese sentido, la mencionada concepción obliga a reafirmar nuestro sistema de fuentes del Derecho, toda vez que ha de aceptarse que la *jurisprudencia constitucional* es parte del mismo y, por tanto, de obligatoria observancia para los intérpretes y aplicadores del ordenamiento jurídico.

Lo afirmado encuentra basamento en la necesidad de mantener la coherencia del ordenamiento jurídico –lo cual es una exigencia del principio de seguridad jurídica–, ya que, ante la falta o exceso de previsión normativa o, en su caso, de indeterminación jurídica, es necesario que exista una “red de precedentes” mediante los cuales se *concrete* qué es lo que está ordenado, prohibido o permitido desde la perspectiva constitucional.” (SSC-CSJ, Explicación de efectos Inc. 11-2005 de las diez horas con cuarenta y un minutos del 23-XI-2011)

Visto lo anterior y entendiendo a la jurisprudencia constitucional como reglas constitucionales de obligatorio cumplimiento, este Instituto retomó la sentencia de Amparo 665-2010, del 5-II-2014, en la cual se dotó de contenido al *derecho a conocer la verdad* y se aplicó al caso en concreto, pues la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres; así el derecho a conocer la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre aquellos hechos que hayan ocasionado vulneraciones a derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon y por lo tanto, implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.

En ese sentido, este Instituto recalcó el criterio de la Sala de lo Constitucional sobre la obligación de los entes estatales de realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que le permitan llegar a la verdad de los hechos; sobre todo, cuando *la información es hoy en día una necesidad de*

carácter vital, elevada al rango de derecho fundamental de la persona en razón de su propia naturaleza, que debe ser reconocida y respetada por todo poder, autoridad y norma positiva.

V. Sobre el punto en que el MDN manifiesta que este Instituto ha errado en el juzgamiento del presente proceso por haberse basado en estándares de otros países. Estimamos que el *Derecho comparado* es una herramienta útil para conocer, comprender y asimilar de mejor forma aquellos casos que en nuestro país no han tenido resonancia jurídica. Pues es de hacer notar que a los pocos años de vigencia de la LAIP, la cultura de transparencia y acceso a la información en nuestro país aun se encuentra sensible y es necesario desarrollarla con criterios jurídicos que en otros países han dado paso a una modernidad democrática efectiva para los ciudadanos. Sin embargo, este Instituto solo aplica aquellos criterios que no contravienen las leyes de nuestro país, y lo hace en total observancia de las normas y reglas constitucionales.

Señaló también el MDN que los casos *Claude Reyes y otros vs Chile*; y *Gómez Lund y otros vs Brasil*, no versan sobre el mismo supuesto sobre el cual se controvertió el presente caso y por ende, dichos criterios no debieron ser aplicados. Sin embargo, este Instituto aplicó únicamente aquellos criterios que no resultaban incompatibles con el presente caso, pues aunque los procesos citados de la CIDH versaban sobre información confidencial y reservada, fueron aplicados si resultaban análogos al juzgamiento del presente caso en concreto, por lo que es un verdadero desengaño sostener que los precedentes de la CIDH “(...) vuelven arbitrariamente lúgubres el papel de las *Fuerzas Armadas en el conflicto armado de El Salvador*”, como sostuvo el MDN en su escrito de revocatoria. Por lo que no es cierto que este Instituto ha infringido con sus resoluciones administrativas la legalidad, legitimidad, claridad y contexto histórico de sus productos normativos; todo lo contrario, le ha impregnado a sus resoluciones doctrinas contemporáneas relacionadas con el acceso a la información, la transparencia estatal, la publicidad de los actos de gobierno y la democracia informativa. Dicho lo anterior, la revocatoria respecto de estos puntos se declarará sin lugar.

VI. El MDN también manifestó en su recurso que este Instituto realizó una afirmación inapropiada al catalogar una de sus resoluciones como “complementaria” a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pues dichas sentencias no necesitan una complementariedad administrativa para su ejecución. Al respecto, haciendo una explicación de la literalidad de la resolución impugnada, lo que este Instituto intentó expresar es que su resolución debe entenderse como complementaria, o más bien paralela a la sentencia constitucional, dado que ambas resoluciones mantienen la misma línea jurídica y la resolución de este Instituto no difiere de lo pronunciado en dicho fallo constitucional, pues la resolución impugnada se adhiere a los estándares exigidos en la resolución de explicación de efectos Inc. 11-2005 –previamente citada– pues, mantiene y respeta los precedentes constitucionales fijados por la Sala de lo Constitucional.

POR TANTO, de conformidad con las razones antes expuestas y Arts. 6 y 18 Cn.; 95 y 102 de la LAIP, y 505 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Instituto **RESUELVE**:

a) *Declárese sin lugar* el recurso de revocatoria, en todas sus partes, planteado por el Ministerio de la Defensa Nacional, respecto de revocar la resolución emitida por este Instituto en la que se ordenó al servidor público Gral. DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS, titular de dicho ente obligado, que ejecute las diligencias necesarias para recuperar o reconstruir la información requerida y entregarla a los ciudadanos solicitantes;

b) *Estese a lo dispuesto* en la resolución emitida por este Instituto a las nueve horas y treinta minutos del 7-I-2014, *so pena de proceder al inicio del procedimiento sancionatorio* por la causal del Art. 76 Lit. “c” del apartado de Infracciones Graves, de la LAIP.

Notifíquese.-



PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

UM

NOTIFICACIÓN NUE 67-A-2013 Resolución de revocatoria

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

11 de abril de 2014, 10:57

Señores (as):

Carolina Constanza Baires

Heli Jeremías Hernández Hernández

Marcos de Jesús Portillo Regalo

Buenaventura Alas Rivera

Leonor Victoria Pineda Vda. de Mejía

Presentes.

A través de este medio, se les adjunta resolución del recurso de revocatoria, interpuesto en relación al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se les solicita enviar acuse de recibido.

Milton Hernández

Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

NUE 67-A-2013 Resolución de revocatoria (Ciudadanos).pdf
3861K

11 de abril de 2014, 10:57

Licda. Claudia Lizbeth Interiano Quijada

Presente.

A través de este medio, se le adjunta resolución del recurso de revocatoria, interpuesto en relación al caso NUE 67-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Milton Hernández

Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

➤ NUE 67-A-2013 Resolución de revocatoria (Ciudadano).pdf
3988K

11 de abril de 2014, 14:17

Buenas tardes, Señores IAIP:
Por recibida la notificación,
Saludos cordiales,

Claudia Interiano

De: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

· Enviado: viernes, 11 de abril de 2014 10:57

Asunto: NOTIFICACIÓN NUE 67-A-2013 Resolución de revocatoria

[El texto citado está oculto]

VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 11 horas con 35 minutos del día
11 del mes de abril del año dos mil catorce, se procedió a
notificar en legal forma a Joel Antonio Rivas Moreno
en su calidad de Oficial de Información del Min. de la Defensa
la resolución de referencia 67 - A - 2013 de las 08 horas
con 00 minutos del día 31 del mes de
marzo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en
Ministerio de la Defensa Nacional, Km. 5 1/2, Carretera
a Santa Tecla, San Salvador
la cual fue recibida por Carolina Abrego
quien se identifica con su
Documento Único de Identidad número _____, cuyo
cargo es Secretaria OIR - MDN


Firma de quien la recibe




Firma del Notificador



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 11 horas con 36 minutos del día
11 del mes de abril del año dos mil catorce, se procedió a
notificar en legal forma a René Arnoldo Cartellón Mejía
en su calidad de Apoderado Especial del Min. de la Defensa
la resolución de referencia 67-A-2013, de las 08 horas
con 00 minutos del día 31 del mes de
marzo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en
Ministerio de la Defensa Nacional, K.m 5 1/2, Carretera
a Santa Tecla
la cual fue recibida por Carolina Abrego
quien se identifica con su
Documento Único de Identidad número _____ cuyo
cargo es Secretaria OIR-MDN

Firma de quien la recibió

Firma del Notificador

REF.: 67-A-2013 (JC)

SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, de generales conocidas en el referido expediente a ustedes respetuosamente **EXPONGO**:

Que por este medio y de conformidad con los Art. 61, 62 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, vengo ante esta instancia a solicitar se me proporcione copia certificada del referido expediente, comprometiéndome a sufragar los gastos que mi solicitud genere.

Asimismo, comisiono a la Licenciada **MARÍA JOSÉ GIRÓN**, mayor de edad, Abogada, con Documento Único de Identidad numero ; y/o a la señorita **SUSANA CECIBEL GAVARRETE GALDÁMEZ**, mayor de edad, Estudiante, con Documento Único de Identidad número: ; para que cualquiera de ellas pueda retirar las copias solicitadas.

Por lo antes expuesto, **PIDO**:

- Se me admita el presente escrito,
- Se me proporcione copia certificada del expediente mencionado,
- Se tengan por comisionadas a **MARÍA JOSÉ GIRÓN**, y/o **SUSANA CECIBEL GAVARRETE GALDÁMEZ**, para retirar las copias solicitadas.

San Salvador, treinta de Abril de dos mil catorce.


LIC. RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA
A B O G A D O



Presentado por

Silvia Carolina Guzmán Álvarez

Quién se identifica con DUI a las 15:15 horas

del 30 de 4 de 20 14. Junto con



VERSIÓN PÚBLICA. ART. 30 LAIP.
SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

NUE 67-A-2013 (JC)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con treinta y dos minutos del día doce de mayo de dos mil catorce.

A sus antecedentes el escrito presentado el 30 de abril del año 2014, por el **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**, por medio de su apoderado especial, licenciado RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, mediante el cual solicita que se le proporcione copia certificada del presente expediente.

De conformidad con el Art. 166 Inc. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria con base el en Art. 102 de la LAIP, este Instituto **RESUELVE:**

Agréguese al presente expediente el escrito antes relacionado.

Ordénese a la Jefa de la Unidad Jurídica de este Instituto que, de conformidad con el Acuerdo de Pleno número 11, extienda al solicitante una copia certificada del presente expediente.

Entréguese la certificación de este expediente al solicitante.

Requírase al solicitante para que retire en las instalaciones de este Instituto, la copia certificada solicitada, en un plazo de diez hábiles contado a partir de la respectiva notificación.

Tómese nota de las personas comisionadas para retirar la certificación solicitada, licenciadas MARÍA JOSÉ GIRÓN y SUSANA CECIBEL GAVARRETE GALDÁMEZ.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LO SUSCRIBEN

RM

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

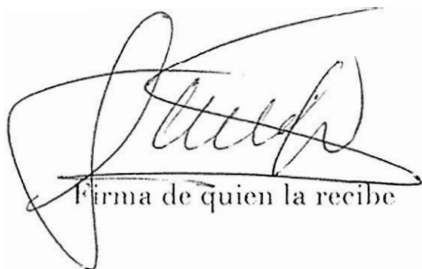
ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez

del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 15 horas con 56 minutos
del día 20 del mes de mayo del año dos mil catorce, se
notificó la resolución de referencia 67-A-2013, de las 11
horas con 32 minutos del día 12 del mes de
mayo del año dos mil catorce, haciéndose presente a la sede de este
Instituto el (la) señor (a) René Arnaldo Castellón Mejía

en su calidad de Apoderado del Ministro de la Defensa Nacional,
quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número


Firma de quien la recibe


Firma del Notificador



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LA INFRASCrita JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADA KRYSSYA MICHAELLE SERMEÑO CAMACHO, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE SE HA HECHO PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO EL LICENCIADO RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, QUIÉN SE IDENTIFICA POR MEDIO DE SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ABOGADO NÚMERO Y QUE HABIENDO CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN DE REFERENCIA NÚMERO 67-A-2013 (JC) MEDIANTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LAS OCHO HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, EN ESTE ACTO SE LE HACE ENTREGA DE UNA COPIA CERTIFICADA DEL REFERIDO EXPEDIENTE, SIN MÁS QUE HACER CONSTAR. FIRMAMOS LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.





Solicitud

Madeleine Lagadec

27 de junio de 2014, 10:59

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Adjuntamos solicitud sobre referencia NUE-67-A-2013 (JC), agradecemos nos confirme de recibido. Gracias.

Área Jurídica

Centro Para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec"
(503) 2282-4756

"El derecho a la verdad es el derecho que asiste a las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también de la sociedad en su conjunto..."

Sentencia Amparo 665-2010. 5 de febrero de 2014.-

Sala de lo Constitucional,

Corte Suprema de Justicia.



Captura.JPG
54K

Presentado por CPdh-juridica@gmail.com
 Quién se identifica con _____ a las 10:50 horas
 del 27 de 6 de 20 14. Junto con un archivo
adjunto



CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

"Madelaine Lagarde"

Calvin Jardín, Calle Londres Casa 19, Majagual

San Salvador, El Salvador

Tel y Fax (503) 22 52 4756

Correo electrónico: cpdh.juridica@gmail.com

Honorable Consejeros/as

Instituto de Acceso a la Información

Presente

Yo, Hernández y Carolina Constanza Baires de generales conocidas, en calidad de "voluntarios", en trámite de solicitud de información ante el Ministerio de la Defensa Nacional, así como de "voluntarios" en recurso de apelación con referencia NDI-67-A-2013 (R) que se interpusiere en conjunto con otros ciudadanos, y que ha conocido este Instituto, proveyendo resolución del mismo con fecha 25 de febrero de los presentes, a USUEDES. Exponemos respectivamente: I. Que han transcurrido cuatro meses calendario desde que se emitió resolución sobre el referido recurso de apelación; II. Que los plazos que imponía la resolución que el Instituto de Acceso a la Información emitió, fueron cumplidos por parte de tiempo por haber ejercido el Ministerio de la Defensa Nacional su derecho a solicitar revocatoria de la decisión del Instituto por tal resolución del día 25 de febrero; III. Que a la fecha el Ministerio de la Defensa Nacional no ha externado mediante ningún medio de comunicación su voluntad formal de cumplir con lo expuesto por este Instituto en la resolución referida, por tanto a Ustedes **SOLICITAMOS:** a. Que, que este Instituto si a la fecha ya caducó el plazo establecido para que el Ministerio de la Defensa cumpla con lo establecido por resolución proveyda el día 25 de febrero de los presentes; b. En lo que compete, exponga a la ley faculta a este Instituto a realizar alguna otra diligencia para hacer cumplir lo dispuesto por tal resolución.

Cualquier comunicación envíarla al correo: y para ser presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, a los 26 días del mes de junio de 2014


Helí Jeremías Hernández


Carolina Constanza Baires





Gabriela Gamez <ggamez@iaip.gob.sv>

Fwd: Nue 67 A 2013

Unidad de Acceso a la Información Pública <uaip@iaip.gob.sv>
 Para: Recepción de Denuncias | IAIP <oficialreceptor@iaip.gob.sv>

15 de marzo de 2016, 11:28

Mensaje reenviado

De: Claudia Interiano <interiano.derechos@gmail.com>

Fecha: 15 de marzo de 2016, 11:10

Asunto: Nue 67 A 2013

Para: uaip@iaip.gob.sv

Cc:

Buen día:

Adjuntamos escrito en seguimiento a Solicitud de Información Nue 67- A-2013.

Favor confirmamos de recibido.

Saludos cordiales

Claudia Interiano

Abogada y Notaria

(503) 22351019

Unidad de Acceso a la Información Pública
 (503) 2205-3800 Fax 2205-3880 Opc. 901
 Avenida Masferrer y Calle al Volcán No.88, Edif. Oca Chang
 uaip@iaip.gob.sv



"Fomentando la cultura de transparencia"



CPDH.jpg
 2521K

Presentado por Claudia Interiano

Se identifica con _____ a las: 11:28

15 de 3 de 20 16. Junto con 1 folio

util



CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
"Madeleine Lagadec"

Ref: No. NUE-67-A-2013

HONORABLE INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

CAROLINA CONSTANZA BAIRES, HELÍ JEREMÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y CLAUDIA LIZBETH INTERIANO QUIJADA en mi calidad de apoderada de **ANDRÉS ANTONIO ROMERO SANTAMARÍA**, de generales conocidas en la solicitud de Información con Referencia NUE-67-A-2013, con el debido respeto SOLICITAMOS:

Se proporcione información sobre las últimas diligencias realizadas por éste Instituto en lo referente al diligenciar de nuestra solicitud, y según corresponda, se extienda fotocopia certificada de los documentos que sea pertinente como ciudadanos y ciudadanas conocer.

Y para los efectos de ser notificados, citamos el correo o en su caso la dirección física

En San Salvador, a los diez días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciséis.-

Helí Hernández
Asesor externo CPDH

F. _____
ia lo
Asesora externa CPDH
Apoderada De Andrés Antonio Romero Santamaría